



informaciones

Herausgeber/Editor:

Deutsch-Spanische
Juristenvereinigung e.V.
Asociación Hispano-Alemana de
Juristas

www.dsjsv-ahaj.org

78 Leitartikel / Editorial**Artikel / Artículos**

- 79 Análisis comparativo del sistema de individualización de las penas en España y Alemania, desde un punto de vista dogmático y práctico
Carlos López-Veraza Pérez
- 82 Die zweite Chance – La segunda oportunidad
Exoneración del Pasivo insatisfecho – Restschuldbefreiung
Dr. Javier Blas
- 90 Minderheitenschutz bei der Gewinnthesaurierung in der GmbH
Ein deutsch-spanischer Rechtsvergleich
Prof. Dr. Holger Fleischer, LL. M. und Jennifer Trinks

Kurzartikel / Artículos breves

- 105 Una reducción general de personal no justifica el cese de un miembro del consejo de dirección
Katharina Haneke, M.A. y Nereida Sánchez Pérez, LL.M.
- 105 Spanische Erbschaftssteuer, wenn Erbe in Spanien und Erblasser in Deutschland residierten und sich der Nachlass in Deutschland befindet
Alexander vom Hofe
- 107 Freno a la subida de los precios de los alquileres en Alemania
Nereida Sánchez Pérez, LL.M. und Philipp Schönenbeck
- 110 Deutsche Gesetzgebung / Legislación alemana
- 118 Spanische Gesetzgebung / Legislación española
- 139 Jurisprudencia española/ Spanische Rechtsprechung
- 143 Junge Juristen / Jóvenes Juristas
- 145 Notizen aus der Vereinigung/ Noticias de la Asociación
- 153 Stellenmarkt/ Bolsa de trabajo
- 156 Impressum / Pie de imprenta

informaciones

Zeitschrift für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr / Revista jurídica hispano-alemana

Schriftleitung/

Redacción:

Michael Fries

Alfonso XII, 30, 5^a planta, E – 28014 Madrid

Tel.: (0034) 91 319 96 86 Fax: (0034) 91 308 53 68

E-mail: mfries@meee.es

INHALTSVERZEICHNIS / ÍNDICE

Seite/Pág.

Leitartikel / Editorial	78	
Aufsätze / Artículos		
Análisis comparativo del sistema de individualización de las penas en España y Alemania, desde un punto de vista dogmático y práctico		
Carlos López-Veraza Pérez.....	79	
Die zweite Chance – La segunda oportunidad		
Exoneración del Pasivo insatisfecho – Restschuldbefreiung		
Dr. Javier Blas.....	82	
Minderheitenschutz bei der Gewinnthesaurierung in der GmbH		
Ein deutsch-spanischer Rechtsvergleich		
Prof. Dr. Holger Fleischer, LL. M. und Jennifer Trinks	90	
Kurzartikel / Artículos breves		
Una reducción general de personal no justifica el cese de un miembro del consejo de dirección		
Katharina Haneke, M.A. y Nereida Sánchez Pérez, LL.M.....	104	
Spanische Erbschaftssteuer, wenn Erbe in Spanien und Erblasser in Deutschland residierten und sich der Nachlass in Deutschland befindet		
Alexander vom Hofe.....	105	
Freno a la subida de los precios de los alquileres en Alemania		
Nereida Sánchez Pérez, LL.M. und Philipp Schönenbeck.....	107	
Deutsche Gesetzgebung/ Legislación alemana		110
Spanische Gesetzgebung/ Legislación española		118
Spanische Rechtsprechung/ Jurisprudencia española		139
Junge Juristen / Jóvenes Juristas		143
Notizen aus der Vereinigung/ Noticias de la Asociación		145
Stellenmarkt/ Bolsa de trabajo		153
Impressum/ Pie de imprenta		156

Editorial

Was für ein phänomenaler Kongress in Santiago de Compostela! Bereits mit der Segnung der deutsch-spanischen Juristenvereinigung im Rahmen der Pilgernmesse am Anreisetag des Kongresses verbunden mit einer Vorführung des Botafumeiro hat der Kongress einen spektakulären Auftakt erlebt. Die anschließenden Arbeitsgruppen konkurrierten sowohl mit dem wunderbaren Wetter in Santiago de Compostela als auch den Sehenswürdigkeiten der Stadt. In der Mitgliederversammlung wurde auf Antrag eines Mitglieds Dr. Burkhardt Löber aufgrund seiner besonderen Verdienste für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr zum Ehrenmitglied der Vereinigung ernannt. Murcia und Lanzarote wurden als Kongressort für den Kongress 2017 vorgeschlagen. Die Mitgliederversammlung entschied sich für Lanzarote unter der Kongressorganisation von Luis Fajardo, der bereits zuvor den Kongress in Teneriffa organisiert hatte. Sie sehen, liebe Mitglieder, wir haben wieder einen spannenden, interessanten und ereignisreichen Kongress erlebt. Herzlichen Dank an Bárbara Román Méndez für die erfolgreiche Organisation des Kongresses in Santiago de Compostela.

In der Sommerpause werden wir uns intensiv dem Kongressjahr 2015/2016 widmen. Vor allen Dingen wollen wir uns aber wieder der Fortentwicklung der Homepage der Vereinigung annehmen. Die technische Entwicklung schreitet so rasant voran, dass es schwer fällt, hier up-to-date zu bleiben. In der ersten Vorstandssitzung nach der Sommerpause wird der Vorstand hierzu einen Workshop mit einem WebSpezialisten durchführen und die Möglichkeiten der Entwicklung sowie die damit einhergehenden Kosten ausloten.

Ich würde mich freuen, Sie bald wieder zahlreich in der neuen Startup Boom Town Berlin anlässlich unseres nächsten Minikongresses am 14. November 2015 begrüßen zu können. Hier werden wir uns der neuen deutsch / spanischen Gründerszene in Deutschland und Spanien und hier insbesondere in Berlin und Barcelona widmen und rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Gründung von Start-Ups sowie die Finanzierungsmodelle und Praxiserfahrungen darstellen und diskutieren.

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen.

Herzlichst

Marc André Gimmy

¡Qué fantástico Congreso en Santiago de Compostela! Tan solo con la bendición de la Asociación hispano-alemana de Juristas en la misa de peregrino el mismo día de llegada, en combinación con la exhibición del botafumeiro fue un comienzo espectacular para nuestro Congreso. Los grupos de trabajo competían tanto con el maravilloso tiempo en Santiago como con sus monumentos. En la Asamblea general de socios y, a petición de uno de los socios, se nombró a Dr. Burkhardt Löber nuevo socio honorífico de la Asociación Hispano – Alemana de Juristas por su especiales méritos en el tráfico jurídico hispano-alemán. Murcia y Lanzarote fueron presentadas como sedes del Congreso 2017. La Asamblea se decidió por Lanzarote, cuya organización correrá a cargo de Luis Fajardo quien en su día ya organizó el congreso en Tenerife. Como pueden ver, estimados socios, hemos vuelto a celebrar un congreso emocionante, interesante y memorable. Nuestro agradecimiento a Bárbara Román por la exitosa organización del Congreso en Santiago de Compostela.

Durante de la pausa de verano nos dedicaremos intensamente a los congresos 2015/2016. Sobre todo queremos volver a dedicarnos al desarrollo de la página web de la Asociación. El desarrollo técnico es tan acelerado que nos resulta difícil estar siempre al día. En la primera Junta después del verano se celebrará un “workshop” con un especialista para ver las formas de desarrollo así como los gastos relacionados con ello.

Me encantaría volver a saludar a muchos de ustedes en la nueva “Startup Boom Town” Berlín con motivo de nuestro próximo Mini-Congreso el 14 de noviembre de 2015. Ahí nos dedicaremos al nuevo movimiento de compañías emergentes hispano-alemanas en Alemania y España y especialmente a Berlín y Barcelona y reseñar y debatir las cuestiones legales con relación a la constitución de “Start-ups”, así como sobre los modelos de financiación y experiencias prácticas.

Será un placer verles pronto.

Cordialmente

Marc André Gimmy



Präsident DSJV-AHAJ
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Taylor Wessing, Düsseldorf
m.gimmy@taylorwessing.com

Análisis comparativo del sistema de individualización de las penas en España y Alemania, desde un punto de vista dogmático y práctico

Carlos López-Veraza Pérez*

Italia, 1780. Un joven observa compungido cómo en su país regía un sistema de castigo extremadamente cruel, un régimen inquisitivo, escrito y secreto. Un sistema en el que el término culpable y pecador se confundían en un solo término; tal era la barbarie que incluso los jueces se apoyaban en la tortura como medio legítimo para obtener las pruebas que les permitieran aplicar los designios de la Justicia Divina. Amigo de los hermanos Verri, se mostraba afligido ante aquel sistema de crimen y castigo, lo que le llevó a propugnar un nuevo derecho penal en el que las penas debían ser tan leves y humanas como fuera posible y siempre destinadas a cumplir con su fin, que en ningún caso podía ser el de causar daño, sino el de disuadir a los ciudadanos de cometer delitos, y a los que ya los han cometido, evitar su reiteración delictiva. Este inquieto joven se erigió como el pionero del derecho penal moderno al publicar a sus 25 años de edad un tratado en el que abogaba por nuevas finalidades del derecho penal, superando las antiguas visiones absolutistas: disuadir a los potenciales delincuentes de la comisión de hechos punibles y resocializar a los que ya lo son, es decir, las conocidas actualmente como teorías de la prevención general y prevención especial. La obra, que lleva por nombre el Tratado de los delitos y las penas, fue escrita por el Marqués de Beccaria, y constituyó un avance a su propia época, no solamente por contribuir al sentido mismo del derecho penal, sino también por plantar la semilla de principios que más tarde se incorporarían en gran parte de los sistemas punitivos modernos, tales como la legalidad y la proporcionalidad.

Así, el principio de legalidad penal se incorporó ya en el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pero no fue hasta años más tarde cuando terminó su proceso de maduración al redactar un filósofo, biólogo, antropólogo, teólogo pero también jurista, el Código Penal Bávaro de 1.813 en el que hizo constar la máxima *nullum crimen, nullum poena sine lege*, la cual, se extendió sin apenas interrupción entre las Constituciones del sistema continental, para luego dar el salto al resto del Derecho Internacional. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, se proclama que no se impondrán a nadie penas mayores que las previstas

en el momento del la comisión del delito. Por su parte, el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de noviembre de 1966, además de la proclamación estricta del principio de legalidad y de la prohibición de imposición de penas mayores a las previstas en el momento de la comisión del delito así como de la previsión de la retroactividad de las penas más leves, advierte que todo ello no impide el castigo de actos u omisiones que constituyan delito según los principios generales del derecho reconocidos en las naciones civilizadas. Y en el mismo sentido se expresó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Español se ha pronunciado en numerosas ocasiones en el sentido de que el principio de legalidad se manifiesta en la triple exigencia de *lex scripta*, *lex praevia* y *lex certa*. La primera ataña a los actos y omisiones sancionables y a las sanciones mismas que su comisión acarrea a los autores, y tiene como consecuencia fundamental que la costumbre no puede ser fuente de derecho penal (STC 24/2004). La segunda -*lex praevia*- exige que los actos y omisiones estén sancionados según la legislación vigente en el momento de su comisión, es decir, se prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables (STC 99/2000). La tercera exigencia -*lex certa*- se traduce en el principio de tipicidad, como principio de taxatividad. STC 13/2003. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para fijar las sanciones? Lógicamente, el criterio desde el que deberíamos partir no puede ser otro diferente al de la propia finalidad del derecho penal y de las penas. El legislador debería clarificar cuáles son los fines de las penas, cuyo estudio se ha visto limitado a un ámbito casi puramente universitario, pareciendo obviarse su verdadera importancia en todas las fases del proceso penal y en primer lugar, a la hora de fijar qué pena conlleva cada delito, o dicho en otro sentido, dar cumplimiento con el principio de legalidad¹. Imaginemos que el fin último del derecho penal fuera la reeducación; en ese caso, no habría cabida a penas tales como la pena de muerte o la cadena perpetua. Si por el contrario, su finalidad fuere evitar la comisión de delitos por parte de la población, se debería obviar el análisis de la culpabilidad del delincuente. Y si

* Abogado Fiscal, Fiscalía Provincial de Huelva

¹ En el mismo sentido, GARCÍA CAVERO, P.: "Acerca de la función de la pena" (www.revistajuridicaonline.com).

fuere meramente retributiva, podríamos volver a la vetusta y denostada fórmula ojo por ojo, diente por diente.

I. Fines de la pena en España y Alemania

A la hora de analizar los sistemas de individualización judicial de la pena en España y Alemania, cabe preguntarse en un primer lugar si en ambos países responden de la misma manera a las preguntas de por qué se pena y para qué se pena.

Desde antiguo se ha discutido cuáles son los fines de las penas, pudiéndose dividir en tres las teorías existentes. Las teorías absolutas, que entienden el sentido de la pena como retribución; las teorías relativas, que atienden al fin que persigue la pena (prevención general y especial); y una tercera teoría ecléctica, la teoría de la unión, que concilia posturas irreconciliables, y a los que partiendo de la idea de retribución, añade también el cumplimiento de fines preventivos, tanto generales como especiales². Esta última se ha erigido como la posición dominante; sin embargo, a continuación procederé a examinar la regulación legal en España y Alemania para comprobar si la posición de la doctrina y la regulación legal marchan o no por caminos separados.

Se trata ésta de una materia nuclear del derecho penal pero históricamente controvertida, posible razón por la cual los legisladores no responden con la exhaustividad que el tema se merece, sin que España y Alemania constituyan una excepción al respecto. Así, mientras en España el artículo 25.2 de la Constitución de 1978 dispone que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad irán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”, es en el artículo 46 del Código Penal alemán donde se establece que para la fijación de la pena, se deberán tomar en consideración las consecuencias que son de esperar de la pena para la vida futura del autor en la sociedad.

Nos encontramos, por tanto, ante dos preceptos escuetos en los que si efectuásemos únicamente una exégesis literal de los mismos, cabría considerar que en ambos países la finalidad de las penas se limitarían exclusivamente a fines resocializadores, afirmación que sin duda sería primorosa, pero que podría ser tachada incluso de utópica y que ciertamente no se corresponde con la realidad actual. En este sentido, se han pronunciado tanto el tribunal

Constitucional Español, como el Tribunal Constitucional Federal Alemán, con decisiones similares acerca de los fines de las penas, pudiendo señalar a este respecto la Sentencia del Tribunal Constitucional Español número 150/1991, de 4 de julio, donde se niega que la prevención especial sea la única finalidad de la pena; antes al contrario, declara que el art. 25.2 no se opone a que la misma tenga otros objetivos, entre ellos la prevención general, la cual constituye, asimismo, una finalidad legítima de la pena. Por su parte, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, resolvió acerca de la admisibilidad en el ordenamiento jurídico de la prisión permanente revisable en la célebre Sentencia de 21 de junio de 1977, en la cual el Alto Tribunal proclamó que el derecho penal alemán y los tribunales postulan la teoría de la unión (*Vereinigungstheorie*).

Así las cosas, se aprecia que ambos órganos constitucionales han consagrado la suma de los de fines de las penas adoptando la posición de la teoría de la unión pero sin haber ponderado la importancia de cada una de ellas, lo cual conlleva el peligro de que en la praxis los operadores jurídicos puedan basarse en la finalidad por la que más se sientan atraídos según sus convicciones personales³.

II. Determinación legal e individualización judicial en España y Alemania

En primer lugar, es preciso analizar qué se entiende por determinación legal y por individualización judicial de la pena. El primer concepto⁴, se refiere a la determinación en abstracto de las penas fijadas por el legislador, fijando unas penas máximas y otras mínimas (*Spielraum*), así como las reglas de modificación de la responsabilidad criminal de los encausados. En la segunda fase, será el Juzgador el que deberá adecuar la pena al caso concreto.

La determinación legal de la pena, tanto en España, como en Alemania, ha estado fuertemente vinculada al principio de legalidad. Ello no obstante, y a pesar de tasarse en ambos modelos los efectos ante las distintas variables del delito, difieren en gran medida a la hora de dotar a los jueces del arbitrio necesario para individualizar la pena exacta al caso concreto.

En España, nos encontramos ante un sistema en el que parece vislumbrarse una cierta desconfianza del

² MUÑOZ CONDE, F.: Introducción al Derecho Penal; Editorial B de F, 2001; página 72.

³ Prof. Dr. HERIBERT OSTENDORF: *Einführung in das Strafrecht*; Auflage 2007.

⁴ CRESPO, E.D.: Prevención general e individualización judicial de la pena; Ed.Universidad de Salamanca,1999; Páginas 41 y 42.

legislador hacia los jueces, toda vez que se diseña un modelo de consecuencias tasadas en atención a las distintas variables del delito en los que se otorga al Juez en numeroso delitos un margen ciertamente irrisorio a la hora de fijar las penas. Y ello, incluso con anterioridad a la aplicación de las reglas de modificación de la responsabilidad criminal. Para ilustrar mediante un ejemplo práctico. Un delito de robo con violencia está castigado en virtud del artículo 242.1 del Código Penal español con una pena de 2 a 5 años de prisión. Ahora bien, si se hubiere cometido en casa habitada la pena se impondría conforme al párrafo segundo del citado precepto, con la pena de 3 años 6 meses a 5 años, y, en el caso, en que además el autor hubiera hecho uso de armas o instrumentos peligrosos, la pena debería ser aplicada en su mitad superior, por lo que el abanico del que dispondría el Juez a la hora de determinar la pena, sería de 4 años, 3 meses y 1 día a 5 años. Imaginemos, además, que el autor fuera reincidente: en ese caso, debería aplicarse la mitad superior de la mitad superior, lo que arrojaría un abanico penológico de 4 años, 7 meses y 16 días a 5 años. El Juez dispondría de un Spielraum de 4 meses y 14 días para poder imponer la pena que, a su juicio, y tras la práctica de las pruebas en el acto del juicio oral, fuera la más adecuada a las circunstancias del hecho y del autor.

Por el contrario, en Alemania se da el supuesto contrario, fijando el Código Penal amplias horquillas de las que dispone el Juez a la hora de determinar la pena. Si bien ello puede favorecer a la proporcionalidad de las penas, también puede suponer un riesgo para la seguridad jurídica y para el principio de igualdad, toda vez que pueden imponerse para unos mismos hechos, penas muy diferentes.

Estas diferencias, llevan grandes consecuencias en la práctica judicial, tal y como pude comprobar cuando acudí como público a un juicio penal en Alemania. La acusación se dirigía contra un ciudadano, el cual, tras haber ingerido abundantes bebidas alcohólicas, se dirigió a una vivienda y, guiado por un ánimo de enriquecimiento ilícito a costa del patrimonio ajeno, exigió a la dueña de la misma que le entregase el dinero que tuviera al mismo tiempo que esgrimía una navaja de 5 centímetros aproximadamente. Tras la negativa de la propietaria del inmueble, el acusado se marchó sin occasionar mayores altercados. El juicio se inició con la lectura por parte del Ministerio Fiscal del escrito de conclusiones provisionales y la primera cuestión que me llamó la atención fue que no se fijaba una pena concreta, sino que el escrito de acusación se limitaba a formular que se castigaría conforme a la pena prevista para el robo con violencia (250 StGB

Schewrer Raub), delito cuya pena aparejada oscilaba entre 5 a 15 años de prisión. Por tanto, mientras en España el margen legal sería de un año y medio de prisión (robo con violencia en casa habitada, artículo 242.1 y 2 del Código Penal español) el acusado acudía al día del juicio con la única certeza de que el límite máximo de la pena que se le podría imponer no excedería de los 15 años de prisión. A continuación, durante la práctica de la prueba, se llevó a cabo un interrogatorio exhaustivo acerca de las condiciones personales del acusado, llegándose incluso a formular preguntas tales como aquéllas referidas a su lugar de nacimiento, la relación con sus padres y compañeros de colegio, el trabajo de su madre y la edad hasta la que había estudiado. Asimismo, se interrogó a la perjudicada para preguntar si lo perdonaba y por último, un perito (Sachverständnis) elaboró un informe detallado y completo acerca de la vida del acusado, sus condiciones personales y su imputabilidad por sus problemas con las bebidas alcohólicas. Era patente que en el juicio, más que discutirse la autoría del hecho, la cual era incontrovertida, se ventilaba la individualización judicial de la pena y así se plasmó en la Sentencia, donde de manera minuciosa se analizaron todos los detalles por los cuales el Juez consideraba adecuada la imposición de la pena. En España, muchas de esas preguntas habrían sido declaradas del todo impertinentes y muchas otras no se formulaban en la práctica, obedeciendo la diferencia posiblemente a que en Alemania los amplios márgenes exigen del Juzgador un esfuerzo especial para individualizar la pena, y cuyos criterios para determinar la pena se encuentran detallados en mayor medida en el Código Penal Alemán. A estos efectos, hay que tomar en consideración el tenor del ya citado artículo 46.2 del Código Penal alemán en el que se señala lo siguiente: "Principios de la fijación de la pena: Deben considerarse las consecuencias que son de esperar de la pena para la vida futura del autor en sociedad. En la fijación el tribunal debe sopesar las circunstancias tanto favorables como desfavorables del autor. En la fijación de la pena, deberá tomarse en consideración de manera particular: el móvil del autor, el grado de voluntariedad en el hecho, el grado de violación del deber, el modo de ejecución del hecho, la conducta antecedente del autor, sus circunstancias económicas y personales, su conducta después del hecho, atendiendo especialmente al esfuerzo para lograr la reparación del daño causado, así como el intentó de acuerdo con la víctima. Se proscribe tomar en consideración circunstancias que son características del tipo legal".

Se trata éste, por tanto, de un precepto en el que de manera muy detallada se exponen los criterios en los que debe basarse el Juez en su búsqueda de la pena más justa y que se diferencia claramente de la

respuesta del Código Penal español, el cual establece en su artículo 66.6 que “cuando no concurran atenuantes ni agravantes [circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal] los Jueces aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho”. Lo escueto del precepto, único a los escasos márgenes que en muchas ocasiones dispone el Juzgador español, puede ser el origen del papel secundario que se otorga en España al proceso de imposición de la pena adecuada al hecho, a pesar de que el Tribunal Constitucional Español ha exigido en reiteradas ocasiones un deber de motivación en la individualización judicial de la pena, que incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto⁵ (por todas, SSTS 108/2001, de 23 de Abril; 20/2003, de 10 de Febrero; 148/2005, de 6 de Junio; 76/2007, de 16 de Abril)

III. Conclusión

“Toda pena que no se derive de la absoluta necesidad es tiránica”. La frase, cuya autoría corresponde al joven con el que comencé la exposición del tema, debería hacernos reflexionar acerca de las finalidades y los motivos de las penas. No sé qué pensaría acerca de la pena de 40 años de prisión prevista en el Código Penal español ni sobre la prisión permanente revisable regulada en el ordenamiento jurídico alemán e incorporada en el modelo español recientemente, pero en todo caso, no podemos olvidarnos del proceso de humanización del derecho penal que inició Beccaria y ello debería partir por tener claro cuáles son los fines del derecho penal y de sus penas.

⁵ Entre otras, SSTS 108/2001, de 23 de Abril; 20/2003, de 10 de Febrero; 148/2005, de 6 de Junio; 76/2007, de 16 de Abril.

Die zweite Chance – La segunda oportunidad Exoneración del Pasivo insatisfecho – Restschuldbefreiung

Dr. Javier Blas*

La Ley de emprendedores del 2013 introdujo el concepto de remisión de deudas que ahora se ve flexibilizado y ampliado con el Real Decreto Ley 1/15, de 27 de Febrero (BOE 28/02/2015) dando lugar a su nombre: Ley de segunda oportunidad. Se mitiga de esta forma el principio general de la responsabilidad patrimonial universal para permitir que aquellas personas que se encuentran en una situación de insolvencia sin haber tenido culpa en la misma puedan empezar de cero sin la losa que supondría obligarles a arrastrar la deuda que dejase pendiente al terminar la liquidación de sus concursos.

Aun así se parte del principio general de hacer frente a todas las deudas, que ahora se regula en el nuevo apartado segundo del artículo 178 LC según el cual “Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme.”

Das Gesetz für Entrepreneurs aus dem Jahr 2013 führt das Konzept der Erlassung der Schulden ein, das jetzt mit dem Königlichen Erlass 1/15 vom 27. Februar (Amtsblatt BOE vom 28.02.2015) einen Namen erhalten hat: Das Gesetz der zweiten Chance. Auf diese Weise wird durch den königliche Erlass ein allgemeines Prinzip der allgemeinen Eigentumshaftung gemildert und erweitert, das erlaubt, dass diejenigen Personen, die insolvent sind ohne daran schuld zu sein, bei null neu anfangen können, ohne den Mühlstein der Verpflichtung die Schuld zu übernehmen, die anhängig bleibt, wenn die Liquidation des Konkurses abgeschlossen ist.

Trotzdem wird von dem allgemeinen Prinzip ausgegangen, allen Schulden die Stirn zu bieten, das jetzt mit dem neuen Absatz Zweitens des Paragraphen 178 LC (Konkursrecht) geregelt wird, aufgrund dessen die Sachverhalte, „die im darauf folgenden Paragraphen vorgesehen sind, in den Fällen des Abschlusses des Konkurses durch Liquidation oder Unzulänglichkeit der Konkursmasse die natürliche Person des Schuldners für die Zahlung der restlichen Kredite haftbar ist. Die Gläubiger können einzelne Vollstreckungen einleiten, solange die Neueröffnung des Konkurses nicht vereinbart ist, oder ein neuer Konkurs erklärt

Por tanto, el acreedor insatisfecho podrá acudir a los tribunales en vía ejecutiva (Art. 517.9 LEC) para conseguir la completa satisfacción de sus créditos. Por el contrario el deudor puede acudir al mecanismo de la segunda oportunidad en tres escenarios diferentes que se exponen más adelante y que implicarán que los acreedores cuyos créditos se extinguieren no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos. No obstante quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado.

En cuanto al alcance subjetivo, si el concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de comunidad y no se hubiera procedido a la liquidación del régimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el patrimonio común.

I. Requisitos comunes

El nuevo artículo 178 bis LC establece los requisitos que serán necesarios en todo caso para solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho:

1. Debe tratarse de un deudor persona natural, sin que prevea la posibilidad de que las personas jurídicas se vean beneficiadas por la remisión de deudas, pues en todo caso la liquidación implicará su extinción.
2. El concurso debe haber concluido por liquidación o por insuficiencia de masa activa.
3. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el artículo 152.3 LC.

wird. Für diese Vollstreckungen wird ihr Kredit in eine definitive Liste der Gläubiger aufgenommen, die mit einem rechtskräftigen Urteil gleichgestellt wird.“

Somit kann der nicht bezahlte Gläubiger die Tribunale über den Vollstreckungsweg in Anspruch nehmen (Paragraph 517.9 LEC), um die vollständige Begleichung seiner Kredite zu erwirken. Im Gegensatz dazu kann der Schuldner den Mechanismus der zweiten Chance an drei verschiedenen Schauplätzen benutzen, die später behandelt werden und die beinhalten, dass die Gläubiger, deren Kredite erloschen, keinerlei Handlung mehr gegen den Schuldner zur Zahlung derselben einleiten können. Trotzdem bleiben die Rechte der Gläubiger ungeschoren gegenüber den gesamtschuldnerisch mit dem Konkurschuldner verpflichteten Personen und gegenüber den Honoranten und Bürgen, die sich nicht auf die Begünstigung durch Befreiung von den nicht gezahlten Passivschulden des Konkurschuldners berufen können.

Bezüglich der subjektiven Tragweite, wenn der Konkurschuldner in Zugewinngemeinschaft oder einer anderen Gemeinschaft verheiratet ist und die Liquidation des finanziellen Güterrechts der Ehe nicht durchgeführt wurde, wird die Begünstigung der Befreiung von den nicht gezahlten Passiva bezüglich der Schulden vor der Konkursklärung, für die das gemeinsame Eigentum haften müsste auf den Ehepartner des Konkurschuldners erweitert, auch wenn er seinen eigenen Konkurs nicht erklärt hat.

I. Allgemeine Voraussetzungen

Der neue Paragraph 178 bis. LC legt die Voraussetzungen fest, die auf jeden Fall notwendig sind, um die Befreiung von den nichtgezahlten Passivschulden zu beantragen:

1. Bei dem Schuldner muss es sich um eine natürliche Person handeln, ohne dass rechtliche Personen von der Erlassung der Schulden profitieren können, da die Liquidation in jedem Fall ihre Löschung beinhaltet.
2. Der Konkurs muss mit der Liquidation oder mit einer Insuffizienz der Konkursmasse beendet worden sein.
3. Der Schuldner muss dem Konkursrichter seinen Antrag auf Befreiung von den nichtgezahlten Passiva innerhalb der Frist der Anhörung einreichen, die ihm in Übereinstimmung mit Paragraph 152.3 LC zusteht.

4. Solo se admitirá la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe.

El requisito de la buena fe se desarrolla expresamente en el apartado tercero del artículo 178 bis, que entiende que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Que el concurso no haya sido declarado culpable.
- Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.
- Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

Junto a estos tres requisitos que en todo caso deben darse para apreciar la buena fe del deudor y exonerar sus deudas, los apartados cuarto y quinto regulan dos requisitos más que pueden darse alternativamente, es decir, uno u otro, y con diferente efecto en el alcance de la remisión.

II. Requisitos particulares de cada supuesto

1. La satisfacción de determinados créditos

El primer escenario posible, contemplado en el número cuarto del apartado tercero del artículo 178 bis exige la satisfacción de determinados créditos: "Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concúrsales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concúrsales ordinarios. Es decir, antes de solicitar la exoneración, con el resultado de la liquidación de la masa deberá haber satisfecho:

- El crédito masa, teniendo en cuenta que como vimos, los gastos que se generen por la tramitación

4. Es werden nur Anträge auf Befreiung von nichtgezahlten Passiva von redlichen Schuldner angenommen.

Die Voraussetzung der Redlichkeit wird ausdrücklich in dem Absatz Drittens des Paragraphen 178 bis entwickelt, der vorsieht, dass der Schuldner redlich auftritt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Dass der Konkurs nicht schuldhaft erklärt wurde.
- Dass der Schuldner in den letzten 10 Jahren vor der Konkursserklärung nicht wegen folgender Delikte verurteilt wurde: Eigentum, sozialwirtschaftliche Ordnung, Fälschung von Unterlagen, Finanzamt und Sozialversicherung oder Rechte von Angestellten. Wenn ein strafrechtliches Verfahren läuft, muss der Konkursrichter die Entscheidung bezüglich der Befreiung von Passivschulden aussetzen, bis ein rechtskräftiges Urteil in dem Strafverfahren erteilt wurde.
- Dass er bei Vereinigung der Voraussetzungen, die mit Paragraph 231 festgelegt werden, zu mindestens einen Versuch unternommen hat, eine außergerichtliche Einigung bezüglich der Zahlungen zu erreichen.

Zusammen mit diesen drei Voraussetzungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen, um die Redlichkeit nachzuweisen, werden mit Absatz Viertens und Fünftens zwei weitere Requisiten reguliert, die alternativ auftreten können, d. h. entweder die eine, oder die andere und mit verschiedenen Auswirkungen in der Tragweite des Erlasses.

II. Besondere Voraussetzungen je nach Sachverhalt

1. Die Begleichung bestimmter Forderungen

Der erstmögliche Schauplatz fordert unter Viertens, Absatz Drittens des Paragraphen 178 ff die Zahlung bestimmter Kredite: "Dass die Kredite gegen die Konkursmasse vollständig gezahlt wurden, die bevorrechtigten Kredite des Konkurses und dass, wenn kein Versuch einer außergerichtlichen Vereinbarung unternommen wurde, mindestens 25 Prozent des Betrags der ordentlichen Kredite des Konkurses bezahlt wurden. Dies beinhaltet, dass vor dem Antrag auf Befreiung, mit dem Ergebnis der Liquidation der Masse folgendes gezahlt worden sein muss:

- Die Masseforderung, unter Berücksichtigung, dass, wie gesagt, die Kosten für die Abwicklung

del acuerdo extrajudicial constituyen créditos masa.

- Los créditos concúrsales privilegiados, sin distinguir en este apartado entre el privilegio general y el especial, pero teniendo en cuenta que no todo el crédito público tiene carácter de privilegiado y que el privilegio especial deberá ahora valorarse en los términos del artículo 90 LC extinguéndose una vez que el bien que lo garantiza sale de la masa.

- El 25% del crédito ordinario si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo. Este inciso, en clara contradicción con el apartado tercero del mismo precepto, abre la puerta a la posibilidad de remitir deudas sin necesidad de intentar el acuerdo extrajudicial, pero exigiendo un plus de satisfacción del 25% del ordinario. Hay que tener en cuenta que posiblemente si no se intenta el acuerdo puede minorarse ligeramente el crédito masa, pues se reducen los gastos del expediente.

einer außergerichtlichen Vereinbarung Kredite der Masse bilden.

- Die bevorzugten Konkurskredite, ohne in diesem Absatz zwischen allgemeiner besonderer Bevorzugung zu unterscheiden, jedoch unter Berücksichtigung, dass nicht alle öffentlichen Schulden bevorzugten Charakter haben und dass die besondere Bevorrechtigung nun laut den Terminen des Paragraphen 90 LC bewertet werden muss und erlischt, sobald das Gut, welches dafür bürgt, aus der Masse herausgenommen wurde.

- 25 Prozent der ordentlichen Schulden, wenn keine außergerichtliche Vereinbarung über vorherige Zahlungen versucht wurde. Dieser Satz, in klarem Widerspruch zu dem Absatz Drittens derselben Maxime, eröffnet die Möglichkeit die Schulden zu verringern, ohne eine außergerichtliche Vereinbarung zu versuchen, sie setzt jedoch die Zahlung eines Plus von 25 Prozent für die ordentlichen Schulden voraus. Es muss berücksichtigt werden, dass die Kosten der Masseforderung etwas niedriger sein können, wenn kein Versuch einer Vereinbarung unternommen wird, da die Verfahrenskosten geringer sind.

2. Sometimiento al plan de pagos

Alternativamente a los requisitos del número cuatro del apartado tercero, el artículo 178 bis.3 5º prevé la exoneración del pasivo no satisfecho para el deudor que:

- a) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.
- b) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.
- c) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.
- d) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad, requisito cuya exigibilidad se pospone a partir del 01/03/2016)
- e) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

La facilidad que implica el sometimiento a un plan de pagos, respecto de la exigencia del número cuarto

2. Unterwerfung unter einen Zahlungsplan

Alternativ zu den Voraussetzungen Nummer Vier, Absatz Drittens, sieht der Paragraph 178 ff 3 5º die Befreiung von den nichtgezahlten Passivschulden für denjenigen Schuldner vor, der:

- a) Akzeptiert sich einem Zahlungsplan laut Absatz 6 zu unterwerfen.
- b) Nicht die Verpflichtungen der Zusammenarbeit verletzt hat, die mit Paragraph 42 festgelegt werden.
- c) Diesen Vorteil nicht in den letzten zehn Jahren in Anspruch genommen hat.
- d) Nicht innerhalb von vier Jahren vor der Konkursklärung eine Arbeitsstelle abgelehnt hat, die seinen Fähigkeiten entspricht, Bedingung, deren Beanspruchbarkeit ab dem 01.03.2016 zurückgestellt wird.
- e) Ausdrücklich in dem Antrag auf Befreiung von den nicht gezahlten Passivschulden akzeptiert, dass die Bewilligung dieser Begünstigung für einen Zeitraum von fünf Jahren in der besonderen Abteilung des öffentlichen Konkursregisters aufgenommen wird, mit der Möglichkeit öffentlichen Zugriffs.

Der Erleichterung, die durch die Unterwerfung unter einen Zahlungsplan bezüglich der Forderung

del apartado tercero de haber satisfecho el crédito masa y el privilegiado, se ve contrarrestada con un menor alcance de la remisión, pues el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a estos deudores previstos en el número 5º del apartado 3 se extenderá solo a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:

aa) Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

bb) Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado.

Por tanto, el crédito de derecho público y en este caso no solamente el privilegiado, deberá ser satisfecho en este supuesto, al igual que el crédito por alimentos con independencia de su clasificación.

En cuanto al plan de pagos, el mismo se regula en el apartado sexto del artículo 178 bis que establece que las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado quinto (por tanto, es de aplicación a la exoneración con compromiso de plan de pagos, pero no a la exoneración por pago del apartado cuarto), deberán ser satisfechas por el concursado:

- Dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior.

- Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés.

- Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas.

Nummer Viertens, Absatz Drittens gewährt wird, dass die Masseforderung und die bevorzugten Kredite gezahlt sein müssen, wird in geringerer Tragweite der Schulderlass entgegengesetzt, da die Begünstigung der Befreiung von den nicht gezahlten Passivschulden, die diesen Schuldern unter Nummer Fünftens, Absatz Drittens gewährt wird, nur für den nichtgezahlten Teil folgender Kredite vorgesehen ist:

aa) Die ordentlichen und untergeordneten Kredite, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Konkurses anhängig waren, auch wenn sie nicht mitgeteilt wurden und unter Ausschluss der Kredite öffentlichen Rechts und für Alimente.

bb) Bezuglich der aufgeführten Kredite laut Paragraph 90.1, wird der Teil von ihnen befreit, der nicht durch die Vollstreckung der Garantie gezahlt werden konnte, außer wenn er je nach seiner Natur in einer anderen Kategorie als ordentlicher oder untergeordneter Kredit eingeschlossen wurde.

Somit muss der Kredit öffentlichen Rechts und in diesem Fall nicht nur der privilegierte gezahlt werden, genauso wie der Kredit für Alimente, unabhängig von der Klassifizierung.

Der Zahlungsplan wird unter Absatz Sechstens des Paragraphen 178 ff geregelt, der festlegt, dass die Schulden, von denen nicht in Übereinstimmung mit Absatz Fünftens befreit wird (also die Anwendung der Befreiung mit der Verpflichtung eines Zahlungsplans, jedoch nicht die Befreiung von der Zahlung laut Absatz Viertens) von dem Konkurschuldner gezahlt werden müssen:

- Innerhalb von fünf Jahren nach dem Abschluss des Konkurses, außer wenn sie eine spätere Ablauffrist haben.

- Während der fünf folgenden Jahre nach dem Abschluss des Konkurses dürfen für die anhängigen Schulden keine Zinsen berechnet werden.

- Bezuglich der Kredite öffentlichen Rechts wird die Abwicklung der Anträge auf Aufschub oder Aufsplitterung durch deren gesonderte Vorschrift geregelt.

Zu diesem Zweck muss der Schuldner den Vorschlag eines Zahlungsplans vorlegen, der nachdem er von den Beteiligten in einer Frist von 10 Tagen angehört wurde, von dem Richter in den Termini angenommen wird, mit denen er eingereicht wurde, oder mit den Änderungen, die er für angebracht hält.

3. Haber destinado al cumplimiento del plan de pagos al menos la mitad de los ingresos.

Como supuesto extraordinario, el apartado octavo del artículo 178 bis prevé la posibilidad de exonerar deudas a los deudores, que habiendo asumido el plan de pagos del número seis del apartado tercero no hayan podido cumplirlo.

En estos casos, atendiendo a las circunstancias y previa audiencia de los acreedores, podrá también el Juez del concurso declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideración de inembargables.

A estos efectos, se entiende por ingresos inembargable los previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil incrementada en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado.

Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional y, en su caso, a las cuantías que resulten de aplicar la "regla para la protección del núcleo familiar prevista en el apartado anterior se embargarán conforme a la escala prevista en el artículo 607.2 de la misma ley.

En este sentido, de conformidad con el artículo 607 LEC es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional y los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:

- a) Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
- b) Para la cuantía adicional hasta el importe

3. Mindestens die Hälfte der Einnahmen muss für die Erfüllung des Zahlungsplans benutzt werden.

Als außergewöhnlicher Fall sieht Absatz Achtens, Paragraph 178 ff vor, den Schuldern Schulden zu erlassen, die zwar einen Zahlungsplan laut Nummer Sechs, Absatz Drittens vorgesehen haben, diesen jedoch nicht erfüllen konnten.

In diesen Fällen kann der Richter des Konkurses unter Berücksichtigung der Umstände und nach Anhörung der Gläubiger die definitive Befreiung desjenigen Schuldners von den nichtgezahlten Passivschulden erklären, der seinen Zahlungsplan nicht vollständig erfüllt hat, wenn er mindestens die Hälfte der erhaltenen Einkünfte, während dieser Frist gezahlt hat, die als vollstreckbar eingestuft wurden.

Zu diesem Zweck gelten als nicht vollstreckbare Einkünfte laut Paragraph 1 des Königlichen Erlasses 8/2011, vom 1. Juli, die nicht vollstreckbaren Summe, laut Paragraph 607.1 der Zivilprozessordnung vermehrt um 50 Prozent und außerdem weitere 30 Prozent des interprofessionellen Mindestlohns für jedes Mitglied der Kernfamilie, das nicht über eigene reguläre Einkünfte, ein Gehalt oder eine Pension verfügt, die höher als der interprofessionelle Mindestlohn sind. Als Kernfamilie werden hier Ehepartner oder Lebenspartner, die direkten Vorfahren oder Nachfahren ersten Grades angesehen, die mit dem Vollstreckten zusammenleben.

Die Löhne, Gehälter, Tageslöhne, Vergütungen oder Renten, die höher als der interprofessionelle Mindestlohn sind und ggfs. die Summen, die aus der Anwendung der Regel zum Schutz der Kernfamilie laut dem vorherigen Absatz hervorgeht, werden in Übereinstimmung mit der Tabelle des Paragraph 607.2 desselben Gesetzes versteigert.

In diesem Sinn sind in Übereinstimmung mit Paragraph 607 LEC diejenigen Löhne, Gehälter, Renten und Vergütungen oder Vergleichbares nicht vollstreckbar, die nicht über dem interprofessionellen Mindestlohn liegen und Löhne, Gehälter, Tageslöhne, Vergütungen oder Renten, die höher als der interprofessionelle Mindestlohn sind und die in Übereinstimmung mit der folgenden Aufstellung vollstreckt werden:

- a) Für die erste zusätzliche Summe bis zum doppelten Betrag des interprofessionellen Mindestlohns 30 Prozent.
- b) Für die zusätzliche Summe bis zum dreifachen

equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.

c) Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.

d) Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.

e) Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

III. Tramitación de la solicitud

1. Al acabar la liquidación

El artículo 176 bis establece que una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso un informe justificativo que afirmará y razonará inexcusadamente que el concurso no será calificado como culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se pudiera obtener de las correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa. No impedirá la declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.

El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes personadas. Durante este plazo, el deudor persona natural podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la administración concursal y a los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del beneficio.

- Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del deudor o no se oponen a la misma, el Juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación.

Betrag des interprofessionellen Mindestlohns 50 Prozent.

c) Für die zusätzliche Summe bis zum vierfachen Betrag des interprofessionellen Mindestlohns 60 Prozent.

d) Für die zusätzliche Summe bis zum fünffachen Betrag des interprofessionellen Mindestlohns 75 Prozent.

e) Für alle Summen die darüber liegen 90 Prozent.

III. Verhandlung des Antrags

1. Nach Abschluss der Liquidation

Paragraph 176 bis setzt fest, dass die Konkursverwaltung dem Konkursrichter sobald das Aktivvermögen verteilt ist einen belegenden Bericht vorlegt, der bestätigt und unentschuldbar begründet, dass der Konkurs nicht als schuldig eingestuft wird und dass keine durchführbaren Handlungen existieren, um die Aktivmasse wieder einzugliedern, oder der Haftung von Dritten, deren Vollstreckung anhängig ist, oder dass, was aus den entsprechenden Handlungen erzielt werden kann nicht ausreichend ist, um die Schulden gegen die Masse zu begleichen. Diese Erklärung der Insuffizienz der Aktivmasse verhindert nicht, dass der Schuldner das rechtlich nicht vollstreckbare Eigentum behält, das keinen Marktwert hat, oder dessen Realisierung klar desproportional gegenüber dem vorhersehbaren käuflichen Wert ist.

Der Bericht wird in dem Büro des Gerichts für 15 Tage für alle eingetragenen Personen ausgelegt. Während dieser Frist kann der Schuldner (natürliche Person) die Befreiung von den nichtgezahlten Passivschulden beantragen. Der Antrag des Schuldners wird von dem Gerichtssekretär für eine Frist von fünf Tagen an die Konkursverwaltung und die Beteiligten weitergegeben, damit sie vorbringen, was sie bezüglich der Genehmigung der Begünstigung für angebracht halten.

- Wenn die Konkursverwaltung und die beteiligten Gläubiger mit dem Antrag des Schuldners einverstanden sind und keinen Einspruch dagegen einlegen, genehmigt der Konkursrichter per Entscheid vorläufig die Begünstigung der Befreiung von den nicht gezahlten Passivschulden und erklärt schließlich den Konkurs in der Liquidationsphase für abgeschlossen.

- La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del apartado 3 del artículo 178 bis y se le dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio.

2. En el mismo Auto de declaración de concurso

También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros.

Si el concursado fuera persona natural, pues de otra manera como hemos visto no podría acogerse a la exoneración, el juez designará un administrador concursal que deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2 del artículo 176 bis. Una vez concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso. La tramitación de la solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación.

3. Revocación del beneficio de exoneración

Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco años siguientes a su concesión:

- Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 178 bis hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

- En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos.

- Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones

- Der Einspruch darf nur wegen Nichteinhaltung einer oder mehrerer Requisiten laut Absatz 3 Paragraph 178 bis gestellt werden und er wird als Zwischenfall des Konkurses abgewickelt. Der Beschluss des Abschlusses des Konkurses kann erst angeordnet werden, wenn die Lösung des Zwischenfalls rechtskräftig ist, mit dem die Begünstigung anerkannt oder abgelehnt wird.

2. In demselben Beschluss der Konkurseröffnung

Die Einbindung wegen Insuffizienz der Konkursmasse kann auch in dem Beschluss der Konkurserklärung vereinbart werden, wenn der Richter es für offensichtlich hält, dass das Vermögen des Konkurschuldners vermutlich nicht ausreichen wird, um die voraussichtlichen Kredite gegen die Masse des Verfahrens abzudecken und die Ausübung der Handlung der Rückzahlung, der Anfechtung oder Haftung von Dritten nicht absehbar ist.

Wenn es sich bei dem Konkurschuldner um eine natürliche Person handelt, da er sich, wie wir gesehen haben, sonst nicht auf die Befreiung berufen kann, setzt der Richter einen Konkursverwalter ein, der die bestehenden Güter liquidiert und die Kredite der Masse zahlt, indem er die Reihenfolge einhält, die laut Abschnitt 2 Paragraph 176 bis vorgegeben ist. Nach Abschluss der Liquidation kann der Schuldner die Befreiung von den nicht gezahlten Passiva vor dem Konkursrichter beantragen. Die Abwicklung des Antrags, die Bedingungen, um von der Befreiung zu profitieren und die Auswirkungen werden laut Inhalt der Paragraphen 178 ff geregelt. Gegen diesen Beschluss kann Berufung eingelegt werden.

3. Widerruf der Restschuldbefreiung

Alle Gläubiger des Konkurses sind berechtigt vom Konkursrichter die Widerrufung der Begünstigung von der Befreiung der nichtgezahlten Passiva zu beantragen, wenn der Schuldner während der fünf folgenden Jahre auf die Bewilligung:

- einer der Umstände laut Abschnitt 3. Paragraph 178 ff vorliegt, der die Bewilligung der Begünstigung der Befreiung von den nichtgezahlten Passiva verhindert haben sollte.

- ggfs. die Zahlungsverpflichtung der nicht befreiten Schulden in Übereinstimmung mit dem Inhalt des Zahlungsplans nicht erfüllt hat.

- sich die finanzielle Lage des Schuldners substanzial verbessert hat, sodass er alle anhängigen Schulden ohne Beeinträchtigung seiner

de alimentos, o

- Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.

La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. En caso de que el Juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso.

Transcurrido este plazo sin que se haya revocado el beneficio, el Juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno.

Verpflichtungen für Alimente erfüllen kann, oder

- die Existenz von Einzahlungen, Gütern oder Rechten festgestellt wird, die geheim gehalten wurden.

Der Antrag wird in Übereinstimmung mit der Zivilprozessordnung für das mündliche Verfahren abgewickelt. Wenn der Richter die Widerrufung der Begünstigung entscheidet, erlangen die Gläubiger die Gesamtheit Ihrer Forderungen gegenüber dem Schuldner zurück, um die nicht gezahlten Kredite zu erhalten, die bei dem Abschluss des Konkurses nicht bezahlt waren.

Wenn nach Ablauf dieser Frist die Begünstigung nicht widerrufen wurde, erlässt der Konkursrichter einen Beschluss, in dem die Befreiung der nichtgezahlten Passiva des Konkurses definitiv anerkannt wird. Gegen diese Entscheidung, die im öffentlichen Konkursregister veröffentlicht wird, kann kein Einspruch mehr erhoben werden.



*Abogado, Doctor en Derecho
Illeslex Abogados, Palma de Mallorca
jblas@illeslex.com

Minderheitenschutz bei der Gewinnthesaurierung in der GmbH*

Ein deutsch-spanischer Rechtsvergleich

Prof. Dr. Holger Fleischer, LL. M.** und Jennifer Trinks***

Wie können Gesetzgeber und Minderheitsgesellschafter in GmbH-Recht Vorsorge gegen Aushungerungsstrategien des Mehrheitsgesellschafters treffen? Welche Kontrollmöglichkeiten stehen den Gerichten im Nachhinein offen und welche Grenzen sind ihnen durch das unternehmerische Ermessen in Fragen der Dividendenpolitik gezogen? Wie kann das Gewinnbezugsrecht zivilprozessual durchgesetzt werden? Diese und weitere Fragen behandelt der vorliegende Beitrag aus der Sicht des deutschen und spanischen GmbH-Rechts. Eine abschließende Gesamtwürdigung bezieht außerdem originelle

Lösungsansätze des französischen und US-amerikanischen Rechts ein.

I. Einführung

Zu den Lehrbuchbeispielen für einen Missbrauch der Mehrheitsmacht im GmbH-Recht zählt das „Aushuntern“ der Minderheitsgesellschafter durch übermäßige Gewinnthesaurierung¹. Zwei neuere Gerichtsentscheidungen aus Deutschland und

* Mit freundlicher Genehmigung des Beck-Verlages. Dieser Beitrag wurde in der Zeitschrift NZG Heft 8/2015 zum ersten Mal veröffentlicht.

¹ Vgl. Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön, Rechtsregeln für die geschlossene Kapitalgesellschaft, 2012, S. 33; Wedemann, Gesellschafterkonflikte in geschlossenen Kapitalgesellschaften, 2013, S. 47 ff.; beide mwN.

Spanien veranschaulichen, wie diese Strategie in der Rechtspraxis eingesetzt wird:

Beispiel Nr. 1²: Das OLG Brandenburg hatte einen Fall zu entscheiden, in dem der langjährige Leiter der Buchhaltung im Jahre 2002 einen Geschäftsanteil von 4,9% an der unternehmenstragenden GmbH erwarb und Mitgeschäftsführer wurde. Nach Unstimmigkeiten mit den Mehrheitsgesellschaftern berief ihn die Gesellschafterversammlung 2005 als Geschäftsführer wieder ab. In der Folgezeit behielt die GmbH durch Mehrheitsbeschluss über sieben Jahre sämtliche Gewinne ein – insgesamt 2,8 Mio. Euro bei einem Stammkapital von 1,2 Mio. Euro. Zugleich bewilligten sich die Mehrheitsgesellschafter, die in Personalunion auch Geschäftsführer waren, eine Erhöhung ihrer Bezüge und bestellten als Dienstwagen zwei Porsche Cayenne. Der Minderheitsgesellschafter, der seinen Geschäftsanteil durch ein Darlehen der GmbH finanziert hatte und von ihr nach seiner Abberufung als Geschäftsführer weder Gehalt noch Dividende bezog, hielt die Geltendmachung des Rückzahlungsanspruchs für treuwidrig, weil es für die regelmäßige Vollthesaurierung der Gewinne keinen sachlichen Grund gebe.

Beispiel Nr. 2³: Der Audiencia Provincial de Barcelona lag der Fall eines Ehepaars vor, das im Jahre 1992 gemeinsam eine spanische GmbH (sociedad de responsabilidad limitada, kurz: SL) gegründet hatte. Mehrheitsgesellschafter mit einem Anteil am Gesellschaftskapital von 70% und alleiniger Geschäftsführer war der Ehemann; die Ehefrau hielt die übrigen 30% des Gesellschaftskapitals. Während die Gesellschaft gedieh, scheiterte die private Beziehung der Gesellschafter: 2003 trennte sich das Paar. Just ab diesem Zeitpunkt gewährte die Gesellschaft ihren Gesellschaftern keine Dividende mehr. Ausschüttungsfähige Gewinne der Geschäftsjahre 2003–2010, die sich nach Angaben der Minderheitsgesellschafterin auf knapp 200.000 Euro beliefen, wurden als freiwillige Rücklagen einbehalten; im selben Zeitraum erhielt der Mehrheitsgesellschafter rund 270.000 Euro als Geschäftsführervergütung. Die Minderheitsgesellschafterin focht den Gewinnverwendungsbeschluss für das Geschäftsjahr 2010 an.

So einfach sich dieser klassische Mehrheits-Minderheits-Konflikt illustrieren lässt, so schwer fällt seine Lösung. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Erstens stärkt die Einbehaltung von Gewinnen das Finanzpolster der Gesellschaft. Dies wirkt der chronischen Eigenkapitalschwäche vieler GmbHs entgegen, sichert ihre zukünftige Lebens- und Widerstandsfähigkeit und dient daher dem Gesellschaftsinteresse. Zweitens zeigen die Gerichte im In- und Ausland wenig Neigung, sich in Fragen der Unternehmensfinanzierung und Dividendenpolitik einzumischen. Die Höhe der jährlichen Gewinnausschüttung gilt ihnen als unternehmerische Entscheidung, über die kein Richter, sondern die Gesellschafterversammlung befinden soll. Drittens bereitet die prozessuale Durchsetzung des Gewinnbezugsrechts beträchtliche Schwierigkeiten. Mit einer erfolgreichen Anfechtung des Thesaurierungsbeschlusses allein ist dem Minderheitsgesellschafter nicht geholfen, weil sich hieraus für ihn noch kein Gewinnauszahlungsanspruch ergibt. Es verwundert daher nicht, dass sich in Deutschland zum Minderheitenschutz bei der Gewinnthesaurierung in vielen Einzelpunkten bisher keine einvernehmlichen Antworten abzeichnen⁴. Immer wieder ringen die Gerichte um dogmatisch tragfähige und zugleich praktikable Lösungen⁵. Ein rechtsvergleichender Rundblick verspricht insoweit neue Anregungen⁶. Lohnend erscheint namentlich ein Blick in das spanische Kapitalgesellschaftsrecht, das zu dieser Frage nicht nur über reichhaltiges Fallmaterial und eine große Literaturdichte verfügt⁷, sondern jüngst auch mit einem gesetzlichen Austrittsrecht wegen der Nichtgewährung von Dividenden einen neuen

² OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 = BeckRS 2009, 10127; dazu auch der Nichtannahmebeschluss des BGH, DStR 2010, 1899.

³ Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de Barcelona, 7.5.2014 (nº ROJ: SAP B 5381/2014).

⁴ Vgl. OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 (1958) = BeckRS 2009, 10127: „Dass ein Minderheitenschutz stattfinden muss, ist in Rechtsprechung und Literatur aber anerkannt, wobei die Einzelheiten umstritten sind.“ Für einen Überblick über den aktuellen Meinungsstand MüKoGmbH/Ekkenga, 2. Aufl. 2015, § 29 Rn. 163 ff.; Scholz/Verse, GmbHG, 11. Aufl. 2012, § 29 Rn. 53 ff.; monografisch M. Arnold, Der Gewinnauszahlungsanspruch des GmbH-Minderheitsgesellschafters, 2001.

⁵ Vgl. etwa BGH, WM 1966, 1134; BGHZ 132, 263 = NJW 1996, 1678 (KG); OLG Hamm, GmbHR 1992, 458; OLG Düsseldorf, NZG 2005, 633; OLG Stuttgart, DB 2007, 2587 = BeckRS 2007, 15467 (KG); OLG Nürnberg, DB 2008, 2415 = NZG 2008, 948 Ls. = BeckRS 2008, 16971; OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 = BeckRS 2009, 10127.

⁶ Für eine breitere Bestandsaufnahme Fleischer, The Law of Close Corporations, General Report, International Academy of Comparative Law, World Congress Vienna 2014, unter G I 4.

⁷ Vgl. etwa Campins/Alfaro, Liber Amicorum Juan Luis Iglesias, 2014, S. 65; Iráculis, RDM nº 281, 2011, 251; beide mwN.

Rechtsbehelf für Minderheitsgesellschafter eingeführt hat.⁸

II. Fehlende Vorsorge durch Gesetzgeber und Gesellschafter

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt – sollte man meinen. Obwohl das Problem der „Hungerdividende“ der Rechtspraxis seit Langem geläufig ist, haben Gesetzgeber und Gesellschafter hierfür bisher keine hinreichende Vorsorge getroffen.

1. Gesetzliche Schutzvorkehrungen

a) Deutschland

Hierzulande hatten sowohl die beiden Regierungsentwürfe eines GmbH-Gesetzes von 1971 und 1973 als auch der Regierungsentwurf des Bilanzrichtliniengesetzes von 1982 in Anlehnung an § 254 AktG einen besonderen Anfechtungstatbestand zum „Schutz der Minderheiten vor einer Aushungerung“⁹ vorgesehen. Danach sollte jedem GmbH-Gesellschafter das Recht zur Anfechtung eines Gewinnverwendungsbeschlusses zustehen, wenn die Thesaurierung bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Sicherung der Lebens- und Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft nicht notwendig ist und durch die Thesaurierung unter die Gesellschafter kein Gewinn in Höhe von mindestens 4% des um nicht eingeforderte Einlagen verminderten gezeichneten Kapitals verteilt werden kann¹⁰. Der Vorschlag ist allerdings nicht Gesetz geworden¹¹. Ebenso wenig hat der Gesetzgeber bisher die Anregung aus der Literatur aufgegriffen, die GmbH-Gesellschafter im Wege eines Regelungsauftrags zu verpflichten, individuelle Vorgaben über die Rücklagenbildung und Gewinnverwendung im Gesellschaftsvertrag zu treffen¹². Daher verbleibt es bei der Regelung in § 29

⁸ Dazu etwa García, RdS n° 38, 2012, 55; Iráculis, RdS n° 38, 2012, 225.

⁹ Begr. RegE bei Kropff, AktG, 1965, S. 340 zu § 254 AktG.

¹⁰ So § 42 h GmbHG-E i. d. F. des RegE BiRiLiG, BT-Drs. 9/1878, 39, 110.

¹¹ Dazu Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum BiRiLiG, BT-Drs. 10/4268, 131: „§ 42 h GmbHG-E wird aus ordnungspolitischen Gründen nicht übernommen. Ein bestimmter Gewinnanspruch der Minderheitsgesellschafter soll im Gesetz nicht ausdrücklich festgeschrieben werden.“

¹² Grundlegend Hommelhoff, GmbHR 1979, 102 (109 ff.); ihm folgend Beier, Der Regelungsauftrag als Gesetzgebungsinstrument im Gesellschaftsrecht, 2002, S. 239 ff.; Wedemann (o. Fn. 1), S. 434 ff.; Weller, ZGR 2012, 386 (401).

GmbHG, die jedem Gesellschafter in Absatz 1 zwar einen „Anspruch“ auf seinen Gewinnanteil gewährt, die Gesellschafter aber in Absatz 2 zugleich ermächtigt, Gewinne mit einfacher Mehrheit in Gewinnrücklagen einzustellen oder als Gewinn vorzutragen.

b) Spanien

In Spanien wurde 1993 ein Reformvorschlag vorgelegt, der gesetzliche Vorgaben zur Gewinnausschüttung enthielt: Danach sollte eine GmbH drei Jahre nach ihrer Gründung verpflichtet sein, mindestens ein Drittel ihres ausschüttungsfähigen Jahresgewinns als Dividende auszureichen, sofern Gesellschafter mit einer Beteiligung von mindestens 5% am Stammkapital dies verlangen¹³. Auch dieser Vorschlag ist nicht Gesetz geworden. Wie in Deutschland verfügen GmbH-Gesellschafter in Spanien daher nur über ein allgemeines mitgliedschaftliches Gewinnbezugsrecht (derecho de participar en el reparto de las ganancias) gem. Art. 93 Buchst. a des Kapitalgesellschaftsgesetzes (Ley de Sociedades de Capital, kurz: LSC)¹⁴, das sich erst durch einen förmlichen Ausschüttungsbeschluss der Gesellschafterversammlung zu einem konkreten Zahlungsanspruch verdichtet. Auf Fassung eines solchen Beschlusses hat der einzelne Gesellschafter jedoch keinen Anspruch. Vielmehr kann die Gesellschafterversammlung nach Art. 273 I LSC grundsätzlich frei über die Gewinnverwendung entscheiden und erzielte Gewinne auch vollständig einbehalten¹⁵. Ein zumindest mittelbarer Ausschüttungsdruck könnte sich in Zukunft jedoch aus dem Austrittsrecht nach Art. 348 bis LSC ergeben¹⁶.

2. Privatautonome Vorsorge

a) Deutschland

Mangels gesetzlicher Schutzvorkehrungen obliegt es den Minderheitsgesellschaftern, durch so genannte Ausschüttungsklauseln im Gesellschaftsvertrag selbst Vorsorge gegen ein Aushuntern zu treffen. Die Kautelarpraxis bietet hierfür eine Vielzahl von

¹³ Vgl. Art. 87 Borrador del Anteproyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada vom 25.6.1993, zitiert bei Cabanas/Machado, RdS n° 4, 1995, 292, 296.

¹⁴ Vgl. Cáceres, CCJC n° 90, 2012, 63, 72: „derecho programático“.

¹⁵ Vgl. Alfaro/Campins, Otrosí n° 5, 2011, 19, 20; García, RdS n° 38, 2012, 55, 58.

¹⁶ Dazu unten V 2.

Gestaltungsvorschlägen an, die von der Mindestausschüttung eines prozentualen Anteils am Jahresergebnis über die Ausschüttung eines bezifferten Mindestbetrags oder eine Verzinsung des Anteilswerts in bestimmter Höhe bis hin zu Höchstgrenzen für die Rücklagenbildung reichen¹⁷. Denkbar sind ferner qualifizierte Mehrheitserfordernisse oder Zustimmungsvorbehalte einer Gesellschafterminderheit für die Rücklagenbildung oder die Vereinbarung eines Austrittsrechts für den Fall, dass die Dividende einen bestimmten prozentualen Anteil des Jahresergebnisses unterschreitet. Von alledem machen die GmbH-Gesellschafter in der Praxis aber nur selten Gebrauch: Nach einer neueren Stichprobe enthalten nur 4% der Gesellschaftsverträge mehrgliedriger GmbHs Ausschüttungsklauseln in der einen oder anderen Form¹⁸.

b) Spanien

Auch in Spanien steht es den Minderheitsgesellschaftern frei, sich durch Ausschüttungsklauseln, stimmrechtslose Anteile mit Dividendenvorzug oder Austrittsrechte gegen mögliche Aushungerungsstrategien zu wappnen. Die Gestaltungsempfehlungen ähneln denen der deutschen Rechtspraxis und werden ebenso selten umgesetzt¹⁹. Als einen Grund führt die Literatur die zunehmende Verwendung standardisierter Mustersatzungen an²⁰, die ein namhafter Autor wesentlich durch das gesetzgeberische Bestreben befördert sieht²¹, den Gründungsprozess der Gesellschaft zu beschleunigen²².

III. Gerichtliche Kontrolle des Thesaurierungsbeschlusses

Haben es die Minderheitsgesellschafter versäumt, ex ante für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen, so stehen die Gerichte vor der Frage, ob sie ex post Abhilfe schaffen sollen.

¹⁷ Vgl. etwa MüAnwaltsHdBGmbH-Recht/Seibt, 3. Aufl. 2014, § 2 Rn. 277, 282, 286 ff., 291 ff., 299, 300, 301, 302.

¹⁸ Näher Wedemann (o. Fn. 1), S. 212.

¹⁹ Vgl. Sánchez in Sánchez, Régimen jurídico de la empresa familiar, 2010, S. 49, 50 f.

²⁰ Sánchez (o. Fn. 19), S. 49: „endémica ‘estandarización’ de los estatutos sociales“.

²¹ So Embid in Embid, Introducción al derecho de sociedades de capital, 2013, S. 35.

²² Vgl. die bereits im Jahre 2003 eingeführte sociedad limitada nueva empresa, dazu MüKoGmbH/Fleischer, 2. Aufl. 2015, Einl. Rn. 228 mwN.

1. Dogmatische Instrumente des Minderheitenschutzes

Zum Schutz der Gesellschafterminderheit haben sich im in- und ausländischen GmbH-Recht Verhaltensstandards für Mehrheitsgesellschafter herausgebildet, die in ihrer dogmatischen Herleitung variieren, funktional aber durchaus vergleichbar sind²³.

a) Deutschland: Mitgliedschaftliche Treuepflicht

Hierzulande greifen Rechtsprechung und Rechtslehre seit einem bahnbrechenden Urteil des BGH aus dem Jahre 1975²⁴ auf die Figur der Mitgliedschaftlichen Treuepflicht zurück. Danach bestehen in der GmbH nicht nur Treuepflichten des Gesellschafters gegenüber der GmbH, sondern auch im Verhältnis der Gesellschafter untereinander²⁵. Sie bilden eine wichtige Schranke der Mehrheitsmacht im GmbH-Recht und binden den Mehrheitsgesellschafter bei allen Geschäftsführungsmaßnahmen an das Gesellschaftsinteresse²⁶. Dieser ist namentlich bei der Wahrnehmung seines Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung gehalten, auf die Interessen der Minderheitengesellschafter nach den Grundsätzen der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit Rücksicht zu nehmen²⁷.

Die Mitgliedschaftliche Treuepflicht beeinflusst auch die Abstimmung über die Gewinnverwendung gem. § 46 Nr. 1 GmbHG²⁸. Nach ganz herrschender Meinung muss der Mehrheitsgesellschafter auf die Ausschüttungsinteressen der Minderheit angemessen Rücksicht nehmen²⁹. Verstößt er hiergegen durch übermäßige und damit treuwidrige Gewinnthesaurierung, so kann jeder Gesellschafter den Gewinnverwendungsbeschluss entsprechend § 243 I AktG („Verletzung des Gesetzes oder der

²³ Näher Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön (o. Fn. 1), S. 47 f.

²⁴ BGHZ 65, 15 (18) = NJW 1976, 191 – ITT.

²⁵ Vgl. MüKoGmbH/Merk, 2. Aufl. 2015, § 13 Rn. 101 ff. mwN.

²⁶ Vgl. Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, 20. Aufl. 2013, § 13 Rn. 24; grundlegend Zöllner, Die Schranken Mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht bei den privatrechtlichen Personenverbänden, 1963, S. 335 ff.

²⁷ Vgl. Scholz/Seibt, GmbHG, 11. Aufl. 2012, § 14 Rn. 58 mwN.

²⁸ Vgl. Ekkenga (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 167 ff. („bewegliche Thesaurierungsschranken kraft Treuepflicht“); Verse (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 53 ff.; enger Joost, FS 100 Jahre GmbHG, 1992, S. 289, 303 f.: nur Rechtsmissbrauch als Grenze.

²⁹ Vgl. BGHZ 132, 263 = NJW 1996, 1678 (KG); OLG Stuttgart, DB 2007, 2587 (2589) = BeckRS 2007, 15467 (KG); OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 (1957 f.) = BeckRS 2009, 10127.

Satzung“) anfechten³⁰, da anerkanntermaßen auch Generalklauseln wie die Treuepflicht und das Gleichbehandlungsgebot unter den Gesetzesbegriff dieser Vorschrift fallen³¹.

b) Spanien: Verbot des Rechtsmissbrauchs

Auch in Spanien ist der Gedanke einer Treuepflicht der Gesellschafter (deber de lealtad de los socios) bekannt – nicht zuletzt dank einer wohletablierten Rechtsvergleichungskultur³². Konkrete Rechtsfolgen scheinen aber bisher kaum an die Treuepflicht selbst oder deren Verletzung geknüpft zu werden.³³ Stattdessen bemüht man – wie in Frankreich – den Gedanken des Missbrauchs der Gesellschaftermehrheit oder -minderheit (abuso de mayoría y de minoría)³⁴, der an das allgemeine zivilrechtliche Rechtsmissbrauchsverbot anknüpft. Gemäß Art. 7 II 2 des spanischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (Código Civil, kurz: CC) ist ein Verhalten rechtsmissbräuchlich, wenn es durch die Absicht des Handelnden oder durch den Zweck oder die Umstände des Handelns offenkundig die üblichen Grenzen der Rechtsausübung zum Nachteil Dritter überschreitet. Danach kann auch die Stimmrechtsausübung eines Mehrheitsgesellschafters als rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden, wenn sie zu einer systematischen Blockade führt, die keinen anderen Zweck hat, als die Minderheitsgesellschafter zu benachteiligen³⁵. Nach diesen Maßstäben liegt ein Rechtsmissbrauch des Mehrheitsgesellschafters vor, wenn er fortgesetzt die legitime Erwartung anderer Gesellschafter enttäuscht, an den Gesellschaftsgewinnen beteiligt zu werden, und deren Gewinnbezugsrecht durch systematische Einbehaltung der Gewinne vollständig aushöhlt, ohne dass es hierfür eine wirtschaftliche

Rechtfertigung gibt³⁶. Dies wird nicht nur aus Art. 93 Buchst. a LSC hergeleitet, sondern auch aus den allgemeinen Vorschriften in Art. 1665 CC und Art. 116 I des spanischen Handelsgesetzbuchs (Código de Comercio), welche die Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschafter als Definitionsmerkmal der Gesellschaft anführen. Geeigneter Rechtsbehelf ist – wie in Deutschland – die Anfechtungsklage³⁷, die gem. Art. 204 I LSC entweder auf einen Gesetzes- oder Satzungsverstoß oder auf die Verletzung des Gesellschaftsinteresses zu Gunsten bestimmter Gesellschafter oder Dritter gestützt werden kann. Wird die Anfechtung mit der Unbilligkeit des Thesaurierungsbeschlusses begründet, greift die Rechtsprechung auf den Rechtsmissbrauch als Unterfall des Gesetzesverstoßes zurück³⁸; in der Literatur zieht man das Rechtsmissbrauchsverbot aus Art. 7 II CC zum Teil auch unmittelbar heran³⁹.

2. Gerichtliche Kontrolldichte

Im Vergleich zweier Rechtsordnungen hängt das Niveau des Minderheitenschutzes weniger von der dogmatischen Einkleidung der Schutzinstrumente – Treuepflicht oder Verbot des Rechtsmissbrauchs – ab, sondern vor allem von der gerichtlichen Kontrolldichte.

a) Deutschland: Abwägung zwischen Ausschüttungs- und Selbstfinanzierungsinteresse

Hierzulande besteht im Ausgangspunkt Einigkeit, dass die Entscheidung über die Ergebnisverwendung nicht im Belieben eines jeden Gesellschafters steht⁴⁰. Vielmehr sind die Ausschüttungsinteressen der einzelnen GmbH-Gesellschafter gegenüber dem Bedürfnis der Selbstfinanzierung und Zukunftssicherung der Gesellschaft abzuwegen⁴¹. Ein allgemeiner Vorrang der Thesaurierungsinteressen

³⁰ Vgl. Ekkenga (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 173; Verse (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 66.

³¹ Dazu Hüffer/Koch, AktG, 11. Aufl. 2014, § 243 Rn. 5.

³² Vgl. etwa Alfaro, InDret 4/2005, S. 15; Hernando, RdS n° 37, 2011, 173, 176 ff.; kritisch aber Carrasco, Foro de Derecho Mercantil n° 40, 2013, 127, 129.

³³ Monografisch Champetier de Ribes-Justeau, Les abus de majorité, de minorité et d'égalité, 2010.

³⁴ Eingehend zuletzt Megías, Anuario Jurídico y Económico Esorialense, XLVII (2014), 13 ff.

³⁵ Vgl. SAP Madrid, 23.12.2009 (SAP M 17372/2009): „una situación de sistemático bloqueo de carácter abusivo que no pudiese responder a otra finalidad que perjudicar al socio minoritario“; SAP Alicante, 15.7.2010 (SAP A 2372/2010); Campins/Alfaro (o. Fn. 7), S. 65, 74; García, RdS n° 38, 2012, 55, 59.

³⁶ Vgl. Alfaro/Campins, Otrosí n° 5, 2011, 19, 20; Cáceres, CCJC n° 90, 2012, 63, 75; Guisado, CCJC n° 71, 2006, 833, 845; Iráculis, RDM n° 281, 2011, 251, 262.

³⁷ Für ein umfassendes rechtsvergleichendes Panorama der Beschlussmängelklagen im GmbH-Recht Fleischer, GmbHR 2013, 1289.

³⁸ Vgl. Sentencia del Tribunal Supremo (STS), 7.1.2011 (STS 9284/2011).

³⁹ So etwa Ginés, RdS n° 40, 2013, 273, 305 ff.; wohl auch Hernando, RdS n° 37, 2011, 173, 199.

⁴⁰ So ausdrücklich BGHZ 132, 263 = NJW 1996, 1678 Leitsatz 3 (KG); ferner OLG Hamm, GmbHR 1992, 458 (459).

⁴¹ Vgl. BGHZ 132, 263 = NJW 1996, 1678 Leitsatz 3 (KG); OLG Hamm, GmbHR 1992, 458 (459); OLG Stuttgart, DB 2007, 2587 (2591) = BeckRS 2007, 15467 (KG); OLG Nürnberg, NZG 2008, 948 Ls. = DB 2008, 2415 (2418) = BeckRS 2008, 16971; OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 Leitsatz 2.

der Gesellschaft vor den Ausschüttungsinteressen der Gesellschafter besteht nicht⁴². In die Interessenabwägung sind nach einer jüngeren obergerichtlichen Entscheidung auf Seiten der Gesellschaft einzustellen: ihr Unternehmensgegenstand und die zu seiner Verfolgung erforderlichen Mittel einschließlich einer angemessenen (Investitions-)Planung für die weitere Entwicklung, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft, ihre Ausstattung mit Eigenkapital, die Höhe und Verfügbarkeit schon vorhandener Rücklagen, ihre Kreditfähigkeit und die Art der Ausschöpfung aufgenommener Kredite sowie die Höhe und Laufzeit von Verbindlichkeiten, die allgemeine Wirtschaftslage und Marktsituation und die Zukunftsprognose für den betroffenen Wirtschaftszweig, die Erforderlichkeit von Vorsorgemaßnahmen für Schadens- und Gewährleistungsfälle, ein etwaiger besonderer Kapitalbedarf im Hinblick auf Auseinandersetzungen der Gesellschafter und dadurch drohende Abfindungszahlungen sowie die Erforderlichkeit von Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen⁴³. Auf Seiten der Minderheitsgesellschafter sind deren wirtschaftliche Situation und ihr Interesse an einer angemessenen Rendite für den Kapitaleinsatz, insbesondere unter Berücksichtigung von Ausmaß und Höhe früherer Gewinnausschüttungen, einzustellen⁴⁴. Außerdem können die aus der Beteiligung herrührenden Steuerlasten des GmbH-Gesellschafters eine Rolle spielen⁴⁵.

Was die Darlegungs- und Beweislast anbelangt, muss die Gesellschaft nach zutreffender Ansicht den Grund der Thesaurierung hinreichend substanziert darlegen, um eine Überprüfung der Interessenabwägung zu ermöglichen⁴⁶. Dann ist es allerdings Sache des Minderheitsgesellschafters, darzulegen und zu beweisen, dass die Gesellschaft daraus kein schutzwürdiges Finanzierungsinteresse ableiten kann bzw. dass die Rücklagenbildung zur Erreichung des

Finanzierungsziels nicht erforderlich ist⁴⁷. Eine gerichtliche Überprüfung des Abwägungsergebnisses ist nach herrschender Meinung nur begrenzt möglich⁴⁸. Sofern das abwägungserhebliche Material vor der Beschlussfassung sorgfältig gesammelt und aufbereitet wurde, respektieren die Gerichte in aller Regel das unternehmerische Ermessen der Gesellschafterversammlung⁴⁹. Anders liegt es nur, wenn der Gewinnverwendungsbeschluss evident unvertretbar ist⁵⁰. Parallelen zur „Business Judgment Rule“ i.S.d. § 93 I 2 AktG liegen auf der Hand; die Gesellschafterversammlung trifft bei der Gewinnverwendung eine unternehmerische Entscheidung par excellence⁵¹.

b) Spanien: Fehlen jeglicher Rechtfertigung für eine systematische Nichtausschüttung

In Spanien prüfen die Gerichte sub specie eines Rechtsmissbrauchs, ob durch den Ergebnisverwendungsbeschluss Gewinne systematisch und fortgesetzt nicht ausgeschüttet werden, ohne dass es hierfür eine Rechtfertigung gibt. Die Literatur übersetzt dies in zwei Tatbestandsvoraussetzungen: (1) die sich über mehrere Geschäftsjahre wiederholende Entscheidung, keine Gewinne auszuschütten, und (2) das Fehlen jeglicher Rechtfertigung für diese Finanzierungspolitik⁵².

Für das Zeitmoment lautet eine aus unterinstanzlichen Entscheidungen gewonnene Faustformel des Schrifttums, dass eine dreijährige Nichtausschüttung den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs noch nicht trage, acht Jahre aber

⁴² Vgl. BGHZ 132, 263 (276) = NJW 1996, 1678.

⁴³ So die eindrucksvolle (wenn auch nicht abschließende) Aufzählung in OLG Nürnberg, NZG 2008, 948 Ls. = DB 2008, 2415 (2418) = BeckRS 2008, 16971; im Wesentlichen zustimmend Hommelhoff, GmbHR 2010, 1328 (1329 f.); ferner OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 (1958) = BeckRS 2009, 10127; Ekkenga (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 169 ff.; Verse (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 58.

⁴⁴ Vgl. OLG Nürnberg, NZG 2008, 948 Ls. = DB 2008, 2415 (2418) = BeckRS 2008, 16971; Verse (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 59.

⁴⁵ Dazu Hommelhoff, GmbHR 2010, 1328 (1330).

⁴⁶ Vgl. OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 (1958) = BeckRS 2009, 10127; Ekkenga (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 173; Verse (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 60.

⁴⁷ Vgl. OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 (1958) = BeckRS 2009, 10127; Ekkenga (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 173; Verse (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 60.

⁴⁸ Vgl. OLG Stuttgart, DB 2007, 2587 (2590) = BeckRS 2007, 15467; Hommelhoff, GmbHR 2010, 1328 (1329).

⁴⁹ Vgl. OLG Nürnberg, NZG 2008, 948 Ls. = DB 2008, 2415 (2418) = BeckRS 2008, 16971: „Eine gerichtliche Überprüfung dieser Abwägung kann allerdings nicht dazu führen, dass nur eine einzig denkbare Entscheidung alle abzuwägenden Interessen angemessen berücksichtigt und sämtliche anderen Entscheidungsmöglichkeiten über eine Gewinnverteilung fehlerhaft wären. Andernfalls würden unternehmerische Entscheidungen allein vom Gericht getroffen. Vielmehr ist ein Eingriff des Gerichts in den Kernbereich unternehmerischer Autonomie unzulässig.“

⁵⁰ Vgl. Hommelhoff, GmbHR 2010, 1328 (1329).

⁵¹ Vgl. OLG Stuttgart, DB 2007, 2587 (2591) = BeckRS 2007, 15467 (KG); OLG Nürnberg, NZG 2008, 948 Ls. = DB 2008, 2415 (2418) = BeckRS 2008, 16971; OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 Leitsatz 2.

⁵² Ausdrücklich in diesem Sinne Cáceres, CCJC n° 90, 2012, 63, 76.

jedenfalls ausreichten⁵³. Rückhalt suchen die Gerichte in der Leitentscheidung des Tribunal Supremo aus dem Jahre 2005, die auf die systematische Einbehaltung von Gewinnen abstelle und diese im konkreten Fall darin verwirklicht sah, dass die betroffene Gesellschaft noch nie Dividenden ausgeschüttet hatte⁵⁴. Verschiedene Literaturstimmen haben der Spruchpraxis vorgeworfen, dem Zeitmoment zu große Bedeutung beizumessen. Geboten sei stattdessen eine stärkere Berücksichtigung aller Fallumstände der Nichtausschüttung, z.B. der Finanzierungspolitik der Gesellschaft, vorhandener Rücklagen oder etwaiger sonstiger Geldflüsse an den Mehrheitsgesellschafter⁵⁵. Ihnen scheint eine jüngere Entscheidung des Tribunal Supremo aus dem Jahre 2011 Recht zu geben: Sie hält fest, dass eine Wiederholung der Nichtausschüttung nicht zwingend erforderlich sei, um einen Rechtsmissbrauch anzunehmen⁵⁶.

In den Vordergrund rückt damit die Frage, wann die Nichtausschüttung von Gewinnen jeglicher Rechtfertigung entbeht⁵⁷. Grundsätzlich erkennen die spanischen Gerichte an, dass Gesellschaften durch die Gewinnthesaurierung ihre Eigenkapitaldecke stärken, sich auf geplante Investitionen und anstehende Ausgaben vorbereiten und so eine gewisse Unabhängigkeit von externen Finanzierungsquellen erreichen könnten⁵⁸. Die Nichtausschüttung sei daher eine prinzipiell zulässige Unternehmenspolitik; ob eine Gesellschaft sie verfolge, liege in ihrem Ermessen. Damit vermeidet es die Rechtsprechung, sich in Fragen der Unternehmensfinanzierung und Dividendenpolitik einzumischen, und enthält sich einer Zweckmäßigkeitssprüfung⁵⁹. Nach Einschätzung spanischer Autoren hat dies dazu geführt, dass eine auch nur ansatzweise vernünftige Begründung der

Gesellschaft genügt, um selbst eine fortgesetzte Nichtausschüttung von Gewinnen zu rechtfertigen⁶⁰. So erklärte die Audiencia Provincial de Madrid 2009 in einem Fall, in dem trotz komfortabler Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft jahrelang keine Gewinne ausgeschüttet wurden, dass es zur Feststellung eines Rechtsmissbrauchs weiterer Nachweise bedürfe⁶¹. Andere Entscheidungen heben dagegen die rechtfertigenden Umstände stärker hervor und billigen eine Gewinnthesaurierung etwa dann, wenn kurzfristige Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht von bestehenden Rücklagen und liquiden Mitteln gedeckt sind⁶². Bereits geplante oder zumindest ernsthaft erwogene Investitionen können die Einbehaltung von Gewinnen ebenso rechtfertigen⁶³. In einem 2013 entschiedenen Fall akzeptierte die Audiencia Provincial de Madrid eine Thesaurierungsentscheidung, weil die einzige verfügbare Fremdfinanzierungsmöglichkeit der Gesellschaft weggefallen war und die Einnahmen gleichzeitig sanken⁶⁴.

Mehrfach billigten die Gerichte eine Gewinnthesaurierung auch dann, wenn der anfechtende Minderheitsgesellschafter die jahrelange Nichtausschüttungspolitik der Gesellschaft selbst mitgetragen hatte und seinen Gesinnungswandel nicht auf veränderte Umstände stützen konnte⁶⁵. Im eingangs geschilderten Fall hat die Audiencia Provincial de Barcelona aber klargestellt, dass die bloße Hinnahme von Thesaurierungsentscheidungen in vergangenen Geschäftsjahren die Anfechtung späterer Beschlüsse nicht hindere. Der Minderheitsgesellschafter sei weder gehalten, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen und gegen

⁵³ So Alfaro/Campins, Otrosí n° 5, 2011, 19, 20 mwN.

⁵⁴ Vgl. STS, 26.5.2005 (STS 3394/2005): „retención sistemática“. Eine konkrete Zahl aufeinanderfolgender Geschäftsjahre ohne Ausschüttung lässt sich der Entscheidung indes nicht entnehmen.

⁵⁵ Vgl. Alfaro/Campins, Otrosí n° 5, 2011, 19, 22; Cáceres, CCJC n° 90, 2012, 63, 76; ähnlich bereits Cabanas/Machado, RdS n° 4, 1995, 292, 297.

⁵⁶ STS, 7.2.2011 (STS 9284/2011); aufgegriffen von SAP Madrid, 29.9.2014 (SAP M 14064/2014).

⁵⁷ So ausdrücklich SAP Madrid, 29.9.2014 (SAP M 14064/2014).

⁵⁸ Vgl. SAP Madrid, 24.9.2009 (SAP M 10792/2009); aufgegriffen von SAP Madrid, 23.12.2009 (SAP M 17372/2009); SAP Alicante, 15.7.2010 (SAP A 2372/2010); s. auch Guisado, CCJC n° 71, 2006, 833, 839.

⁵⁹ Vgl. nur SAP Madrid, 24.9.2009 (SAP M 10792/2009).

⁶⁰ Vgl. Alfaro/Campins, Otrosí n° 5, 2011, 19, 22: „La aplicación por nuestros tribunales de la business judgment rule [...] se traduce en la práctica en que cualquier justificación mínimamente razonable para el atesoramiento [...] suele ser suficiente para declarar la validez del acuerdo.“; zustimmend García, RdS n° 38, 2012, 55, 64 mit Fn. 38; Iráculis, RDM n° 281, 2011, 251, 266.

⁶¹ Vgl. SAP Madrid, 23.12.2009 (SAP M 17372/2009): „se haría preciso un mayor esfuerzo argumental, y también probatorio“.

⁶² Vgl. SAP Zaragoza, 26.3.2002 (SAP Z 810/2002): „existencia de un desequilibrio financiero“; SAP Alicante, 15.7.2010 (SAP A 2372/2010): „un fondo de maniobra negativo y un elevado volumen de deuda; [...] están pendiente de amortización determinados préstamos“.

⁶³ Vgl. Sentencia del Juzgado de lo Mercantil (SJM) de Madrid, 28.4.2014 (SJM M 129/2014); ferner SAP Madrid, 29.9.2014 (SAP M 14064/2014).

⁶⁴ Vgl. SAP Madrid, 13.12.2013 (SAP M 22064/2013).

⁶⁵ Vgl. SAP Barcelona, 21.9.2000 (SAP B 11279/2000); SAP Valencia, 6.2.2008 (SAP V 843/2008); SAP Valencia, 7.5.2014 (SAP V 2465/ 2014).

den Mehrheitsgesellschafter zu stimmen, noch die gefassten Beschlüsse anzufechten⁶⁶.

Insbesondere wenn die Gesellschaft keine konkrete Begründung für die Einbehaltung von Gewinnen bietet oder sich auf allgemeine Formeln wie eine vorsichtige Finanzierungspolitik oder die wirtschaftliche Gesamtsituation zurückzieht, kann dem Minderheitsgesellschafter der Nachweis fehlender Rechtfertigung gelingen⁶⁷. Entscheidend ist dann, die Gerichte davon zu überzeugen, dass bereits erhebliche freiwillige Rücklagen bestehen und die finanzielle Situation der Gesellschaft gesichert ist. In der Literatur scheint jedoch Einigkeit zu bestehen, dass der Nachweis des Rechtsmissbrauchs und insbesondere des Fehlens einer Rechtfertigung schwer zu führen ist⁶⁸. Einige Stimmen plädieren daher für eine Verschiebung der Beweislast vom anfechtenden Minderheitsgesellschafter hin zur Gesellschaft⁶⁹.

IV. Prozessuale Durchsetzung des Gewinnbezugsrechts

Die erfolgreiche Anfechtung eines Thesaurierungsbeschlusses – so schwierig sie für sich schon ist – bildet lediglich die erste Hürde auf einem langen prozessualen Hindernislauf für den Minderheitsgesellschafter. Sie entfaltet nur kassatorische Wirkung und begründet noch keinen konkreten Gewinnauszahlungsanspruch⁷⁰.

1. Deutschland

Hierzulande muss der Minderheitsgesellschafter zur Durchsetzung seines Gewinnbezugsrechts nach herrschender Meinung in der Gesellschafterversammlung über einen Beschlussvorschlag zur Gewinnausschüttung abstimmen lassen. Wird sein Vorschlag abgelehnt, kann er den Beschluss anfechten und zugleich im Wege der positiven Beschlussfeststellungsklage das Zustandekommen des Ausschüttungsbeschlusses feststellen lassen, wenn die Ablehnung des Mehrheitsgesellschafters treuwidrig war⁷¹. Umstritten ist allerdings, worauf sein Klageantrag konkret zu richten ist. Das gleiche Problem stellt sich, wenn in Umsetzung der Aushungerungsstrategie des Mehrheitsgesellschafters entgegen § 42 a II GmbHG schon gar kein Gewinnfeststellungs- oder Verwendungsbeschluss gefasst wird⁷². Nach einer Auffassung kann der Minderheitsgesellschafter dann auf Fassung eines Gewinnverwendungsbeschlusses nach billigem Ermessen des Gerichts entsprechend § 315 III 2 Hs. 2 BGB klagen mit der Folge, dass sich die Zwangsvollstreckung nach § 894 ZPO richtet⁷³. Eine zweite Meinung hält nur einen Anspruch gegen die Gesellschaft auf Herbeiführung (irgend)eines rechtmäßigen Gewinnverwendungsbeschlusses für begründbar, ohne dass dessen Inhalt festgelegt werden könnte⁷⁴. Für die Zwangsvollstreckung soll dann § 888 ZPO gelten. Eine dritte Ansicht gewährt dem Minderheitsgesellschafter einen Anspruch auf Vollausschüttung, der im Wege der Leistungsklage durchzusetzen sei und mit rechtskräftigem Urteil nach § 894 ZPO als gefasst gelte⁷⁵.

2. Spanien

Auch in Spanien erschwert der Charakter des Gewinnbezugsrechts als abstraktes Recht, das erst durch einen Gesellschafterbeschluss zu einem konkreten Anspruch erwächst, die prozessuale

⁶⁶ Vgl. SAP Barcelona, 7.5.2014 (SAP B 5381/2014): „[L]a socio [sic] es libre de acudir o no a la junta y de votar en contra, y/o de impugnarla judicialmente después de su celebración.“

⁶⁷ Vgl. etwa STS, 26.5.2005 (STS 3394/2005); STS, 7.12.2011 (STS 9284/2011); SAP Álava, 19.10.2010 (SAP VI 515/2010); SAP Palma de Mallorca, 22.12.2010 (SAP IB 2639/2010); SAP Barcelona, 21.1.2011 (SAP B 1853/2011); SAP Álava, 27.3.2013 (SAP VI 685/2013); SAP La Coruña, 25.4.2014 (SAP C 1618/2014); SAP Navarra, 2.6.2014 (SAP NA 543/2014).

⁶⁸ Dazu Alfaro/Campins, Otrosí n° 5, 2011, 19, 22; García, RdS n° 38, 2012, 55, 60; Iráculis, RDM n° 281, 2011, 251, 265; „considerable esfuerzo argumental y probatorio“.

⁶⁹ In diesem Sinne Alfaro/Campins, Otrosí n° 5, 2011, 19, 22 f.; dies aufgreifend Iráculis, RDM n° 281, 2011, 251, 268; ähnlich Hernando, RdS n° 37, 2011, 173, 186.

⁷⁰ Vgl. für das deutsche Recht BGHZ 139, 299 = NZG 1998, 985 Leitsatz 1: „Der Anspruch des Gesellschafters einer GmbH auf Auszahlung des Gewinns entsteht erst mit dem nach Ablauf des Geschäftsjahres gefassten Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Gewinns.“

⁷¹ Vgl. OLG Nürnberg, NZG 2008, 948 Ls. = DB 2008, 2415 (2420) = BeckRS 2008, 16971; Bork/Oepen, ZGR 2002, 241 (245 f.); Michalski/Römermann, GmbHG, 2. Aufl. 2010, § 46 Rn. 49.

⁷² Zu solchen Fällen Ulmer/Hüffer/Schürnbrand, GmbHG, 2. Aufl. 2014, § 29 Rn. 16; Verse (o.Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 16.

⁷³ Vgl. etwa Zöllner, ZGR 1988, 416 (418 ff.); zustimmend Fastrich (o.Fn. 26), § 29 GmbHG Rn. 41; Rowedder/Schmidt-Leithoff/Pentz, GmbHG, 5. Aufl. 2013, § 29 Rn. 68.

⁷⁴ Vgl. etwa OLG Düsseldorf, NZG 2001, 1085 (1086); OLG Nürnberg, NZG 2008, 948 Ls. = DB 2008, 2415 (2419 f.) = BeckRS 2008, 16971; offengelassen in BGHZ 139, 299 (304) = NZG 1998, 985.

⁷⁵ Vgl. etwa Hessler/Strohn/Strohn, Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. 2014, § 29 GmbHG Rn. 43; Hüffer/Schürnbrand (o. Fn. 72), § 29 GmbHG Rn. 24; Verse (o. Fn. 4), § 29 GmbHG Rn. 62.

Durchsetzung. Ob sich die Entscheidungsbefugnis der Gerichte in der Nichtigerklärung rechtsmissbräuchlicher Gewinnverwendungsbeschlüsse erschöpft oder weiter geht, ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten. Den Ausgangspunkt aller Überlegungen bildet Art. 273 I LSC, wonach die Gesellschafterversammlung über die Gewinnverwendung befindet. Wie bereits erwähnt, ist sie in ihrer Entscheidung grundsätzlich frei und kann erzielte Gewinne auch vollständig einbehalten⁷⁶. Aus diesem Grund halten es verschiedene Stimmen in Rechtsprechung und Rechtslehre für unzulässig, dass ein Richter den Gesellschafterbeschluss durch seine eigene Entscheidung ersetzt, und lassen daher nur ein kassatorisches Urteil zu⁷⁷. Andere Stimmen gestehen den Gerichten dagegen weiter gehende Kompetenzen zu. Sie berufen sich auf Art. 7 II 2 CC, der es erlaubt, jene administrativen oder gerichtlichen Maßnahmen zu ergreifen, die das Fortwirken des Rechtsmissbrauchs unterbinden⁷⁸. Dem Prinzip der Nichteinmischung der Gerichte in unternehmerische Entscheidungen tragen sie mit der Figur der Ermessensreduzierung auf null Rechnung⁷⁹. Hierzu hat das Madrider Juzgado de lo Mercantil in zwei jüngeren Entscheidungen ausgeführt, dass zumindest die Frage nach dem Ob der Gewinnausschüttung nur zwei Antworten zulasse⁸⁰. Sehe man in der Thesaurierung einen Rechtsmissbrauch, bleibe als einzige rechtmäßige Entscheidung die Ausschüttung. Offen sei demnach allein der Umfang der Gewinnausschüttung, der sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben könne⁸¹. Fehlen solche Vorgaben, haben es manche Gerichte dabei belassen, die Gesellschafterversammlung zu einer erneuten Beschlussfassung zu verurteilen, aber zugleich gefordert, dass zumindest ein Teil der Gewinne

⁷⁶ Vgl. den Text zu Fn. 15.

⁷⁷ In diesem Sinne etwa Carrasco, Foro de Derecho Mercantil nº 40, 2013, 127, 130; Ortuño, in Rojo/Beltrán, Comentario de la ley de sociedades de capital, Band II, 2011, Art. 273, I, S. 2032; Silva/Sambeat, DLL nº 7844, 24.4.2012, 1, 2; Vela, DN nº 268, 2013, 53, 56; aus der Rechtsprechung wohl auch SAP Barcelona, 7.5.2014 (SAP B 5381/2014).

⁷⁸ Art. 7 II 2 CC: „[E]l abuso de derecho] dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.“; dazu Alfaro/Campins, Otrosí nº 5, 2011, 19, 25; Hernando, RdS nº 37, 2011, 173, 202.

⁷⁹ Vgl. Alfaro/Campins, Otrosí nº 5, 2011, 19, 25 f.: „Sólo excepcionalmente en aquellos casos que no hubiese margen alguno de discrecionalidad podría pensarse en la sustitución de la voluntad del órgano social por la del juzgador.“

⁸⁰ Vgl. SJM Madrid, 28.11.2013 (SJM M 490/2013); SJM Madrid, 28.4.2014 (SJM M 129/2014).

⁸¹ Vgl. SJM Madrid, 28.11.2013 (SJM M 490/2013); ebenso Alfaro/Campins, Otrosí nº 5, 2011, 19, 26.

ausgeschüttet wird; den Umfang der Ausschüttung⁸² sollte die Gesellschafterversammlung bestimmen. Andere Gerichte haben auf eine teilweise Gewinnausschüttung erkannt und den Ausschüttungsbetrag selbstständig, ausgehend vom Vorbringen des Minderheitsgesellschafters und in Abwägung mit dem Gesellschaftsinteresse festgelegt⁸³. Wieder andere haben die vollständige Ausschüttung der Gewinne des betroffenen Geschäftsjahres angeordnet⁸⁴. Das Tribunal Supremo hat eine solche Verurteilung in einer Leitentscheidung aus dem Jahre 2005 bestätigt⁸⁵, ohne sich allerdings in den Entscheidungsgründen näher mit dem Rechtsfolgenausspruch⁸⁶ auseinanderzusetzen⁸⁷.

V. Außerordentliches Austrittsrecht bei übermäßiger Gewinnthesaurierung

Mehrheits-Minderheits-Konflikte über die Gewinnverwendung erschöpfen sich häufig nicht in einer einmaligen Auseinandersetzung, sondern stellen sich jedes Jahr aufs Neue. Daher erweist sich die Suche nach einer endgültigen Konfliktlösung als besonders dringend. Will man die Auflösung der Gesellschaft vermeiden, kommt namentlich ein außerordentliches Austrittsrecht der Minderheitsgesellschafter bei übermäßiger Gewinnthesaurierung in Betracht.

1. Deutschland: Austrittsrecht aus wichtigem Grund

Das deutsche GmbH-Recht kennt seit Langem ein allgemeines Austrittsrecht aus wichtigem Grund auch ohne entsprechende Satzungsregelung⁸⁸. Es ist von

⁸² In diesem Sinne etwa SAP Álava, 19.10.2010 (SAP VI 515/2010): „[D]ebemos declarar nulos los acuerdos [...] debiéndose adoptar un nuevo acuerdo por la junta sobre aplicación de los resultados conforme con lo señalada [sic] en el fundamento cuarto.“

⁸³ Vgl. etwa SJM Madrid, 28.11.2013 (SJM M 490/2013); ferner SAP Álava, 28.12.2012 (SAP VI 971/2012), das auf die Anfechtung einer erneuten Einbehaltungsentscheidung entgegen der Anordnung des Gerichts, zumindest einen Teil der Gewinne dieses Geschäftsjahrs auszuschütten (SAP Álava, 19.10.2010, Fn. 82), ergangen ist.

⁸⁴ Vgl. den mit SAP Palma de Mallorca, 22.12.2010 (SAP IB 2639/2010), aufrechterhaltenen Tenor des JM Palma de Mallorca: „ordenando la distribución de beneficios obtenidos por dicha entidad en el ejercicio de 2008, en parte proporcional a las participaciones de cada socio“.

⁸⁵ Vgl. STS, 26.5.2005 (STS 3394/2005).

⁸⁶ Kritisch dazu Alfaro/Campins, Otrosí nº 5, 2011, 19, 26.

⁸⁷ Eingehend MüKoGmbHG/Strohn, 2. Aufl. 2015, § 34 Rn. 101 ff. mwN.

der Rechtsprechung in Anlehnung an das bürgerlich rechtliche Kündigungsrecht von Dauerschuldsverhältnissen aus wichtigem Grund (heute: § 314 BGB) entwickelt worden⁸⁸. Als nicht im Gesetz geregeltes Rechtsinstitut ist es allerdings nur dann anwendbar, wenn keine anderen, für die Gesellschaft weniger einschneidenden Möglichkeiten zur Konfliktlösung bestehen⁸⁹. Unter Berufung auf diesen ultima-ratio-Gedanken wies das OLG München im Jahre 1989 die Klage einer Minderheitsgesellschafterin ab, die ihr Austrittsbegehrten auf eine zu geringe Gewinnausschüttung gestützt hatte⁹⁰. Der BGH nahm die Revision der Klägerin nicht an und führte zur Begründung aus, es könne ihr zugemutet werden, die Gewinnverwendungsbeschlüsse anzufechten und damit die Gewinnverwendungspolitik der GmbH gerichtlich überprüfen zu lassen, ehe sie zu dem äußersten Mittel des Austritts aus der Gesellschaft greife⁹¹. Großzügiger zeigte sich zehn Jahre später das OLG Köln in einem anderen Fall, in dem es dem Mehrheitsgesellschafter attestierte, er habe versucht, den Minderheitsgesellschafter ohne wirtschaftliche Notwendigkeit durch Thesaurierungsbeschlüsse „auszuhungern“. Dieser eindeutige Missbrauch der Mehrheitsmacht berechtigte den Minderheitsgesellschafter zum Austritt aus wichtigem Grund⁹². Die neuere Literatur pflichtet dem vielfach bei, weil es unzumutbar sei, wenn die Mehrheit in hartnäckiger und uneinsichtiger Weise auf ihrem Standpunkt beharre und den Minderheitsgesellschafter damit immer wieder in Prozesse zwinge⁹³. Unterschiedlich beurteilt wird, ob ein Austrittsrecht auch bei einer rechtmäßigen Thesaurierung in Betracht kommt, etwa wenn den Minderheitsgesellschafter die geringe Verzinsung seiner Einlage besonders hart trifft und die entgegenstehenden Interessen der GmbH nicht überwiegen⁹⁴.

2. Spanien: Gesetzliches Austrittsrecht wegen Nichtausschüttung (Art. 348 bis LSC)

a) Neuregelung von 2011

Im spanischen Kapitalgesellschaftsrecht besteht ein gesetzliches Austrittsrecht nur bei bestimmten, abschließend aufgezählten Grundlagenbeschlüssen⁹⁵. Dazu gehören Fortsetzungsbeschlüsse einer auf bestimmte Zeit gegründeten oder bereits aufgelösten Gesellschaft⁹⁶, Umwandlungsbeschlüsse⁹⁷ oder Beschlüsse über eine Sitzverlegung ins Ausland⁹⁸. Für das Problem rechtsmissbräuchlicher Gewinnthesaurierung hat der spanische Gesetzgeber im Jahre 2011⁹⁹ eine weitere Fallgruppe hinzugefügt: Art. 348 bis LSC eröffnet Gesellschaftern von Kapitalgesellschaften¹⁰⁰ ein Austrittsrecht wegen der Nichtgewährung von Dividenden. Dieses gesetzliche Austrittsrecht entsteht ab dem fünften Geschäftsjahr seit Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister, wenn die Gesellschafterversammlung nicht die Ausschüttung einer Dividende in Höhe des gesetzlich festgelegten Mindestbetrags beschließt. Die obligatorische Mindestausschüttung beträgt ein Drittel des im vergangenen Jahr erwirtschafteten und ausschüttungsfähigen Gewinns¹⁰¹. Zum Austritt berechtigt sind Gesellschafter, die für eine Gewinnausschüttung bestimmt haben; sie können ihr Recht innerhalb eines Monats ab dem Tag der Versammlung ausüben. Erklärtes Ziel der Neuregelung, die auf einen Reformvorschlag aus

⁹⁵ Vgl. Alonso, RDM n° 287, 2013, 89, 93; Campins/Alfaro (o. Fn. 7), S. 65, 71 f.; monografisch Rodas, La separación del socio en la Ley de sociedades de capital, 2013, S. 22 f.; dies., RDM n° 288, 2013, 141, 143 f., 151 f.

⁹⁶ Art. 346 I Buchst. b und c LSC.

⁹⁷ Art. 346 III LSC iVm Art. 15 I Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (kurz: LME).

⁹⁸ Art. 346 III LSC iVm Art. 99 LME (bzw. Art. 62 LME bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen). Ein auf die SL beschränktes Austrittsrecht entsteht zudem bei Beschlüssen, die das Regelungsregime von Anteilsübertragungen ändern, Art. 346 II LSC.

⁹⁹ Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, in Kraft getreten am 2.10.2011.

¹⁰⁰ Die Regelung gilt sowohl für die SL wie auch die sociedad anónima (SA). Ausdrücklich ausgenommen sind börsennotierte Gesellschaften, Art. 348 bis III LSC.

¹⁰¹ Zu einzelnen Streitfragen über den Umfang der Mindestausschüttung Cáceres, DN n° 263-264, 2012, 29, 36 f.; Rojo/Cañabate, REF 2 (2), 2012, 41 (45 f.); Silva/Sambeat, DLL n° 7844, 24.4.2012, 1, 4; SJM Barcelona, 25.9.2013 (SJM B 379/2013).

⁸⁸ Grundlegend BGHZ 9, 157 (161 f.) = NJW 1953, 780.

⁸⁹ Vgl. zuletzt BGH, NZG 2014, 541 Rn. 12; Strohn (o. Fn. 87), § 34 GmbHG Rn. 189.

⁹⁰ Vgl. OLG München, GmbHR 1990, 221.

⁹¹ Vgl. BGH, GmbHR 1990, 222.

⁹² Vgl. OLG Köln, NZG 1999, 1222 (1223).

⁹³ So Strohn (o. Fn. 87), § 34 GmbHG Rn. 187.

⁹⁴ Dafür Röhricht, FS Kellermann, 1991, S. 361, 383; dagegen für Familiengesellschaften Eschenlohr, FS Sigle, 2000, S. 131, 138.

dem Jahre 2002 zurückgeht¹⁰², ist es, eine regelmäßige Gewinnausschüttung sicherzustellen und Gesellschafterkonflikte zu reduzieren¹⁰³.

b) Rechtspolitische Kritik

Die konkrete Ausgestaltung des Art. 348 bis LSC hat eine Welle der Kritik ausgelöst¹⁰⁴, die neben redaktionellen Mängeln der Norm¹⁰⁵ auch materielle Grundentscheidungen des Gesetzgebers betrifft¹⁰⁶. Bedenken richten sich insbesondere gegen die Anknüpfung des Austrittsrechts an eine nur einmal ausbleibende oder unter der gesetzlichen Schwelle liegende Gewinnausschüttung. Auf diese Weise erfasse die Vorschrift nicht nur die pathologischen Fälle missbräuchlicher Gewinnthesaurierung, sondern gebe den Minderheitsgesellschaftern ein weiter gehendes Gestaltungsrecht zur Durchsetzung ihrer pekuniären Interessen an die Hand¹⁰⁷. Diese könnten die Gesellschaft vor die Wahl stellen, entweder die erwirtschafteten Gewinne zumindest teilweise ausschütten oder ihren Austritt gegen eine angemessene Abfindung hinnehmen zu müssen. Zahlreiche Autoren monieren, dass der Kapitalabfluss beim Austritt eines Minderheitsgesellschafters – zumal in Zeiten der allgemeinen Wirtschaftskrise – eine ernsthafte Bedrohung für viele Gesellschaften darstelle, und warnen insbesondere vor Liquiditätsengpässen angesichts der kurzfristig fälligen Abfindungsansprüche¹⁰⁸. Ähnliche Gefahren sehen

sie im Falle der Ausschüttung des gesetzlichen Mindestbetrags, der zu hoch sei und die Gesellschaften in ihrer Finanzplanung zu stark einschränke¹⁰⁹. Vor allem aber fehle eine Möglichkeit, im Einzelfall von einer Ausschüttung abzusehen, wenn die wirtschaftliche oder finanzielle Situation einer Gesellschaft dies erfordere¹¹⁰. Als ein möglicher Ausweg wird verschiedentlich bereits vorgeschlagen, das Austrittsrecht über das Verbot des Rechtsmissbrauchs oder die Treuepflicht der Gesellschafter einzuschränken¹¹¹. Rechtssicherheit für die betroffenen Gesellschaften lässt sich auf diesem Wege allerdings kaum erreichen.

c) Suspendierung des Inkrafttretens bis Ende 2016

Wegen der breiten Kritik ist die Anwendung des Art. 348 bis LSC bereits acht Monate nach seinem Inkrafttreten zunächst bis zum 31.12.2014, inzwischen bis Ende 2016 suspendiert worden¹¹². Der im Mai 2014 verabschiedete Vorentwurf zu einem Handelsgesetzbuch (Anteproyecto de Ley de Código Mercantil) hält jedoch grundsätzlich am Austrittsrecht wegen der Nichtgewährung von Dividenden fest. Allerdings verringert er die obligatorische Mindestdividende auf ein Viertel der ordentlichen ausschüttungsfähigen Gewinne und knüpft das Austrittsrecht an die weitere Voraussetzung, dass bereits im vorangegangenen Geschäftsjahr ausschüttungsfähige Gewinne erzielt worden sind¹¹³. In der Begründung des Vorentwurfs

¹⁰² Vgl. Art. 150 Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles, Madrid, 2002.

¹⁰³ Vgl. die Begründung des Gesetzentwurfs bei Brenes, RdS n° 37, 2011, 19, 31 mit Fn. 41: „mecanismo técnico muy adecuado para garantizar un reparto parcial periódico y para reducir esa conflictividad“; zur Entstehungsgeschichte auch Silva/Sambeat, DLL n° 7844, 24.4.2012, 1, 2 f.

¹⁰⁴ Vgl. Campins/Alfaro (o. Fn. 7), S. 65, 77: „una buena idea pero mal articulada“; für eine positive Gesamteinschätzung aber García, RdS n° 38, 2012, 55, 63 ff., insbesondere 64: „llave para [...] abrir la sociedad cerrada“.

¹⁰⁵ Auslegungsbedürftig sind etwa die Anforderungen an das Abstimmungsverhalten des Gesellschafters; dazu Brenes, RdS n° 37, 2011, 19, 32; Cáceres, CCJC n° 90, 2012, 63, 87 f.; García, RdS n° 38, 2012, 55, 66 ff.; Rojo/Cañabate, REF 2 (2), 2012, 41 (44 ff.), Silva/Sambeat, DLL n° 7844, 24.4.2012, 1, 3 f.; Vela, DN n° 268, 2013, 53, 57 f.

¹⁰⁶ Behauptet wird zum Teil gar eine Verfassungswidrigkeit der Norm wegen Verletzung der unternehmerischen Freiheit und des Gebots der Rechtssicherheit, so Ibáñez, DN n° 263-264, 2012, 7, 15 ff.

¹⁰⁷ Vgl. Campins/Alfaro (o. Fn. 7), S. 65, 79 f., 87; Rodas (o. Fn. 95), S. 80.

¹⁰⁸ Vgl. Brenes, RdS n° 37, 2011, 19, 33; Cáceres, DN n° 263-264, 2012, 29, 36; Ibáñez, DN n° 263-264, 2012, 7, 16; wohl

auch Campins/Alfaro (o. Fn. 7), S. 65, 80 f.; anders aber García, RdS n° 38, 2012, 55, 65.

¹⁰⁹ Vgl. Brenes, RdS n° 37, 2011, 19, 32 f.; Rodas (o. Fn. 95), S. 79: „descapitalización obligatoria“.

¹¹⁰ Vgl. Brenes, RdS n° 37, 2011, 19, 32 f.; Campins/Alfaro (o. Fn. 7), S. 65, 80 f.; Luceño, DLL n° 7709, 5.10.2011, 6; Silva/Sambeat, DLL n° 7844, 24.4.2012, 1, 5. Hingewiesen wird auch auf Konflikte mit externen Finanzierungsverträgen der Gesellschaft, die u. U. eine Gewinnausschüttung untersagen, vgl. Rojo/Cañabate, REF 2 (2), 2012, 41 (46); Silva/Sambeat, DLL n° 7844, 24.4.2012, 1, 6; Vela, DN n° 268, 2013, 53, 58.

¹¹¹ Vgl. Cáceres, CCJC n° 90, 2012, 63, 88 f.; Campins/Alfaro (o. Fn. 7), S. 65, 81 f.; Silván/Pérez, DLL n° 7813, 7.3.2012, 1, 5 f.

¹¹² Vgl. Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital und Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal; zur Bedeutung dieser „Suspendierung“ Vilarrubias/Fauria, RdS n° 41, 2013, 429. Einge Fälle haben dennoch die Gerichte erreicht, vgl. SJM Barcelona, 25.9.2013 (SJM B 379/2013); SAP La Coruña, 21.3.2014 (SAP C 2101/2014).

¹¹³ Vgl. Art. 271 6 Abs. 1: „[...] derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, una cuarta parte de los beneficios [...], siempre que se hayan obtenido dichos beneficios durante los dos

heißt es dazu, auf diese Weise solle ein besseres Gleichgewicht zwischen dem legitimen Interesse der Gesellschaft an einer vernünftigen Ergebnisverwendung und dem des Gesellschafters an einer Gewinnausschüttung erreicht werden¹¹⁴. Sollte das Austrittsrecht wegen Nichtgewährung von Dividenden zum Jahresbeginn 2017 oder im Rahmen eines neuen Gesetzes tatsächlich in Kraft treten, dürfte die bereits eröffnete Diskussion neu entflammen, ob es im Gesellschaftsvertrag abbedungen werden kann¹¹⁵. Gleches gilt für die Debatte über allfällige Norm-vermeidungsstrategien¹¹⁶.

VI. Rechtsvergleichende Gesamtwürdigung

Aushungerungsstrategien des Mehrheitsgesellschafters sind ein Grundproblem des Minderheitenschutzes im GmbH-Recht, für dessen Lösung sich national und international noch kein Königsweg abzeichnet. Die vielfach erhobene Mahnung, die Gewinnausschüttung im Gesellschaftsvertrag vorzustrukturieren¹¹⁷, verhallt in Deutschland und Spanien zumeist ungehört: Gesellschafter geschlossener Kapitalgesellschaften, die einander persönlich kennen und vertrauen, verspüren im Gründungsstadium wenig Neigung, mögliche Streitpunkte anzusprechen und dadurch vielleicht den Vertragsschluss zu gefährden¹¹⁸. Ob ein gesetzlicher Regelungsauftrag dem abzuhelfen vermag, erscheint entgegen mancher Reformstimmen¹¹⁹ keineswegs ausgemacht: Sein sanfter Stups (nudge¹²⁰) macht die (Minderheits-)Gesellschafter zwar auf das Regelungsproblem aufmerksam, mindert allerdings nicht ihren übermäßigen Optimismus, der eine häufige Ursache

ejercicios anteriores.“; im Vorfeld Luceño, DLL n° 7912, 30.7.2012, 10, 11.

¹¹⁴ Vgl. Motivo III-78 des Vorentwurfs i. d. F. vom 30.5.2014.

¹¹⁵ Dazu Alonso, RDM n° 287, 2013, 89, 99 ff.; Campins/Alfaro (o. Fn. 7), S. 65, 82 ff.; Silván/Pérez, DLL n° 7813, 7.3.2012, 1, 3 f.

¹¹⁶ Dazu bereits Silván/Pérez, DLL n° 7813, 7.3.2012, 1, 6 f., unter der Überschrift „Estrategias de la mayoría“; ferner Luceño, DLL n° 7912, 30.7.2012, 10, 11.

¹¹⁷ So etwa Hommelhoff in Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 18. Aufl. 2012, § 29 Rn. 26 mwN.

¹¹⁸ Dazu Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön (o. Fn. 1), S. 42 f.

¹¹⁹ Fn. 12.

¹²⁰ Begriff und Konzept: Thaler/Sunstein, Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness, 2008; für gesellschaftsrechtliche Adaptionen Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön (o. Fn. 1), S. 63 ff.; Schmolke, Grenzen der Selbstbindung im Privatrecht, 2014, S. 626 ff.; Sneirson, Wis. L. Rev. 2008, 899.

für falsche Wahlentscheidungen bei der Anbahnung eines Gesellschaftsvertrags darstellt¹²¹. Unabhängig davon ist es im Gründungsstadium schwierig, die zukünftige Geschäftsentwicklung zuverlässig abzuschätzen und für sie eine sachgerechte Ausschüttungsklausel zu konzipieren. Nicht ohne Grund soll die Austrittsregelung in Art. 348 bis LSC erst ab dem fünften Geschäftsjahr eingreifen, wenn sich die Gesellschaft und ihr Geschäftsmodell stabilisiert haben. Noch weniger geeignet ist eine einheitliche gesetzliche Vorgabe zur Mindestausschüttung, die weder der Vielfalt der Unternehmen (Größe, Branche, Eigenkapitalbedarf) noch den wirtschaftlichen Wechselseiten im Leben einer Gesellschaft gerecht wird. Sie hat sich daher in Deutschland und Spanien mit Recht nicht durchgesetzt und kommt international nur vereinzelt vor, etwa in Finnland und Portugal¹²². Schließlich böte eine Sonderregelung für Gewinnausschüttungen in Gesellschaftsvertrag oder Gesetz stets nur einen unvollkommenen Minderheitenschutz, weil ein unredlicher Mehrheitsgesellschafter auf zahlreiche andere Ausbeutungsstrategien zurückgreifen kann, die von unausgewogenen Drittgeschäften mit der Gesellschaft über ein exzessives Geschäftsführergehalt bis hin zur heimlichen Aneignung von Geschäftschancen und Gesellschaftsressourcen reichen¹²³.

Rechtsprechung und Rechtslehre konzentrieren sich daher folgerichtig auf einen nachgelagerten Schutz der Minderheitsgesellschafter, der in geschlossenen Kapitalgesellschaften unentbehrlich ist. Während die Anteilseigner börsennotierter Gesellschaften Wertsteigerungen infolge ständiger Gewinnthesaurierung durch einen Verkauf ihrer Anteile in klingende Münze umsetzen können (so genannte homemade dividend¹²⁴), steht Minderheitsgesellschaftern in der GmbH ein solcher Weg nicht offen. Dieser Unterschied rechtfertigt eine

¹²¹ Vgl. Fleischer/Schmolke/Zimmer in Fleischer/Zimmer, Beitrag der Verhaltensökonomie (Behavioral Economics) zum Handels- und Wirtschaftsrecht, 2011, S. 9, 59 f.; ferner Molitor, 14 Fordham J. Corp. & Fin. L. 491 (2009): „Unless some level of protection is mandatory, trusting and optimistic shareholders may be induced to abandon it at the outset of the venture.“

¹²² Vgl. Fleischer (o. Fn. 6), unter G I 4 a.

¹²³ Vgl. die „Typologie minderheitsschädigender Verhaltensweisen“ bei Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön (o. Fn. 1), S. 32 ff.; noch detaillierter O’Neal/Thompson, Oppression of Minority Shareholders and LLC Members, 2. Aufl. 2009, §§ 3:4-3:20, die einen Katalog von 17 Verdrängungsstrategien („Squeeze-out Techniques“) vorstellen.

¹²⁴ Vgl. Easterbrook/Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, 1991, S. 231: „Investors can turn future profits into today’s cash by selling stock, a form of homemade dividend.“

höhere gerichtliche Kontrolldichte der Gewinnverwendungsentscheidung in geschlossenen Kapitalgesellschaften¹²⁵. Geboten ist eine umfassende Würdigung aller Fallumstände bei der Anwendung der jeweiligen Generalklausel. Das deutsche Recht lässt dem Minderheitsgesellschafter mit der mitgliedschaftlichen Treuepflicht dabei vorderhand einen größeren Schutz angedeihen als der spanische Rechtsmissbrauchsgedanke, auch wenn die praktischen Ergebnisse enger beisammen liegen dürften als ihre theoretischen Ausgangspunkte¹²⁶. Die dogmatische „Wahl der Waffen“ folgt häufig nationalen Pfadabhängigkeiten: In den Vereinigten Staaten bevorzugen die Gerichte zumeist einen treuepflichtgestützten Ansatz, der dem deutschen in vielerlei Hinsicht gleicht¹²⁷; in Frankreich¹²⁸ und Italien¹²⁹ dominiert dagegen wie in Spanien ein missbrauchsgestütztes Schutzkonzept.

Im konkreten Zugriff ist sowohl in Deutschland wie in Spanien die wirtschaftliche Rechtfertigung der Gewinnthesaurierung wesentlich für die rechtliche Bewertung, wobei die dazu vorgetragenen Erwägungen in beiden Rechtsordnungen nur eingeschränkter gerichtlicher Überprüfung unterliegen. Für einen wirksamen Minderheitenschutz ist es wichtig, dass die Gesellschaft im Streitfall – wie in Deutschland¹³⁰ – die Gründe für eine Gewinnthesaurierung substanziert vortragen muss. Sie ist hierzu auch ohne Weiteres in der Lage, weil dem Geschäftsführer die Finanzierungs- und Investitionsplanung obliegt und er hierfür über alle erforderlichen Informationen

verfügt. Halten die angeführten Gründe einer Plausibilitätskontrolle stand, werden (und sollten) die Gerichte die Entscheidung der Gesellschaftermehrheit in der Regel nicht weiter hinterfragen, um deren Prärogative bezüglich der Unternehmensfinanzierung und Dividendenpolitik nicht zu beschneiden. Zur Begründung stützt man sich in Deutschland und Spanien verschiedentlich auf den Grundgedanken der „Business Judgment Rule“¹³¹; in den angelsächsischen Systemen ist diese Rechtsfigur sogar unmittelbar anwendbar, weil dort nicht die Gesellschafterversammlung, sondern das Geschäftsführungsorgan (board of directors) für die Gewinnverwendung zuständig ist. Eine ganz ähnliche Zurückhaltung hinsichtlich der Unternehmensplanung legen die Gerichte hierzulande im Übrigen bei der Wahrnehmung ihres Kontrollauftrags im Spruchverfahren an den Tag: Sie orientieren sich bei der Überprüfung der Unternehmensbewertung an den Planungen und Prognosen der Geschäftsleitung, sofern diese auf realistischen Annahmen beruhen und nicht widersprüchlich sind¹³³.

Erfolgreich anfechtbar sind Thesaurierungsentscheidungen dann, wenn Geschäftsführung oder Gesellschaftermehrheit für sie keine schlüssigen Gründe vortragen oder wenn ihre Ausführungen zur zukünftigen Investitions- und Finanzierungsplanung auf unrealistischen Annahmen beruhen. Ersteres war nach Auffassung des OLG Brandenburg im Beispiel Nr. 1 der Fall¹³⁴. Indizien für ein treuwidriges oder rechtsmissbräuchliches

¹²⁵ Dazu bereits sehr früh Manne, 53 Va. L. Rev. 259, 280 (1967): „[A] failure to pay dividends may be used by the controlling group in small corporations to force minority shareholders to sell their shares at a bargain price. Here it can be seen that it makes considerably less sense to adopt a judicial hands-off attitude. In fact, it would not be too extreme to put the burden of proving the propriety of its dividend policy on the controlling shareholders.“

¹²⁶ Vgl. etwa OLG Nürnberg, NZG 2008, 948 Ls. = DB 2008, 2415 (2418) = BeckRS 2008, 16971: „Dies hat zur Folge, dass die von der Gesellschafterversammlung getroffene Entscheidung nur äußerst restriktiv daraufhin überprüft werden darf, ob sie gegen gesetzliche Schranken (§§ 138, 226, 242, 826 BGB) verstößt oder ob sich das Abstimmungsverhalten einzelner Gesellschafter bei Abwägung der einzustellenden Interessen [...] als Verstoß gegen die Treuepflicht der Gesellschafter erweist.“

¹²⁷ Vgl. etwa Moll/Ragazzo, The Law of Closely Held Corporations, Loseblatt, Stand: 2011, § 7.01[C] [4] mwN.

¹²⁸ Vgl. etwa Merle/Fauchon, Sociétés commerciales, 18. Aufl. 2014, Rn. 664 (für die société anonyme).

¹²⁹ Vgl. etwa Campobasso, Diritto delle società, 8. Aufl. 2012, S. 495 (für die società per azioni); Trib. Milano, 22.4.1993, Dir. fall., 1994, II, 122 („eccesso di potere“); 28.5.2007, Giur. it. 2008, 130.

¹³⁰ Fn. 46.

¹³¹ Vgl. für Deutschland Hommelhoff, GmbHHR 2010, 1328 (1329): „Deshalb gelten für diesen Gesellschafterentscheid die rechtsstrukturellen Leitlinien der business judgment rule“; für Spanien der Hinweis bei Alfaro/Campins, Otrosí nº 5, 2011, 19, 22.

¹³² Grundlegend dazu der „landmark case on court-compelled dividends for closed corporations“, Dodge v. Ford Motor Co., 204 Mich. 459, 500 (1919): „It is a well-recognized principle of law that the directors of a corporation, and they alone, have the power to declare a dividend of the earnings of the corporation, and to determine its amount.“

¹³³ So OLG Stuttgart, AG 2006, 421 (426); NZG 2011, 30 Ls. = AG 2011, 49 (53) = BeckRS 2010, 25689; zustimmend Fleischer/Bong, NZG 2013, 881 (888): „Die Alternative kann [...] nicht darin liegen, dem Spruchrichter die Unternehmensplanung zu überlassen.“

¹³⁴ Vgl. OLG Brandenburg, ZIP 2009, 1955 (1958) = BeckRS 2009, 10127: „Dieser Vortrag ist unzureichend. Der allgemeine Hinweis auf harten Wettbewerb kann nicht eine Vollthesaurierung über sieben Jahre hinweg in der genannten Größenordnung rechtfertigen. Gleches gilt für den Vortrag zum Rohgewinn. Die Klägerin [= die GmbH] unterlässt es, die mittelfristigen Investitions- und Finanzpläne für ihre sinnvolle wirtschaftliche Entwicklung und/oder Stabilisierung vorzutragen.“

Verhalten können außerdem darin liegen, dass der Mehrheitsgesellschafter nach einem Zerwürfnis mit dem Minderheitsgesellschafter zu einer Politik der Vollthesaurierung übergeht, von der er wegen eines auskömmlichen Geschäftsführergehalts weniger stark belastet wird als der Minderheitsgesellschafter. Dies schwingt in der Entscheidung der Audiencia Provincial de Barcelona im Beispiel Nr. 2 mit.¹³⁵ Allein der Umstand, dass nur der Mehrheits- und nicht auch der Minderheitsgesellschafter als Geschäftsführer amtiert, macht eine Gewinnthesaurierung ohne das Hinzutreten weiterer Umstände jedoch noch nicht verdächtig. Anders liegt es womöglich, wenn der Minderheitsgesellschafter auf Grund der Fallumstände die berechtigte Erwartung hegen durfte, an den de facto dividends der Gesellschaft in der einen oder anderen Form zu partizipieren.¹³⁶

Was die Anspruchsdurchsetzung anbelangt, stehen das deutsche und das spanische Recht ebenso wie viele andere kontinentaleuropäische Jurisdiktionen vor der Schwierigkeit, dass den Gerichten die Kompetenz zur Anordnung konkreter Gewinnausschüttungen fehlt. Ihre Zurückhaltung reicht indes nicht so weit wie die des französischen Rechts, das besonders streng auf den ehernen Prinzipien der Nichteinmischung des Richters in die Unternehmensführung und der Souveränität der Gesellschaftsorgane beharrt.¹³⁷ So behelfen sich französische Gerichte mehr schlecht als recht mit der Bestellung eines gerichtlichen Sachwalters (*mandataire de justice*), der an Stelle des rechtsmissbräuchlich handelnden Gesellschafters dessen Stimmrecht ausübt¹³⁸, zeigen sich jüngst aber etwas flexibler.¹³⁹ Eine ebenso einfache wie elegante

Lösung halten hier nur die equitable remedies im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten bereit: Sie gewähren den Gerichten im Rahmen der unfair-prejudice- bzw. oppression-Doktrin auf der Rechtsfolgenseite große Gestaltungsfreiheit („as they think fit“), die auch eine Ermächtigung zur Anordnung konkreter Dividendenzahlungen einschließt.¹⁴⁰ Diese Flexibilität haben US-Gerichte gelegentlich zu zeitlich weitreichenden Rechtsfolgenaussprüchen genutzt, um dem Minderheitsgesellschafter die Last einer alljährlichen Klage abzunehmen: In einem Urteil aus dem Jahre 1955 billigte der Texas Supreme Court einen erstinstanzlichen Richterspruch, der die Gesellschaft verpflichtete, in den kommenden Jahren eine angemessene Dividende aus erzielten Gewinnen auszuschütten, sofern dies guter unternehmerischer Praxis nicht eindeutig zuwiderlief¹⁴¹; ähnlich urteilte der Michigan Court of Appeals im Jahre 1977 in einem Fall, in dem sich das erstinstanzliche Gericht die Zuständigkeit zur Anordnung zukünftiger Dividenden für fünf weitere Jahre vorbehalten hatte.¹⁴² Es steht zu erwarten, dass die Diskussion über einen tragfähigen Kompromiss zwischen den konfliktierenden Zielen eines wirksamen Minderheitenschutzes und der gerichtlichen Nichteinmischung in die Gesellschaftsinterna auch in Kontinentaleuropa an Fahrt aufnehmen wird.

Als letztes Mittel billigt Deutschland dem Minderheitsgesellschafter bei übermäßiger Gewinnthesaurierung ein Lösungsrecht auf richterrechtlicher Grundlage zu. Spanien hat mit Einführung des Art. 348 bis LSC einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Ein solches Lösungsrecht hat viel Charme, weil es jahrelange zermürbende Auseinandersetzungen durch einen endgültigen Schnitt vermeiden hilft. Es muss aber mit Augenmaß gehandhabt werden, um den rechtsökonomisch an sich sinnvollen lock-in-Effekt einer Gesellschafterbeteiligung nicht zu gefährden.¹⁴³ In seiner konkreten Ausgestaltung spricht vieles für eine Generalklausel, die sich – anders als Art. 348 bis

¹³⁵ Fn. 3. Im Ergebnis erklärte die AP Barcelona den Nichtausschüttungsbeschluss für nichtig. Gestützt auf ein Sachverständigengutachten war der Klägerin der Nachweis gelungen, dass die Gewinnthesaurierung wirtschaftlich nicht gerechtfertigt war.

¹³⁶ Näher dazu Moll, 60 Wash. & Lee L. Rev. 841, 876–877 (2003): „Perhaps the clearest case for judicial intervention into a close corporation’s dividend policy involves the majority shareholder’s receipt of ‘de facto dividends’ to the exclusion of the minority shareholder. [...] A ‘de facto dividend’, therefore, is simply a distribution of corporate profit to shareholders that a company disguises, often for tax reasons, as some other form of compensation or perquisite.“

¹³⁷ Vgl. Hovasse, Dr. sociétés 2014, 33, 34: „[I]l n’appartient pas au juge de dicter cet intérêt [de la société] mais de contrôler qu’il est une justification sérieuse à la décision des majoritaires.“

¹³⁸ Vgl. etwa Cass. com., 31.3.2009, Rev. soc. 2009, 601. Dies für das spanische Recht ablehnend Ginés, Rds n° 40, 2013, 273, 311 mwN.

¹³⁹ Vgl. Cass. 3e civ., 7.2.2012, Rev. soc. 2012, 622: „[L]a cour d’appel, qui n’a pas prononcé dans son dispositif la distribution

des dividende mais celle de bénéfices, a pu [...] retenir un abus de majorité et ordonner la distribution de ces bénéfices [...].“

¹⁴⁰ Vgl. für das US-amerikanische Recht O’Neal/Thompson (o. Fn. 123), § 9:20: „Compelling declaration of dividends“; für das englische Recht Joffe/Drake/Richardson/Lightman/Collingwood, Minority Shareholders, 4. Aufl. 2011, Rn. 7161 ff.; allerdings legen die englischen Gerichte selbst keine bestimmte Dividende fest, sondern verpflichten den Mehrheitsgesellschafter zum Erwerb der Minderheitsanteile zu einem angemessenen Preis, vgl. Sealy/Worthington, Cases and Materials in Company Law, 19. Aufl. 2013, S. 543.

¹⁴¹ Vgl. Patton v. Nicholas, 154 Tex. 385, 399 (1955).

¹⁴² Vgl. Miller v. Magline, Inc., 76 Mich. App. 284, 315 (1977).

¹⁴³ Allgemein dazu Rock/Wachter, 24 J. Corp. L. 913 (1999).

LSC – nicht nur auf die übermäßige Gewinnthesaurierung beschränkt, sondern auch alle sonstigen Ausbeutungsstrategien des Mehrheitsgesellschafters erfasst. Eine mittlere Lösung mit vier Fallbeispielen fand sich in Art. 18 Nr. 1 Buchst. d des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über das Statut der Europäischen Privatgesellschaft¹⁴⁴: „Ein Anteilseigner hat das Recht, aus der SPE auszuscheiden, wenn deren Geschäfte in einer Weise geführt werden oder wurden, die seinen Interessen auf Grund eines der nachstehenden Sachverhalte schwer schadet: [...] (d) es wurden mindestens drei Jahre lang keine Dividenden ausgeschüttet, obwohl die Finanzlage der SPE eine solche Ausschüttung erlaubt hätte.“ In jedem Fall steht und fällt die rechtspraktische Nützlichkeit eines Austrittsrechts aus wichtigem Grund mit der Angemessenheit der Abfindung¹⁴⁵, die in Deutschland und Spanien grundsätzlich gewahrt erscheint: Hierzulande hat der GmbH-Gesellschafter, der durch missbräuchliches Verhalten des Mehrheitsgesellschafters zum Austritt aus wichtigem Grund veranlasst worden ist, einen Abfindungsanspruch in Höhe des vollen wirtschaftlichen Werts seines Geschäftsanteils¹⁴⁶, in Spanien ist dem austretenden Gesellschafter gem. Art. 353 ff. LSC der angemessene Wert (valor razonable) seines Anteils zu ersetzen¹⁴⁷



** Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg.



*** Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg.

¹⁴⁴ KOM(2008) 396 endg.

¹⁴⁵ Zur Bedeutung der Ausgestaltung der Rechtsfolgen eines Austritts für die betroffene Gesellschaft Alonso, RDM n° 287, 2013, 89, 111 f.

¹⁴⁶ Vgl. OLG Köln, NZG 1999, 1222 Leitsatz 2; Fleischer, in Fleischer/Hüttemann, Rechtshandbuch Unternehmensbewertung, 2015, § 22 Rn. 12.

¹⁴⁷ Vgl. Alfonso in Embid, Introducción al derecho de sociedades de capital, 2013, S. 193 ff.

Kurzbeiträge / Artículos breves

Una reducción general de personal no justifica el cese de un miembro del consejo de dirección

Dr. Katharina Haneke M.A.* und/ y Nereida Sánchez Pérez, LL.M.**

Con su sentencia del 17-02-2015 (Az.5 U 111/14), el Tribunal Superior (OLG) de Fráncfort ha declarado ineficaz la revocación del nombramiento de un miembro del consejo de dirección por parte del consejo de control de un banco AG (sociedad anónima alemana). El nombramiento de un miembro del consejo de dirección solamente se puede revocar por causa justa y no es suficiente el proyecto general de reducción de personal del banco.

Sobre los hechos

El demandante era desde 2006 miembro del consejo de dirección, compuesto por un total de nueve personas, en el banco demandado. La vigencia de su cargo fue prorrogada en el 2011 hasta mayo de 2017. A finales de 2013, el consejo de control del banco cesó al demandante de su cargo de miembro del consejo de dirección. Para justificar el cese, el banco alegó una reducción considerable de personal, en el cual también se debía incluir los ámbitos de dirección subordinados al consejo de administración. Por esto, el banco no consideraba justificado excluir al propio consejo de dirección de la reducción de personal. Además, mediante la reducción de tamaño del consejo de dirección, se pretendía obtener una dirección mejor y más eficiente del negocio operativo y una mejora en la comunicación interna.

Sobre los fundamentos de la sentencia

El demandado no puede exigir la nulidad del acuerdo de cese, puesto que el acuerdo del consejo de control

en cuestión no presenta ningún defecto de forma. Sin embargo, la pretensión del demandante de declarar ineficaz la revocación de su nombramiento está justificada. El nombramiento de un miembro del consejo de dirección solamente se puede revocar ante la existencia de causa justa. Constituiría una causa justa el hecho de que la continuidad en el cargo de miembro del consejo de dirección hasta el final de su mandato fuera inaceptable para la sociedad, sin embargo esto no se cumple en este caso. La sola circunstancia de que el cese sea ventajoso para el banco no se puede considerar suficiente. Además, para la ejecución del proyecto de reducción de personal del banco no era necesario ningún cese a finales de 2013. La estrategia del proyecto era la reducción de personal hasta finales de 2016. Puesto que el cargo del demandante solamente tenía vigencia hasta mayo de 2017, el hecho de esperar al final de la vigencia del cargo hasta mayo de 2017 solamente hubiera supuesto un pequeño retraso respecto en el calendario del proyecto. Además, no se puede considerar que el banco demandado hubiera de tener una mejor posición frente a sus empleados o frente la opinión pública cesando ya al miembro del consejo de dirección, pero con la obligación de seguir pagando su remuneración durante los dos años restantes, que esperando al fin regular de la vigencia de su cargo, recibiendo el trabajo del miembro del consejo de dirección como contraprestación a la remuneración que de todos modos tenía que pagar.



* Rechtsanwältin
CMS Hasche Sigle, Hamburg
Katharina.haneke@cms-hs.com



* Abogada
CMS Hasche Sigle, Düsseldorf
Nereida.sanchez@cms-hs.com

Spanische Erbschaftssteuer, wenn Erbe in Spanien und Erblasser in Deutschland residierten und sich der Nachlass in Deutschland befindet

Alexander vom Hofe*

Unter dem Aktenzeichen V0614/2015 hat das spanische Finanzamt verbindlich klargestellt, dass die Annahme einer Erbschaft, die eine in Spanien

residierende Person vornimmt und die sich auf eine Erbschaft oder Vermächtnis bezieht, die sich in

Deutschland befinden, in Spanien der Erbschaftssteuer unterliegt.

Sachverhalt:

Der Ratsuchende, resident in Spanien, beabsichtigt die Erbschaft eines Familienangehörigen anzunehmen, der in Deutschland residierte. Der gesamte Nachlass befand sich in Deutschland. Die Erbschaftsannahme wird von der Beantwortung der Frage abhängig gemacht, welche Steuern in Spanien und Deutschland anfallen werden.

Frage:

Welche Beträge werden in Spanien als spanische Erbschaftssteuer anfallen und ob von diesen die in Deutschland entrichteten Beträge (deutsche Erbschaftssteuer) in Abzug gebracht werden können.

Antwort:

Eine Kalkulation der Steuer kann im Rahmen der Anfrage nicht erfolgen.

Hingegen können Zweifelsfragen geklärt werden. Die zu beachtenden Regeln sind folgende: Rechtsgrundlagen sind das Gesetz 29/1987, vom 18 Dezember, über Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht (Ley sobre Sucesiones y Donaciones) und die dazugehörige Verordnung (Reglamento). Eine Abtretung der Gesetzgebungskompetenz an die Autonomien ist in diesem Fall NICHT vorgesehen. Da der Erblasser nicht auf spanischem Gebiet ansässig war, fehlt es an einem Verknüpfungspunkt (punto de conexión). Deshalb hat der Erbe seine Steuererklärung nicht bei der Autonomie abzugeben, sondern bei der Administración Central del Estado (Staat), Oficina Nacional de Gestión Tributaria, departamento de no residentes, 49, Madrid).

Die Berechnung der Bemessungsgrundlage (Nettonachlasswert) erfolgt gemäss Artikel 9 und 15 des staatlichen ErbSch- und SchenkStG (LISD).

Das Entscheidende ist aber nunmehr, nicht dass gemäss Artikel 23 des LISD die in Deutschland gezahlte Erbschaftssteuer in Abzug gebracht werden kann. Das war schon in der Vergangenheit so, sondern dass die in Spanien residierenden Erben, die Bonifikationen geltend machen können, die in der Regulierung der Autonomie vorgesehen sind, in der der Erbe residiert. Der Erbe kann auch die Autonomie auswählen in der sich der meiste Nachlass befindet.

Dies ist von enormer Bedeutung. Beispiel: Solange die Gesetzgebung Madrids in Sachen Erbschaftssteuer nicht geändert wird, die durch Bonifikationen die Erbschaftssteuer de facto abgeschafft hat, lohnt es sich, einen Sitz in Madrid aufzunehmen, wenn Erbschaft aus Deutschland zu erwarten ist. Es gibt auch andere Autonomien die interessant sind.

Die Kanaren zählen nicht dazu.

Diese Regulierung ist Folge des Urteils des EuGH vom 3 September 2014 (Aktenzeichen: EuGH - C-127/12). Das Gericht rügte, dass es diskriminierend ist, wenn residente und nichtresidente Erben in unterschiedlichem Umfang erbschaftssteuerrechtlich belastet werden.

Das Königreich Spanien hat das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz (LISD) zum zweiten Mal an dieses Urteil angepasst.

Unter dem Titel "zweite Anpassung ... an das Urteil des EugH Az.: C-127/12..." (Segunda adecuación de la normativa del Impuesto" lautet Abschnitt Eins.1 Buchstabe a) der zweiten Anpassungsregelung des ErbSchst- und SchenkungsstuerG, spanisch apartado Uno.1 de la disposición adicional segunda de la LISD, gültig ab 1 Januar 2015 wie folgt:

1. Erwirbt jemand aufgrund Erbschaft oder Vermächtnis oder auf andere Weise von Todes wegen Vermögen oder Rechte von einem Erblasser der in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässig war, so hat er das Recht auf Anwendung der autonomen Gesetzgebung in dessen Geltungsbereich sich der meiste Nachlass befindet. Befindet sich keinerlei Nachlassgegenstand oder Recht in Spanien, findet auf den Steuerpflichtigen die autonome Gesetzgebung Anwendung in der der Steuerpflichtige residiert.

Zur Vervollständigung seien auch nachfolgende Varianten wiedergegeben:

2. Erwirbt jemand aufgrund Erbschaft oder Vermächtnis oder auf andere Weise von Todes wegen Vermögen oder Rechte von einem Erblasser der in einer Autonomie (Comunidad Autónoma) residierte, und ist der Steuerpflichtige nichtresident, und zugleich resident in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes, so hat er das Recht auf Anwendung jener autonomen Gesetzgebung.
3. Erwirbt ein Nichtresidenter der in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen

Wirtschaftsraumes ansässig ist in Spanien belegene Immobilien durch Schenkung oder aufgrund einer unentgeltlichen Verfügung unter Lebenden, so hat er das Recht auf Anwendung der autonomen Gesetzgebung in der sich die Immobilie befindet.

4. Erwirbt ein in Spanien Residenter Immobilien die sich in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes befinden, durch Schenkung oder aufgrund einer unentgeltlichen Verfügung unter Lebenden, so hat der in Spanien ansässige Steuerpflichtige das Recht auf Anwendung der autonomen Gesetzgebung in der er ansässig ist.

5. Erwirbt ein Nichtresidenter in Spanien befindliches bewegliche Vermögen (bienes muebles), durch Schenkung oder aufgrund einer unentgeltlichen Verfügung unter Lebenden, so haben die nichtresidenten Steuerpflichtigen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässig sind, das Recht auf Anwendung der autonomen Gesetzgebung in der sich die genannten beweglichen Gegenstände die meisten Tage innerhalb der letzten unmittelbaren fünf Jahre, gezählt von Datum zu Datum, befunden haben.

Natürliche Personen die auf spanischem Gebiet residieren, gelten als in der Autonomie resident, in dessen Gebiet sie sich innerhalb der letzten fünf Jahre die meisten Tage aufgehalten haben.

Die Freude über eine mögliche Inanspruchnahme erheblicher Bonifikationen kann bald verfliegen, etwa dann, wenn der spanische Staat die gesamte erbschaftssteuerrechtliche Regelungskompetenz wieder an sich zieht und Bonifikationen generell streicht. Das sind politische Unwägbarkeiten die in diesem Wahljahr brisant werden könnten, weil diverse Parteien die Abschaffung der Bonifikationen wahlkampftaktisch einsetzen.



* Rechtsanwalt & Abogado,
Madrid
vomhofe@tconsultalia.com

Freno a la subida de los precios de los alquileres en Alemania

Nereida Sánchez Pérez, LL.M.* y Philipp Schönenbeck**

Los precios de los alquileres en algunas zonas de Alemania están experimentando fuertes subidas durante los últimos años. Una gran parte de la población alemana, acostumbrada a vivir de alquiler, está cada vez más descontenta. Por poner algunos ejemplos, la diferencia entre el precio de alquiler para contratos existentes y el precio de alquiler para contratos nuevos en la ciudad de Munster es del 30 %, en Hamburgo y en Múnich del 30 % y en Berlín del 19 %. Las zonas metropolitanas, las ciudades de tamaño medio con atractivo y las ciudades universitarias son las que más sufren estas subidas de precios.¹

Ante esta situación, se ha promulgado la Ley de Reforma del Derecho de Arrendamientos (Mietrechtsnovellierungsgesetz – MietNovG²) con la finalidad, entre otras cosas, de detener la escalada de los precios de los alquileres. La MietNovG prevé

medidas para impedir que los alquileres de segunda mano en zonas con gran demanda de viviendas de alquiler (Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt) suban más del 10% respecto al alquiler local de referencia (ortsübliche Ver-gleichsmiete). Se admiten excepciones para contratos sobre viviendas nuevas y sobre viviendas modernizadas. La MietNovG ha entrado en vigor el 1 de junio de 2015.

I. Zonas con gran demanda de viviendas de alquiler (Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt)

Un punto crítico para la aplicación de las nuevas medidas es determinar cuáles son las zonas con gran demanda de viviendas de alquiler. La propia MietNovG no define cuáles son estas zonas, sino que encomienda a los Estados Federados que las identifiquen y determinen. Solamente cuando los Estados Federados hayan aprobado los correspondientes reglamentos para identificar y determinar cuáles son estas zonas, podrán aplicarse realmente las medidas previstas en la MietNovG.

¹ Fuente:
<http://www.bmjj.de/DE/Themen/BauenundWohnen/Mietpreisbremsen/node.html>

² Gesetz vom 21.04.2015 - Bundesgesetzblatt Teil I 2015 Nr. 16
27.04.2015 S. 610

Según los medios de comunicación³ alemanes, de momento solamente se podrán aplicar las medidas a partir del 1 de junio de 2015 en Berlín, al tratarse del único Estado Federado en aprobar el correspondiente reglamento para identificar y determinar cuáles son las zonas con gran demanda de viviendas de alquiler. Algunos Estados Federados ni siquiera tienen previsto aprobar los reglamentos correspondientes para determinar las zonas con gran demanda de viviendas de alquiler, por lo que las medidas de freno de los precios del alquiler quedarán sin aplicación. Se trata de: Sajonia-Anhalt, Sarre, Turingia, Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania. Según estos medios de comunicación, el resto de Estados Federados no ha mencionado ninguna fecha concreta para la aplicación de las medidas.

II. ¿Cuál es el alquiler local de referencia (ortsübliche Vergleichsmiete)?

Otro punto todavía más crítico para la aplicación de las medidas previstas en la MietNovG será la determinación del alquiler local de referencia (ortsübliche Vergleichsmiete), que va a servir de referencia para fijar el precio del alquiler de los nuevos contratos.

Este concepto está definido en el art. 558 apdo. 2 BGB (Código Civil alemán): "El alquiler local de referencia se determina con base a los alquileres habituales que se han pactado en los últimos cuatro años para viviendas de similar categoría, extensión, mobiliario, estado y ubicación en el mismo municipio o en un municipio similar (...)" . Pero se trata de una definición legal imprecisa, mediante la cual no se puede obtener ningún importe determinado para los alquileres de una zona, sino que se puede obtener un valor medio representativo o un marco de referencia sobre los alquileres habituales que se pagan en un municipio, según el BGH⁴.

Para poder determinar cuál es el alquiler local de referencia, se recurre por regla general a las tablas de alquileres (Mietspiegel), definidas en los arts. 558 c y 558 d BGB. Se puede diferenciar entre las tablas simples de alquileres (einfacher Mietspiegel) y las tablas cualificadas de alquileres (qualifizierter Mietspiegel). La principal diferencia entre ambas es que solamente las tablas cualificada de alquileres, al estar elaboradas de acuerdo con criterios científicos reconocidos, gozan por ley de la presunción iuris tantum (es decir, que admite prueba en contra) de

reflejar el alquiler local de referencia. Por el contrario, las tablas simples de alquileres no gozan de esta presunción y no son consideradas como medio de prueba formal en el procedimiento civil⁵. Si los municipios no cuentan con ninguna tabla de alquileres, se podrá recurrir a bases de datos de asociaciones de arrendatarios y de arrendadores, así como estadísticas comparables.⁶

Según fuentes citadas en el diario "Frankfurter Allgemeine"⁷, de los aproximadamente 11.000 ciudades y municipios existentes en Alemania, solamente unos 550 cuentan con una tabla de alquileres municipal. De estas, solamente una quinta parte son tablas cualificadas de alquileres. Puesto que ni las tablas simples de alquileres ni las bases de datos de alquileres o las estadísticas comparables han sido elaboradas mediante métodos científicos reconocidos, carecen de fuerza probatoria formal en el procedimiento civil⁸, por lo que algunas voces críticas esperan un aumento de los informes periciales de valoración. Una sentencia reciente del Juzgado Local de Berlín Charlottenburg⁹ ha ido incluso más allá al decidir que la tabla cualificada de alquileres de Berlín no cumple con los criterios científicos reconocidos debido a fallos en su elaboración. En el caso concreto, ha sido necesario un informe pericial de valoración. Esta sentencia ha creado todavía más inseguridad sobre la aplicación práctica de las medidas de freno de los precios de los alquileres. Algunos hablan ya de la necesidad de una nueva reforma.

III. Excepción: Obras de modernización

Las medidas para frenar los precios de los alquileres no se aplicarán a los primeros contratos de alquiler para viviendas que hayan sido completamente modernizadas. Se considera que una modernización es completa, si ésta ha sido tan amplia que el resultado se puede comparar con una nueva construcción. Esto se presume en muchas ocasiones si la inversión realizada en las obras de modernización es de una tercera parte de lo que costaría construir un edificio nuevo equivalente¹⁰.

⁵ Börstinghaus, Miethöhe-Handbuch, Auflage 2009, Kapitel 8. Der Zustimmungsprozess, Rn 64

⁶ Siehe Fn. 1

⁷ FAZ vom 6. März 2015, "Der Mietspiegel wird zur entscheidenden Größe"

⁸ Siehe Fn. 5

⁹ AG Berlin-Charlottenburg, sentencia del 11.05.2015 - 235 C 133/13

¹⁰ Siehe Fn. 1

³ http://www.focus.de/immobilien/mieten/start-mit-verzoegerung-mietpreisbremse-diese-fuenf-bundeslaender-planen-keine-einfuehrung_id_4646369.html

⁴ BGH VIII ZR 322/04 - NJW 2005, 2621

También se aplica una excepción para las obras de modernización menores, en consonancia con la legislación vigente aplicable a los contratos existentes (art. 559 apdos. 1 a 3 BGB). Por regla general, el arrendador puede incrementar el alquiler anual de la vivienda en un 11% de los costes de las obras de modernización, siempre y cuando las obras supongan un incremento permanente del valor del uso del inmueble, se mejoren las condiciones generales de habitabilidad o, en el caso de las medidas de saneamiento energético, se produzca un ahorro duradero de energía o de agua. Esta posibilidad de incrementar el precio del alquiler tras realizar obras de modernización es considerada en la actualidad un requisito económico necesario para la ejecución del plan de obras de saneamiento energético en el parque inmobiliario previstas para los próximos años. Hasta el año 2050 se prevé alcanzar un parque inmobiliario con una balanza climática casi neutral. Actualmente, los edificios consumen casi el 40 por ciento del total de energía final en Alemania. Para la consecución de este objetivo, está previsto que en los próximos 20 años se va a proceder a la rehabilitación de más o menos la mitad de los aprox. 19 millones de edificios de viviendas existentes, que cuentan con aprox. 40 millones de viviendas¹¹. Por este motivo, se considera de gran importancia para la consecución de los objetivos de política energética que la MietNovG no disminuya ni elimine este aliciente ya existente para los arrendadores, de cara a la realización de obras de saneamiento energético.¹²

IV. Otras excepciones

No serán de aplicación las medidas para frenar los precios de los alquileres cuando se trate del primer contrato para una vivienda nueva. Tampoco se aplicarán para aquellas viviendas que ya se encuentren arrendadas y cuyo precio, en el momento de la celebración de un nuevo contrato, supere el 10 % del alquiler local de referencia; es decir, los arrendadores no se verán obligados a arrendar las viviendas por un precio inferior al que tenían pactado con un arrendatario anterior¹³.

¹¹ Broschüre des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie "Sanierungsbedarf im Gebäudebestand", Dezember 2014 <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/sanierungsbedarf-im-gebaudebestand.property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>

¹² S. 27 der Broschüre des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie "Mehr aus Energie machen", Dezember 2014 <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/nationaler-aktionsplan-energieeffizienz-nape.property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>

¹³ Siehe Fn. 1

V. Consecuencias del incumplimiento de las medidas previstas por la MietNovG

La consecuencia de pactar un precio del alquiler superior a lo previsto en la MietNovG será que el inquilino solamente estará obligado a pagar el 110 % del alquiler local de referencia, pudiendo negarse a pagar cualquier importe que supere esta cifra, aunque haya sido pactado en el contrato. El contrato de arrendamiento celebrado entre las partes no perderá su eficacia. En todo caso, es el propio inquilino el que tiene que ejercitar sus derechos. En el caso de que el inquilino tenga dudas sobre el alquiler pactado en el contrato, debería consultarla con una asociación de arrendatarios o con un abogado.

Además de estas consecuencias de carácter civil, también podría haber consecuencias penales para el arrendador: El art. 5 de la Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG)¹⁴ prevé una multa de hasta 50.000 EUR para aquel que con dolo o negligencia grave exija alquileres excesivamente altos para el arrendamiento de viviendas. Además, el art. 291 apdo. 1 n° 1 del Strafgesetzbuch (StGB) regula la llamada "usura arrendaticia", pudiéndose imponer penas de privación de libertad de hasta tres años quien se aproveche de circunstancias especiales para obtener de manera drástica un alquiler excesivamente alto.

VI. Conclusión

Los defensores de estas medidas para frenar los precios del alquiler las consideran necesarias para obtener un equilibrio justo entre los intereses de los arrendatarios y los arrendadores. Quienes inviertan dinero, también tienen derecho a ganar dinero, pero siempre teniendo en cuenta que las viviendas no son mercancías, sino el hogar de las personas¹⁵.

Los críticos de estas medidas consideran que las restricciones al libre mercado tendrán a medio y largo plazo un efecto negativo sobre proyectos de construcción de obra nueva y realización de obras de modernización en las zonas con mayor demanda, lo que acabará por dañar la salud del sector inmobiliario¹⁶.

Habrá que esperar todavía un tiempo para ver las consecuencias de las medidas de freno de los precios de alquiler y su efecto sobre el mercado inmobiliario. Por un lado, las dificultades de aplicación práctica de

¹⁴ Vom 09.07.1954, (BGBl. I 175), zuletzt geändert durch § 20 Abs. 2 Gesetz vom 9. 4. 2008 (BGBl. I S. 714)

¹⁵ Siehe Fn. 1

¹⁶ Broschüre "Welche Auswirkungen hat eine Mietpreisbremse?", www.gdw.de

las medidas debido a los problemas con las tablas de alquileres (Mietspiegel) están creando la necesidad de una próxima reforma. Por otro lado, si tenemos en cuenta que muchos Estados Federados no tienen prisa o ni siquiera tienen la intención de aprobar los reglamentos que determinen cuáles son las zonas con gran demanda de viviendas de alquiler, sin los cuales no se pueden aplicar las medidas de freno de los precios de alquiler de la MietNovG, puede ocurrir que las medidas queden sin aplicación en gran parte de Alemania. ¿Mucho ruido y pocas nueces?



*Abogada
CMS Hasche Sigle, Düsseldorf
Nereida.Sanchez@cms-hs.com



**Rechtsanwalt
CMS Hasche Sigle, Düsseldorf
Philipp.schoennenbeck@cms-hs.com

Deutsche Gesetzgebung/ Legislación alemana

zusammengestellt von / seleccionada por

Jan Löber*

I. Aktien- und Bankrecht

1. Aktienrechtsnovelle 2014 (status quo)

Die Bundesregierung hat am 07.01.2015 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aktiengesetzes beschlossen, nachdem sich die Aktienrechtsnovelle 2012 in der vergangenen Legislaturperiode durch Ablauf erledigte. Derzeit liegt der Entwurf dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestags vor. Im Fokus stehen die Flexibilisierung der Gesellschaftsfinanzierung und die Stärkung der Transparenz hinsichtlich der Beteiligungsverhältnisse.

a) Neuregelung zur Ausgabe von Vorzugsaktien

Nach jetziger Rechtslage kann aufsichtsrechtlich kein regulatorisches Kernkapital gebildet werden, indem die Gesellschaft stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgibt. Denn der Vorzug ist derzeit mit einer zwingend nachzahlbaren Vorabdividende verbunden, was die Anerkennung als Kernkapital verhindert. Den Gesellschaften soll aktienrechtlich dadurch eine Möglichkeit eröffnet werden, mit der sie Kernkapital auch durch die Ausgabe stimmrechtsloser Vorzugsaktien bilden können, indem sie stimmlose Vorzugsaktien ausgeben können, die jedoch keinen Nachzahlungsanspruch für den Vorzug bei der Gewinnverteilung vorsehen.

b) Wandelanleihen

Darüber hinaus gibt es bei Wandelschuldverschreibungen bisher nur ein Umtauschrechtfertigungsrecht des Gläubigers, nicht aber des

Schuldners. Dieses könnte jedoch ein sinnvolles Instrument sein, um eine Unternehmenskrise zu verhindern oder zu bewältigen, denn es könnte ohne Mitwirkung der Anleihegläubiger die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft verbessert werden.

c) Zeitliche Einschränkung von Nichtigkeitsklagen

Sog. nachgeschobene Nichtigkeitsklagen werden derzeit als rechtsmissbräuchliches Instrument verwendet. Dies ist möglich, da die Nichtigkeitsklage gegen einen Hauptversammlungsbeschluss grundsätzlich unbefristet bzw. innerhalb von drei Jahren ab Eintragung in das Handelsregister erhoben werden kann. Dieses Instrument soll durch Einführung einer relativen Befristung entschärft werden. Eine Nichtigkeitsklage gegen einen bereits mit einer Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage angegriffenen Beschluss nur innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung des ursprünglichen Beschlussmängelverfahrens zulässig.

2. Sepa

Seit dem 1. Februar 2014 wird das europäische Zahlungssystem „SEPA“ (Single Euro Payments Area) angewendet, das das bestehende System aus Kontonummer und BLZ ersetzt.

3. Zur Zahlung von Geldstrafen durch den Aufsichtsrat, BGH 8. Juli 2014 (II ZR 174/13)

Wird ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft mit einer Geldstrafe abgeschlossen, ist der Aufsichtsrat des Unternehmens häufig bereit die Zahlung zu übernehmen, um keine öffentliche Diskussion aufkommen zu lassen.

Dem hat der BGH nunmehr einen Riegel vorgeschoben. Die Zahlung einer Geldstrafe, Geldauflage oder Geldbuße durch den Aufsichtsrat einer AG steht nur dann in dessen Ermessen, wenn der Mitarbeiter mit der ihm vorgeworfenen Tat nicht zugleich pflichtwidrig gegenüber der Gesellschaft gehandelt hat. Dies wird in der Regel der Fall sein. In einem solchen Fall muss bei einer Aktiengesellschaft die Hauptversammlung gemäß § 93 Abs. 4 S. 3 AktG der Übernahme der Geldstrafe, bzw. Geldbuße zustimmen.

4. Kleinanlegerschutzgesetz

Der Deutsche Bundestag hat am 23.04.2015 das Kleinanlegerschutzgesetz in zweiter Lesung beraten und in der Ausschussfassung angenommen (Bericht über die Debatte, hinterlegt auf den Seiten des Bundestags).

Mit dem Gesetzentwurf soll das Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Verbesserung des Schutzes von Kleinanlegern umgesetzt und dadurch das Risiko von Vermögensverlusten vermindert werden. Insbesondere soll die Transparenz von Vermögensanlagen weiter erhöht werden, um einem Anleger vollständige und zum Anlagezeitpunkt aktuelle Informationen über die Vermögensanlage zu verschaffen. Damit soll der Anleger die Seriosität und die Erfolgsaussichten einer Anlage besser einschätzen und eine informierte und risikobewusste Entscheidung treffen können. Durch verbesserten Schutz von Anlegern sollen Vermögensschäden verhindert werden und das Vertrauen in die in Deutschland angebotenen Finanzdienstleistungen und Produkte gestärkt werden. Der Gesetzesentwurf enthält im Wesentlichen Vorgaben zur

- Konkretisierung und Erweiterung der Prospektpflicht,
- Ergänzende Angaben zu personellen Verflechtungen der Initiatoren,
- Pflicht, auch nach Beendigung des öffentlichen Angebots für Vermögensanlagen bestimmte Informationen mitzuteilen,
- Einführung einer Mindestlaufzeit der Vermögensanlage,
- Einführung eines Product-Governance-Prozesses,

- Verschärfung der Rechnungslegungspflichten.

II. Arbeitsrecht

1. Frauenquote

Der Deutsche Bundestag nimmt den Gesetzentwurf des „Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ am 60.03.2015 an. Am 30.03.2015 wurde es im Bundesgesetzblatt verkündet. Es trat am 01.05.2015 im öffentlichen Dienst in Kraft. Seine Regelungen unterscheiden sich je nach Privatwirtschaft oder öffentlicher Dienst:

a) Regelungen für die Privatwirtschaft

Für Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen, die der paritätischen Mitbestimmung unterliegen, gibt es künftig eine Geschlechterquote von 3%. D.h., dass die Quotenregelung bei AG oder KGaA mit in der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmern sowie bei Europäischen Aktiengesellschaften (SE) greift, bei denen sich das Aufsichts- oder Verwaltungsgremium aus derselben Zahl von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern zusammensetzt. Diese Unternehmen müssen die Quote ab dem 01.01.2016 sukzessive für die dann neu zu besetzenden Aufsichtsratsposten beachten. Bei Nichterfüllung ist diequotenwidrige Wahl nichtig. Die für das unterrepräsentierte Geschlecht vorgesehenen Plätze bleiben rechtlich unbesetzt ("leerer Stuhl").

Darüber hinaus werden Unternehmen, die entweder börsennotiert oder mitbestimmt sind, verpflichtet, Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, Vorständen und obersten Management-Ebenen festzulegen.

b) Regelungen für den öffentlichen Dienst

Bei der Besetzung von Aufsichtsgremien, in denen dem Bund mindestens drei Sitze zustehen, gilt ab 2016 eine Geschlechterquote von mindestens 30% für alle Neubesetzungen dieser Sitze. Ab dem Jahr 2018 ist es Ziel, diesen Anteil auf 50% zu erhöhen.

Die Bundesverwaltung wird verpflichtet, sich für jede Führungsebene konkrete Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauen- beziehungsweise Männeranteils zu setzen.

2. Mindestlohn

Am 16.08.2014 ist das Mindestlohngesetz in Kraft getreten. Danach ist seit dem 01.01.2015 für Arbeitnehmer ab 18 Jahren grundsätzlich ein Bruttomindestlohn von 8,50 € zu zahlen. Ausdrücklich aufgenommen in den persönlichen Regelungsbereich des Gesetzes sind folgende Branchen:

- Bauhaupt- und Baunebengewerbe
- Gebäudereinigung
- Briefdienstleistungen
- Sicherheitsdienstleistungen
- Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken
- Wäschereidienstleistungen im Objekt-kundengeschäft
- Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst
- Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch
- Schlachten und Fleischverarbeitung
- Pflegebranche (Altenpflege und ambulante Krankenpflege).

Von dieser Regelung ausgenommen werden nur Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG). Möglich sind jedoch zunächst für eine Übergangszeit noch abweichende Regelungen durch Tarifverträge, dies jedoch nur unter engen Voraussetzungen. So sind Abweichungen zulässig für maximal zwei Jahre bis zum 31.12.2016 durch Tarifverträge repräsentativer Tarifpartner auf Branchenebene.

a) Ausnahmen

Ausnahmen vom Mindestlohn gelten für Langzeitarbeitslose und für Praktikanten. Bei Langzeitarbeitslosen gilt innerhalb der ersten sechs Monate in einer neuen Beschäftigung der Mindestlohn nicht. Für Praktikanten gilt er nicht, wenn es sich bei dem Praktikum um ein

- durch eine schulrechtliche Bestimmung, eine Ausbildungsordnung oder eine hochschulrechtliche Bestimmung vorgeschriebenes Pflichtpraktikum oder ein Praktikum im Rahmen der Ausbildung an einer Berufsakademie, oder um ein
- Praktikum im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung nach dem SGB III oder eine Maßnahmen einer der Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz handelt.

b) Kontrolle

Die Einhaltung des Mindestlohns wird durch den Zoll kontrolliert. Die Behörden dürfen hierfür Arbeitsverträge und Geschäftsunterlagen einsehen. In neun Branchen, die als besonders anfällig für Schwarzarbeit gelten, sind Beginn, Dauer und Ende der Arbeitszeit aufzuzeichnen und zwei Jahre zu archivieren.

3. Elternzeit und Elterngeld

Am 18.12.2014 wurde das Gesetz zur Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz im Bundesgesetzbuch veröffentlicht. Es ist am 01.01.2015 in Kraft getreten. Die Regelungen gelten für Geburten ab dem 01.07.2015.

Ab diesem Zeitpunkt kann die Elternzeit je Elternteil auf drei Zeitschnitte aufgeteilt werden. Es können zwischen dem dritten und dem achten Geburtstag des Kindes 24 Monate Elternzeit gewährt werden. Die Zustimmung des Arbeitgebers ist hierfür nicht mehr erforderlich. Für Elternzeit, die vor dem dritten Geburtstag genommen wird, gilt weiterhin die Sieben-Wochen-Frist. Bei Elternzeit, die zwischen dem dritten und dem achten Lebensjahr genommen wird, verlängert sich die Frist auf 13 Wochen. Darüber hinaus kann die Elternzeit auf 24 statt auf bislang 12 Monate ausgedehnt werden.

Zudem treten Änderungen hinsichtlich des Elterngeldes durch Einführung des ElterngeldPlus in Kraft. Bislang erhalten Eltern mit dem Elterngeld nach der Geburt des Kindes 65 bis 100% des zuvor verfügbaren monatlichen Erwerbseinkommens. Es beträgt mindestens 300 € und höchstens 1800 €. Das ElterngeldPlus soll Eltern, die in Teilzeit arbeiten, unterstützen. Eltern erhalten ElterngeldPlus in maximal halber Höhe des bisherigen Elterngeldes, aber doppelt so lange. Teilen sich Vater und Mutter die Betreuung ihres Kindes und arbeiten je parallel für vier Monate zwischen 25 und 30 Wochenstunden, erhalten sie jeweils für vier weitere Monate ElterngeldPlus. Alleinerziehende bekommen ebenfalls vier weitere ElterngeldPlus-Monate, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen.

4. Leiharbeit (Ausblick)

Die Überlassung von Leiharbeitnehmern soll auf 18 Monate begrenzt werden. Bereits nach 9 Monaten soll die Bezahlung von Leiharbeitnehmern der Belegschaft angeglichen werden. Hiervon abweichende Lösungen sollen nur durch oder aufgrund eines Tarifvertrags oder durch Betriebs-

bzw. Dienstvereinbarung vereinbart werden können. Um Unternehmen die Möglichkeit zu nehmen, anstelle von Leiharbeitern mehr Mitarbeiter im Rahmen von Werkverträgen zu beschäftigen, sollen auch diese schärfer kontrolliert werden.

III. Berufsrecht

1. Syndikusanwälte und die Deutsche Rentenversicherung

a) Das Urteil des BSG vom 03.04.2011

Am 03.04.2014 entschied das Bundessozialgericht (BSG) in drei Revisionsverfahren über die Frage, ob abhängig beschäftigte Rechtsanwälte (sog "Syndikusanwälte") von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien sind.

Die Deutsche Rentenversicherung hatte entgegen der bisherigen Praxis die Befreiung in allen drei Verfahren mit der Begründung abgelehnt, dass die Kläger in ihren jeweiligen Beschäftigungen keine anwaltliche Tätigkeit ausübt, da sie als Unternehmensjuristen tätig sind.

Der 5. Senat des BSG hat in allen Verfahren ein Befreiungsrecht verneint. Die Kläger sind jeweils abhängig beschäftigt und damit in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert (§ 1 Abs 1 S 1 Nr 1 Halbs 1 SGB VI). Gleichzeitig sind sie aufgrund der die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit bindenden Verwaltungsakte über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft sowohl in der jeweiligen Rechtsanwaltskammer (§ 12 Abs 3, § 60 Abs 1 S 2 BRAO) als auch im jeweiligen berufsständischen Versorgungswerk Pflichtmitglieder. Nach Ansicht des BSG sind jedoch nicht "wegen der" Beschäftigung Pflichtmitglieder der Rechtsanwaltskammer und des Versorgungswerks. Denn die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung und im berufsständischen Versorgungswerk muss wegen ein und derselben Beschäftigung bestehen; gerade die jeweils in Rede stehende Beschäftigung muss Versicherungspflicht in beiden Sicherungssystemen auslösen. Die Kläger sind jedoch nicht als Rechtsanwälte bei ihren jeweiligen Arbeitgebern beschäftigt.

b) Reaktion des Bundesministeriums der Justiz

Das BMJ hat als Antwort auf das vielfach kritisierte Urteil im Januar 2015 ein 13-Punkte-Papier herausgegeben. Das Bundesjustizministerium favorisiert eine berufsrechtliche Lösung und möchte die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) entsprechend ändern. Darin soll erstmals seit deren

Schaffung im Jahr 1959 das Recht der angestellten Rechtsanwälte umfassend normiert werden. Es soll klargestellt werden, dass der Anwaltsberuf auch im Angestelltenverhältnis sowohl bei einem anwaltlichen wie nichtanwaltlichen Arbeitgeber ausgeübt werden kann.

IV. Gesellschaftsrecht

Hauptversammlung im Ausland bei deutscher Aktiengesellschaft

Grundsätzlich soll die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft am Sitz der Gesellschaft stattfinden, § 121 Abs. 5 AktG. Ob ein Hauptversammlungsort im Ausland zulässig ist, war bislang umstritten. Einige Obergerichte lehnten dies ab, da bei beurkundungsbedürftigen Beschlüssen im Ausland kein deutscher Notar für die Beurkundung zugegen sei.

Der Bundesgerichtshof entschied mit Urteil vom 21.10.2014 (Az. II ZR 330/13), dass die Abhaltung der Hauptversammlung auch im Ausland ermöglichen sei. Beurkundungsbedürftige Beschlüsse könnten durch ausländische Notare beurkundet werden, wenn dies der deutschen Beurkundung gleichwertig ist. Erforderlich ist jedoch, dass die Satzung die Auswahl des Hauptversammlungsortes nach sachgerechten Kriterien ausrichtet.

Spanien hingegen benötigt in der Frage der Einberufung der HV im Ausland keine Entscheidung des Tribunal Supremo, weil nach dem LSC die Einberufung im Ausland zulässig ist.

Insolvenzrecht

Insolvenzrechtsreform Stufe III (Ausblick)

Die dreistufige Insolvenzrechtsreform war bereits Gegenstand des juristischen Überblicks der vergangenen Jahre. Im Jahr 2014 wurde die dritte und letzte Stufe in Form eines Gesetzesentwurfs auf den Weg gebracht. Am 08.05.2014 hat der Deutsche Bundestag den Gesetzentwurf in den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen.

Das geltende Insolvenzrecht ist auf die Bewältigung der Insolvenz einzelner Rechtsträger zugeschnitten. Für jeden insolventen Rechtsträger ist hiernach ein Insolvenzverfahren zu eröffnen, in dessen Rahmen ein Insolvenzverwalter das Vermögen zugunsten der Gläubiger dieses Rechtsträgers verwertet. Geraten in einem Konzern mehrere Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten, muss folglich für jeden Unternehmensträger ein Insolvenzverfahren

eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt werden. Dies kann insbesondere in den Fällen zu Nachteilen führen, in denen die zu dem Konzern zusammengeschlossenen Unternehmen eine wirtschaftliche Einheit bilden, weil betriebs- und finanzwirtschaftliche Funktionen der insgesamt verfolgten unternehmerischen Tätigkeit auf unterschiedliche Unternehmensträger verteilt sind. Durch die Dezentralisierung der – ehemals durch die Ausübung der Konzernleitungsmacht aufeinander abgestimmten – Verwaltungs- und Verfügungsbeauftragtes über die konzernweit verfügbaren Ressourcen, d. h. durch deren Verteilung auf mehrere Insolvenzverwalter, wird es schwieriger, die wirtschaftliche Einheit des Konzerns als solche zu erhalten und ihren vollen Wert für die Gläubiger zu realisieren.

Ineffizienzen drohen in Gestalt suboptimaler Verwertungsergebnisse insbesondere dann, wenn die Insolvenzverwalter unterschiedliche und nicht aufeinander abgestimmte Verwertungsstrategien verfolgen oder wenn sie wegen konzerninterner Transaktionen – aus Sicht der Summe der Einzelmassen – unproduktive und kostenträchtige Rechtsstreitigkeiten führen.

Ziel des Entwurfs ist es, die im Fall einer Konzerninsolvenz zu eröffnenden Einzelverfahren über die Vermögen konzernangehöriger Unternehmen besser aufeinander abzustimmen. Der Entwurf verfolgt dabei zwei aufeinander aufbauende Ansätze:

Zum einen knüpft er an die Praxis unter dem geltenden Recht an und schafft die bislang noch nicht oder nur unzureichend vorhandenen Rechtsgrundlagen, die für eine koordinierte Insolvenzabwicklung im Konzernkontext benötigt werden. Hierzu gehören Gerichtsstandregelungen, die es ermöglichen sollen, dass sämtliche Verfahren an einem Insolvenzgericht anhängig gemacht werden können. Für den Fall, dass Verfahren an mehreren Gerichten geführt werden, wird die Möglichkeit einer Verweisung an ein einziges Gericht geschaffen. Diese Zuständigkeitskonzentration wird durch eine einheitliche Richterzuständigkeit ergänzt. Für die Fälle, in denen Verfahren an mehreren Gerichten geführt werden oder in denen mehrere Verwalter bestellt worden sind, schafft der Entwurf Rechtsgrundlagen für die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltern und den Gerichten. Der Entwurf erkennt dabei die schon nach geltendem Recht bestehenden Kooperationspflichten der Verwalter an und schafft Grundlagen für die zwischengerichtliche Zusammenarbeit. Insbesondere sollen die Gerichte verpflichtet werden, sich in der Frage abzustimmen,

ob zur Minimierung von Reibungsverlusten im Zuge von Abstimmungserfordernissen eine Person in mehreren oder allen Verfahren zum Verwalter bestellt werden kann.

Zum anderen geht der Entwurf mit der Schaffung eines Koordinationsverfahrens neue Wege. Das Koordinationsverfahren soll die Abstimmung der Einzelverfahren verbessern, ohne die Selbständigkeit der Einzelverfahren in Frage zu stellen. In seinem Rahmen soll aus dem Kreis der Verwalter eine Person als Koordinationsverwalter mit der Koordination der Einzelverfahren betraut werden. Seine Aufgabe besteht darin, Vorschläge für die abgestimmte Insolvenzverwaltung auszuarbeiten. Eine besondere Stellung nimmt dabei der vom Koordinationsverwalter vorzulegende und vom Koordinierungsgericht zu bestätigende Koordinationsplan ein, der als Referenzplan für die auf der Ebene der Einzelverfahren, insbesondere auf der Grundlage von Insolvenzplänen, zu ergreifenden Maßnahmen dient.

VI. Mietrecht

Mietrechtsnovellierungsgesetz

Das Mietrechtsnovellierungsgesetz wurde in der Ausschussfassung am 05.03.2015 vom Deutschen Bundestag angenommen (BT-Plenarprotokoll 18/91 vom 05.03.2015, S. 8594B - 8615A). Der Bundesrat hat am 27.03.2015 den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen (BR-Drs. 79/15 Beschluss). Am 27.04.2015 wird das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. 2015, Teil I Nr. 16, S. 610).

Das Gesetz begegnet zwei Problemen auf dem derzeitigen Mietwohnungsmarkt: Zum einen steigen vor allem in prosperierenden Städten die Mieten bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen derzeit weit überdurchschnittlich an. Zum anderen können gerade auch auf diesen angespannten Wohnungsmärkten Vermieter die Kosten der von ihnen eingeschalteten Makler auf die Wohnungssuchenden abwälzen. Wer sich weigert, die Zahlung der Maklercourtage zu übernehmen, scheidet faktisch aus dem Bewerberkreis aus.

Diesen Problemen soll wie folgt begegnet werden:

- Um den Preisanstieg bei den Wohnungsmieten zu bremsen, wurden die §§ 556d ff. in das BGB eingefügt. Bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen darf die zulässige Miete höchstens auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete zuzüglich 10 Prozent steigen. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch

Rechtsverordnung für höchstens jeweils fünf Jahre die Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten auszuweisen, in denen diese Mietpreisbegrenzung gilt. Neu errichtete und umfassend modernisierte Wohnungen sind bei Erstvermietung von der Mietpreisbegrenzung ausgenommen. Neu errichtete und umfassend modernisierte Wohnungen sind bei Erstvermietung von der Mietpreisbegrenzung ausgenommen. Modernisierungen vor Wiedervermietung erlauben eine erhöhte Wiedervermietungsmiete nach den Regeln einer Modernisierung im bestehenden Mietverhältnis. Die Vertragsparteien werden also so gestellt, als wäre die Modernisierungsmaßnahme im bestehenden Mietverhältnis durchgeführt und die Miete auf dieser Grundlage angepasst worden.

- Um die Last der Maklercourtage auf den Auftraggeber umzuwälzen, werden § 2 Abs. 1a und 5 sowie in § 8 WoVermRG geändert. Die Maklercourtage wird nunmehr allein vom Auftraggeber getragen und nicht dem künftigen Mieter aufgebürdet. Entgeltpflichtige Maklerverträge zwischen einem Wohnungssuchenden und dem Wohnungsvermittler (Makler) kommen nur noch dann zustande, wenn der Wohnungssuchende in Textform (z. B. E-Mail) einen Suchauftrag erteilt und der Makler ausschließlich wegen dieses Suchauftrages diejenige Wohnung beschafft, über die der Mietvertrag schließlich zustande kommt. Hat der Vermieter dem Makler eine Wohnung zur Suche eines für ihn geeigneten Mieters an die Hand gegeben, ist der Mieter keinesfalls zur Zahlung der Courtage verpflichtet. Vereinbarungen, um die Zahlungspflicht für die Maklervergütung auf den Mieter abzuwälzen, sind unwirksam.

VII. Öffentliches Recht

1. Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags (Ausblick)

Der Deutsche Bundestag hat am 23.04.2015 den Gesetzentwurf in erster Lesung beraten und ihn in die Ausschüsse überwiesen (BT-Plenarprotokoll 18/100, S. 9560C - 9568B).

Ziel des Gesetzes ist es, die verfassungsrechtlich gebotene Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags für die Jahre 2015 und 2016 entsprechend den Vorgaben des 10. Existenzminumberichts der Bundesregierung vom 30.01.2015 sicherstellen.

Der steuerliche Grundfreibetrag soll im Jahr 2015 um 118 Euro und im Jahr 2016 um weitere 180 Euro erhöht werden. Der Kinderfreibetrag soll um 144 Euro im Jahr 2015 und um weitere 96 Euro im Jahr

2016 steigen. Gleichzeitig soll das Kindergeld für 2015 und 2016 angehoben werden. Ab dem 01.01.2015 ist eine Erhöhung des Kindergeldes um monatlich 4 Euro je Kind und ab dem 01.01.2016 um weitere 2 Euro je Kind vorgesehen. Der Kinderzuschlag soll ab dem 01.07.2016 um monatlich 20 Euro auf 160 Euro zu erhöhen. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll um 600 Euro von 1308 Euro auf 1908 Euro erhöht werden, ab dem zweiten Kind um jeweils 240 Euro pro weiteres Kind.

2. Neugestaltung des Melderechts

Am 01.05.2015 trat ein neues Meldegesetz in Kraft. Wichtigste Neuerung ist, dass für ein- und ausziehende Mieter die Meldebescheinigung wieder eingeführt wird. Diese hat der Vermieter bei Einzug zu überprüfen, § 19 MeldFortG. D.h. meldet sich bspw. ein Mieter ab oder um, benötigt er die Bestätigung des jeweiligen Vermieters bzw. muss diese Bestätigung vorlegen. Ziel des Gesetzes ist Scheinanmeldungen zu verhindern. In solchen Fällen droht ein Bußgeld bis zu 50.000 € § 54 MeldFortG.

Die Meldebestätigung muss folgende Angaben enthalten:

- vollständiger Name und Anschrift des Vermieters,
- vollständiger Name der meldepflichtigen Personen,
- Einzugsdatum
- Auszugsdatum und
- vollständige Anschrift der Wohnung.

3. PKW-Maut

Im Mai 2015 hat neben dem Deutschen Bundestag auch der Bundesrat das Gesetz zur PKW-Maut verabschiedet. Diese soll ab dem 1.1.2016 als Infrastrukturbgabe erhoben werden. Diese soll von allen PKW bis 3,5 t entrichtet werden.

Halter von in Deutschland Kfz-steuerpflichtigen Pkw sind verpflichtet, eine Jahresvignette zu erwerben. Für Halter von nicht in Deutschland Kfz-steuerpflichtigen Pkw wird die Vignette in Form einer 10 Tages-Vignette (10 €), einer 2-Monats-Vignette (20 €) und einer Jahresvignette angeboten. Jahresvignetten können zu jedem Zeitpunkt im Jahr ihre Gültigkeit erlangen und haben dann jeweils 12 Monate Gültigkeit.

Der Preis für die Jahresvignette bestimmt sich für Pkw grundsätzlich entsprechend der Systematik im Kraftfahrzeugsteuergesetz; er wird nach der

Umweltfreundlichkeit der Fahrzeuge sowie nach Hubraum und Zulassungsjahr gestaffelt:

- Fahrzeuge, die ab Juli 2009 zugelassen wurden, zahlen
- - mit Otto- und Wankelmotor eine Infrastrukturabgabe von 2 € je angefangene 100 ccm Hubraum bis zu einer festgelegten Kappungsgrenze von 5000 ccm.
 - mit Dieselmotor eine Infrastrukturgabe von 9,50 € je angefangene 100 ccm Hubraum bis zu einer festgelegten Kappungsgrenze von 1100 ccm.
 -
- Fahrzeuge, die vor Juli 2009 zugelassen wurden, zahlen die für die jeweiligen Schadstoffklassen vorgesehenen Beträge je 100 ccm Hubraum, ebenfalls jeweils bis zu einer festgelegten Kappungsgrenze.
- Der durchschnittliche Preis der Infrastrukturabgabe beträgt 88 €. Die Kompensation für Halter von in Deutschland Kfz-steuerpflichtigen Pkw erfolgt über einen Freibetrag in der Kfz-Steuer, mit der die Ausgaben für die Infrastrukturabgabe vollständig und unbürokratisch kompensiert werden.

4. Tarifeinheitsgesetz

In Anbetracht der in den Jahren 2014 und 2015 erfolgten Streiks (insbesondere Deutsche Bahn und Lufthansa), hat der Deutsche Bundestag am 22.05.2015 das Tarifeinheitsgesetz verabschiedet.

Ziel des Tarifeinheitsgesetzes ist es, die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie zu sichern. Derzeit können für dieselbe Beschäftigtengruppe in einem Unternehmen unterschiedliche Tarifverträge konkurrierender Gewerkschaften gleichzeitig zur Anwendung gelangen (Tarifkollision).

Die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie wird durch Tarifkollisionen beeinträchtigt. Tarifkollisionen bergen die Gefahr, dass die Koalitionen der ihnen durch Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes überantworteten und im allgemeinen Interesse liegenden Aufgabe der Ordnung und Befriedung des Arbeitslebens nicht mehr gerecht werden können.

Kernregelung des Tarifeinheitsgesetzes ist, dass es in einem Betrieb für eine Beschäftigtengruppe nur einen Tarifvertrag geben soll.

VIII. Steuerrecht

1. Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer

Mit Urteil vom 17.12.2014 hat das Bundesverfassungsgericht das aktuell geltende deutsche Erbschaftsteuerrecht als zentralen Punkten für verfassungswidrig erklärt. So sei die im bisherigen Umfang geltende Privilegierung von Betriebsvermögen gesetzeswidrig. Insbesondere die vollständige Verschonung von größeren Betriebsvermögen ist verfassungsrechtlich unverhältnismäßig. Gleichwohl hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass die steuerliche Begünstigung von Erben kleiner und mittlerer Unternehmen, die in personaler Verantwortung geführt werden, zur Erhaltung der Arbeitsplätze auch künftig möglich sein soll. Insbesondere bei größeren Betriebsvermögen stellt sich jedoch die Frage, ob und in welchem Umfang eine Freistellung von der Erbschaftsteuer erforderlich sei.

Bis bisherigen Regelungen gelten jedoch weiter, bis ein verfassungskonformes Gesetz verabschiedet. Die seitens des Bundesverfassungsgerichts gesetzte Frist läuft bis zum 30.06.2016.

2. Strafbefreiende Selbstanzeige gem. § 371 AO

Der Bundesrat hat am 19.12.2014 dem "Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung" zugestimmt, womit die Selbstanzeige verschärft wird. Die Änderungen gestalten sich wie folgt:

- Die Angaben zu allen unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart, mindestens aber zu allen Steuerstraftaten einer Steuerart, müssen innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre erfolgen.
- Die Schwelle für Zuschläge nach § 398a AO wird von bisher 50.000 € pro Steuerart und Veranlagungszeitraum auf 25.000 € reduziert. Gleichzeitig wird der Zuschlagsatzes von 5 auf 10% der hinterzogenen Steuer angehoben. Ab 100.000 € bis 1 Mio. € beträgt der Zuschlag dann 15 % und über eine Mio. EUR hinterzogenen Steuern pro Veranlagungszeitraum und Steuerart 20%.
- Die Sperrwirkung nach § 371 Abs. 2 Nr. 1 a AO wird bei der Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung über den Steuerpflichtigen hinaus auch auf Tatbeteiligte, d. h. also auch auf Anstifter und Gehilfen ausgedehnt, losgelöst ob sie von der Prüfungsanordnung Kenntnis haben oder nicht. Die Sperrwirkung wird allerdings beschränkt

auf den sachlichen und zeitlichen Umfang der angekündigten Prüfung.

- Die Anlaufhemmung wird nach § 170 Abs. 6 AO (neu) für die Steuern auf Kapitalerträge hinausgeschoben auf den Zeitpunkt, in der der Steuerpflichtige diese Erträge erklärt oder diese Erträge der Finanzbehörde bekannt geworden sind, spätestens jedoch nach 10 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, wenn die Erträge aus außereuropäischen Staaten stammen oder im automatisierten Datenaustausch erfolgen.

3. Grunderwerbsteuer

Im Jahr 2015 steigt in Nordrhein-Westfalen und im Saarland die Grunderwerbsteuer auf 6,5%.

4. KFZ-Steuer

Pkws, die ab dem 1. Januar 2014 erstmalig zugelassen sind, müssen in Zukunft für jedes Gramm Kohlenstoffdioxid, das die Freigrenze von 95 Gramm pro Kilometer überschreitet, ein Zusatzbeitrag von zwei Euro zahlen.

IX. Strafrecht/ Strafprozessrecht

1. Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung (Ausblick)

Mit Gesetzesentwurf vom 15.05.2015 hat das Bundesministerium der Justiz die Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.03.2006 über die Vorratsspeicherung von Daten wieder aufgenommen, nachdem dies in den vergangenen Legislaturperioden scheiterte.

Der Gesetzentwurf schlägt eine Regelung vor, die die Einschränkung grundrechtlich geschützter Interessen auf das zur Sicherung der Belange von Strafverfolgung erforderliche Maß begrenzt, gleichzeitig aber den wesentlichen Bedürfnissen der Strafverfolgungsbehörden angemessen Rechnung trage, hieß es in der Gesetzesbegründung des Diskussionsentwurfs. Zugleich soll der Gesetzentwurf der Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie 2006/24/EG vom 15.03.2006 dienen. Im Vordergrund stehe dabei mit dem neuen § 100j StPO-E eine Anordnungsbefugnis für eine anlassbezogene Speicherungspflicht, soweit dies zur Erforschung des Sachverhaltes oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten erforderlich sei. Dadurch soll die Menge der zu speichernden Daten auf das notwendige Maß begrenzt werden, da nur die bei den Telekommunikationsunternehmen ohnehin

bereits vorhandenen Verkehrsdaten laut Gesetzentwurf gesichert („eingefroren“) werden und den Strafverfolgungsbehörden unter Richtervorbehalt für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen sollen.

Zusätzlich solle im Internetzugangsbereich eine eng befristete Speicherung von Verkehrsdaten zu dem Zweck erfolgen, auf Grundlage des neuen § 100k StPO-E Bestandsdatenauskünfte insbesondere zur Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet zu den Strafverfolgungsbehörden bereits bekannten Internetprotokoll-Adressen zu ermöglichen. Eine Herausgabe der bei den Telekommunikationsunternehmen gespeicherten Verkehrsdaten selbst an die Strafverfolgungsbehörden erfolge dabei nicht.

X. Verbraucherschutz

Datenschutz: Gesetzesentwurf zu Verbandsklagerecht

Am 04.02.2015 hat die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf zur Begründung eines Klagerechts für Verbraucherschutzverbände beschlossen, wenn Unternehmen in für Verbraucher sensiblen Bereichen Datenschutzverstöße begehen. Da für Verbraucher Identifizierung und Ahndung von Datenschutzverstößen praktisch sehr schwer sei, soll Verbraucherschutzverbänden ein Unterlassungsanspruch zukommen. Erfasst werden sollen alle Fälle, in denen Unternehmen Daten von Verbrauchern für kommerzielle Zwecke erheben, verarbeiten oder nutzen.

XI. Zivilprozessrecht

Kammer für internationale Handelssachen

Der Gesetzentwurf wurde dem Deutschen Bundestag mit anliegender Stellungnahme der Bundesregierung am 30.04.2014 zugeleitet (BT-Drs. 18/1287).

Ziel des Gesetzes ist u.a. die Einrichtung von Kammern für internationale Handelssachen bei den Landgerichten, vor denen Rechtsstreitigkeiten auch in englischer Sprache geführt werden können. Damit soll ausländischen Parteien und Rechtsanwälten die Möglichkeit eröffnet werden, zusammen mit den deutschen Parteien und Rechtsanwälten die Verfahren vor den Kammern für internationale Handelssachen entweder in ihrer eigenen Sprache oder jedenfalls der ihnen geläufigen „lingua franca“ des Wirtschaftsverkehrs zu führen. Zugleich wird bei Verträgen, die in englischer Sprache abgefasst sind und deren Auslegung Gegenstand eines Rechtsstreits ist, die Kongruenz von Vertrags- und Verfahrenssprache gewahrt. Die Auslegung des

Vertrages wird hierdurch wesentlich erleichtert. Darüber hinaus soll eine zweite Tatsacheninstanz in englischer Sprache bei den Oberlandesgerichten eingerichtet werden.



*Rechtsanwalt
Löber & Steinmetz, Frankfurt am Main
j.loeber@loeber-steinmetz.de

Spanische Gesetzgebung / Legislación española

zusammengestellt von / seleccionada por

Víctor Fabregat Rubiol*

I. Derecho mercantil y societario

A. Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo

Las modificaciones del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, el “TRLSC”), introducidas por la Ley, la cual entró en vigor el pasado día 24 de diciembre de 2014, pueden agruparse principalmente en dos categorías: las que se refieren a la junta general de accionistas y las que tienen que ver con el consejo de administración.

1. Junta general de accionistas

Se pretende, con carácter general, reforzar su papel y abrir cauces para fomentar la participación accionarial.

2. Régimen general

Ampliación de competencias de la junta: a) reserva a su aprobación las operaciones societarias que por su relevancia tienen efectos similares a las modificaciones estructurales (entre ellas la venta de activos cuyo valor supere el 25% del valor total de los activos de la compañía), b) garantiza que los accionistas se pronuncien de forma separada sobre el nombramiento, la reelección o la separación de administradores y las modificaciones estatutarias, y que puedan emitir de forma diferenciada su voto.

Intervención en asuntos de gestión y operaciones esenciales: la junta general podrá impartir

instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión.

Conflictos de interés: a) prohíbe el derecho de voto en los casos más graves de conflicto de interés, aplicando a las SA la norma actualmente prevista para las SRL; b) establece una presunción de infracción del interés social en los casos en que el acuerdo social haya sido adoptado con el voto determinante del socio o de los socios incurso en un conflicto de interés.

Convocatoria y adopción de acuerdos: a) clarifica la información a publicar en relación con las propuestas de acuerdo; b) establece que el criterio de cómputo de la mayoría necesaria para la válida adopción de un acuerdo por la junta general es la mayoría simple.

3. Impugnación de los acuerdos sociales:

- Desaparece la distinción entre acuerdos nulos (contrarios a la ley) y anulables.- Amplía el plazo de impugnación de los 40 días a 1 año. Excepción para los acuerdos contrarios al orden público: se reputan imprescriptibles.- En cuanto a la legitimación, se exige al menos el 1% del capital social para poder ejercer la acción de impugnación (en la actualidad varía según se trate de acuerdos nulos o anulables). En las sociedades cotizadas este porcentaje será del 1 por mil.

4. Sociedades cotizadas

a) Derechos de minoría: se rebaja el umbral necesario para que los accionistas puedan ejercer sus derechos hasta el 3% del capital social, en lugar del 5%.

b) Asistencia a la junta: se establece en 1000 el número máximo de acciones que los estatutos podrán exigir para asistir a la junta general.

c) Derecho de información: extiende el plazo en el que los accionistas pueden ejercitar el derecho de información previo a la junta general hasta cinco días antes de su celebración.

d) Impugnación de acuerdos sociales: el plazo de caducidad de la acción se reduce a tres meses para que la eficacia y agilidad especialmente requeridas en la gestión de estas sociedades no se vean afectadas.

5. Consejo de administracion (CA)

6. Deberes y responsabilidad de los administradores:

a) se precisa en mayor medida la tipificación de los deberes de diligencia y lealtad y de los procedimientos a seguir en caso de conflicto de interés,

b) se establece la obligación de los consejeros de asistir personalmente a las sesiones del consejo, y se prevé que, en caso de representación para la asistencia a un consejo, los consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar en otro consejero no ejecutivo.

c) se amplía el alcance de la responsabilidad, más allá del resarcimiento del daño causado, incluyendo la devolución del enriquecimiento injusto, y se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad al reducir la participación necesaria (del 5 al 3% en cotizadas) y permitiendo su interposición directa (sin esperar a la junta) en caso de infracción del deber de lealtad.

7. Funcionamiento del CA:

a) se atribuye como facultades indelegables aquellas decisiones que se corresponden con el núcleo esencial de la gestión y supervisión, es decir, la aprobación de las inversiones u operaciones que tengan especial riesgo fiscal y la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad;

b) se establece que deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre;

c) se garantiza que todos los consejeros recibirán con antelación suficiente el orden del día de la reunión y la información necesaria para la deliberación y la adopción de acuerdos.

8. Composición y funcionamiento del CA de las sociedades cotizadas:

a) en cuanto al presidente: se contemplan de forma expresa sus funciones, y se establece que cuando tenga la condición de consejero ejecutivo, el CA deberá nombrar un consejero coordinador entre los consejeros independientes que ejerza de contrapeso.

b) en cuanto al secretario del CA: se regulan sus funciones, se definen las distintas categorías de consejeros, y se reduce el periodo máximo de su mandato de 6 a 4 años.

cc) Se prevé la posibilidad de que el CA pueda constituir comisiones especializadas, siendo obligatoria la existencia de una comisión de auditoría y de una, o dos comisiones separadas, de nombramientos y retribuciones. Las comisiones estarán compuestas únicamente por consejeros no ejecutivos, recayendo siempre la presidencia en un consejero independiente.

9. Remuneración de los administradores

a) Régimen general

La Ley obliga a que los estatutos sociales establezcan el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión, con especial referencia al régimen retributivo de los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas.

El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.

b) Sociedades cotizadas

La aprobación de la política de remuneraciones se someterá a la junta general de accionistas, al menos cada tres años, como punto separado del orden del día.

Corresponde al CA fijar la remuneración de cada uno de los consejeros.

Cualquier modificación requerirá aprobación de la junta y no podrá realizarse pago alguno mientras no haya sido aprobado por la junta.

10. Régimen transitorio

a) Las modificaciones introducidas por esta Ley en relación con determinados artículos sobre la remuneración de los administradores y las especialidades del CA en las sociedades cotizadas entraron en vigor el pasado 1 de enero de 2015, debiéndose acordar en la primera junta general que se celebre con posterioridad a esta fecha.

b) En cuanto a la disposición relativa a la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros prevista en el artículo 529 novodecies, que también entró en vigor el 1 de enero de 2015, resultará de aplicación a las sociedades anónimas cotizadas en la forma siguiente:

aa) En caso de que la primera junta general ordinaria de accionistas que se celebre a partir del 1 de enero de 2015 apruebe con carácter consultivo el informe sobre remuneraciones de los consejeros, se entenderá que la política sobre remuneraciones de la sociedad contenida en el mismo ha resultado igualmente aprobada a efectos de lo dispuesto en el artículo, resultando el mismo de aplicación a dicha sociedad desde ese momento.

B. Real Decreto 579/2014, de 4 de julio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en materia de cédulas y bonos de internacionalización

Las cédulas y bonos de internacionalización se constituyen como un mecanismo de refinanciación de los préstamos y créditos vinculados a la financiación de contratos de exportación o a la internacionalización de empresas.

Se pretende culminar el desarrollo reglamentario de los aspectos en materia de cédulas y bonos de internacionalización contenidos en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre para conseguir la plena operatividad de los mismos. El texto se asienta en tres pilares fundamentales:

1. Normativa de las emisiones

Establece la información que deben contener las emisiones de cédulas y bonos de internacionalización, la forma de cálculo de los límites máximos de emisiones y los mecanismos para restablecer dichos límites cuando son sobrepasados.

Asimismo, las entidades deberán registrar los activos que garantizan sus emisiones.

2. Disposiciones que rigen las operaciones sobre estos títulos en el mercado secundario

Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, el real decreto pone especial énfasis en la regulación de las operaciones que el emisor puede realizar sobre sus propias cédulas y bonos de internacionalización.

3. Competencias de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España

Corresponderá al Banco de España la supervisión de las condiciones exigibles a los activos de cobertura de las cédulas y bonos de internacionalización mientras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores supervisará las cuestiones relacionadas con las ofertas públicas de cédulas y bonos de internacionalización y el devenir de estos títulos en el mercado secundario.

C. Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia

Se adoptan medidas legislativas de carácter urgente necesarias para la ejecución del Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio de 2014, todas ellas dirigidas a aumentar la competitividad y fomentar el funcionamiento eficiente de los mercados y mejorar la financiación, así como a mejorar la empleabilidad.

Tiene tres ejes fundamentales: 1) fomentar la competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados; 2) mejorar el acceso a la financiación; y 3) fomentar la empleabilidad y la ocupación. Además se avanzan algunas medidas de índole fiscal.

1. Medidas para la financiación de la actividad económica

a) Se incluye el Programa de garantías del Instituto de Crédito Oficial.

Mediante dicho Programa, las garantías que el ICO otorgue a su amparo –y dentro de los límites cuantitativos que anualmente se establezcan– gozarán a su vez, de la garantía del Estado. El importe de garantías y avales concedido por el ICO al amparo de este Programa se imputará al límite de endeudamiento que anualmente tenga autorizado el

Instituto. Dada la naturaleza contingente de las garantías y avales, el importe concedido no tiene ningún impacto a efectos del cómputo del déficit o la deuda pública.

b) Se permitió que las entidades locales cancelaran sus deudas contraídas con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (en adelante, el “FFPP”). Con la finalización del período de carencia de la amortización de los préstamos formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos a proveedores articulada en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, el pasado mes de agosto fue el primero en el que las entidades locales que las formalizaron tuvieron que iniciar la amortización del principal de la deuda entonces contraída con el FFPP. La actual regulación se adoptó con el objetivo de que las mismas pudieran cancelar sus deudas con este Fondo antes de iniciar dicha amortización.

c) Se introduce una modificación legal para posibilitar la sustitución de las operaciones de préstamo formalizados con el FFPP en beneficio de las entidades locales. La situación financiera global del sector está favoreciendo que los mercados financieros se abran a las entidades locales, lo que les puede permitir concertar operaciones de refinanciación o de sustitución de los préstamos formalizados con el FFPP en mejores condiciones financieras que las recogidas en estos últimos contratos. Se introduce una modificación legal para posibilitar de forma inmediata la sustitución de las operaciones de préstamo citadas.

2. Medidas para el fomento del comercio minorista y la unidad de mercado

a) La modificación del artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Se introduce una referencia expresa a la regla general de no sometimiento a autorización administrativa en la apertura de establecimientos comerciales, por la que, en su defecto, podrá someterse a declaración responsable o comunicación previa, y se regulan otras situaciones como son los traslados y ampliaciones de los establecimientos, que también han sido sometidas a un tratamiento heterogéneo en la regulación autonómica.

Se consagra el procedimiento integrado para la autorización comercial mediante la inclusión de todas las actuaciones en un único procedimiento que será competencia de una sola autoridad que gestionará las diferentes fases a partir de una misma solicitud, y se

reduce el plazo para la resolución de estos procedimientos a tres meses.

b) La adopción de medidas urgentes de carácter liberalizador en el ámbito de la distribución comercial.

Tienen como objetivo la mejora del empleo y de las ventas, el aumento de la capacidad productiva del país, el fomento de la inversión empresarial para mantener la apertura de los establecimientos, la dinamización del consumo privado y el volumen de negocio del sector.

Suponen una mejora del servicio a los consumidores y su libertad de elección, respondiendo así a los cambios sociales, maximizando los ingresos por turismo y aumentando el potencial turístico del país.

Finalmente, se pretende facilitar a los municipios la declaración de nuevas zonas de gran afluencia turística de forma que aquellos afectados puedan disponer de las herramientas necesarias para instar su declaración en el menor plazo posible.

c) Límites a las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta

La limitación de las tasas de intercambio es aplicable a las operaciones efectuadas con tarjeta de pago, con una limitación máxima del 0,2% en débito y 0,3% en crédito. Para pagos inferiores a 20 euros se establece un umbral máximo de 0,1% en tarjetas de débito y del 0,2% en tarjetas de crédito. Adicionalmente, para los pagos con tarjetas de débito, el nivel máximo de la tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, que aplicará, por tanto, para todos los pagos de importe superior a 35 euros.

3. Otras medidas

a) Se precisa el régimen de la red de aeropuertos de interés general como servicio de interés económico general.

Ello con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial, para asegurar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red, así como la continuidad y adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos.

Se establecen las condiciones de explotación de nuevas aeronaves (drones, Remotely Piloted o Unmanned Aerial Vehicle) para la realización de trabajos técnicos o científicos o, en los términos de la

normativa de la Unión Europea, operaciones especializadas, así como para vuelos de prueba de producción y de mantenimiento, de demostración, para programas de investigación sobre la viabilidad de realizar determinada actividad con aeronaves civiles pilotadas por control remoto, de desarrollo de nuevos productos o para demostrar la seguridad de las operaciones específicas de trabajos técnicos o científicos, permitiendo, de esta forma, su inmediata aplicación.

b) En materia energética se adoptan una serie de medidas dirigidas a garantizar la sostenibilidad y accesibilidad en los mercados de hidrocarburos, así como a establecer un sistema de eficiencia energética en línea con las directrices europeas.

c) El Título IV establece el régimen de implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y recoge otras medidas para favorecer la ocupación.

D. Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

En el BOE de 17 de octubre de 2014, se publicó la Ley, la cual recoge, con alguna mínima diferencia de índole fiscal, las novedades que ya introdujo el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, y que ha sido analizado con anterioridad.

E. Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

Recoge un conjunto de medidas con una doble finalidad: a) hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las pymes, b) avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación, sentando las bases regulatorias necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria en España.

1. Novedades destinadas a favorecer la financiación bancaria de las pymes

a) Entre otras medidas, establece la obligación de las entidades de crédito de: i) notificar a las pymes, por escrito y con antelación suficiente, su decisión de cancelar o reducir significativamente el flujo de financiación que les haya venido concediendo, y a consecuencia de ello, ii) facilitarles, en un formato estandarizado según los criterios del Banco de España, información sobre su situación financiera e historial de pagos.

b) Reforma el régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca con, entre otras medidas:

aa) la modificación del funcionamiento del reaval que la Compañía Española de refinanciamiento presta a estas sociedades. Dicho reaval se activará ante el primer incumplimiento de la sociedad de garantía recíproca.

bb) la extensión del régimen de idoneidad de administradores y directivos de las entidades de crédito a las sociedades de garantía recíproca, en respuesta a las actuales demandas de potenciar y mejorar el gobierno corporativo de las entidades que operan en los mercados financieros.

cc) la reducción de cargas administrativas al eliminarse la obligación de que las relaciones entre las sociedades de garantía recíproca y el socio, en cuyo favor se hubiese otorgado una garantía, se formalicen en escritura pública o póliza intervenida.

2. Régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito

Se recoge el nuevo régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, motivado por la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. El texto mantiene el régimen jurídico previamente aplicable a estos establecimientos, con ciertas singularidades con el fin de modernizarlo y adaptarlo a las actuales exigencias de los mercados financieros. Los establecimientos financieros de crédito pierden su condición de entidades de crédito pero mantienen intacta su inclusión dentro del perímetro de supervisión y estricta regulación financieras.

3. Régimen jurídico de las titulizaciones

La reforma del régimen de las titulizaciones se articula en torno a tres ejes:

a) Opera su refundición ante la dispersión normativa existente. Cabe destacar que se unifican en una única categoría legal los, hasta ahora, denominados fondos de titularización de activos y fondos de titularización hipotecaria. Estos últimos, existentes en el momento de entrada en vigor de la Ley, cohabitarán con los nuevos fondos de titularización de activos hasta que se extingan progresivamente.

b) Flexibiliza la operativa de estos instrumentos, y suprime aquellos obstáculos que impiden replicar en España determinadas estrategias innovadoras de titulización de probado éxito y utilidad en países de nuestro entorno.

c) Fortalece sustancialmente las exigencias en materia de transparencia y protección del inversor, y

especifica las funciones que deben cumplir las sociedades gestoras que, en todo caso, incluirán la administración y gestión de los activos agrupados en los fondos de titularización, sin perjuicio de la repercusión al fondo de titulación de los gastos que correspondan, de acuerdo con lo previsto en la escritura de constitución.

4. Mejoras en el acceso y funcionamiento de las empresas a los mercados de capitales

a) Introduce reformas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para favorecer el tránsito de las sociedades desde un sistema multilateral de negociación a un mercado secundario oficial. Esta previsión se complementa con la obligación de que aquellas empresas que alcancen un volumen de capitalización más elevado soliciten la admisión a negociación en un mercado regulado.

b) Emisión de obligaciones: introduce reformas en el TRLSC, y en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, para facilitar la financiación a través de emisiones de renta fija, eliminando las disfunciones que la actual regulación presenta respecto al funcionamiento actual de los mercados de capitales, al proceder, en gran medida, de la Ley de 17 de julio de 1951 sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas.

aa) Se elimina el límite a las emisiones hasta ahora vigente, por el que las sociedades anónimas y las sociedades comanditarias por acciones no podían emitir obligaciones más allá de sus recursos propios.

bb) Se elimina la prohibición a las sociedades de responsabilidad limitada de emitir obligaciones, si bien se introducen una serie de salvaguardias para evitar un endeudamiento excesivo.

cc) Se racionaliza la exigencia de constitución de un sindicato de obligacionistas, determinando que la constitución del sindicato será preceptiva en aquellas situaciones en las que sea necesario para asegurar una adecuada protección del inversor español.

5. Régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa

Establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a las actividades comúnmente denominadas como “crowdfunding”. Se regulan únicamente las figuras en las que prime el componente financiero de la actividad, esto es, en las que el inversor percibe una remuneración dineraria por su participación,

dejando fuera al “crowdfunding” instrumentado mediante compraventas o donaciones.

Establece el régimen jurídico de las entidades denominadas plataformas de financiación participativa. Entre otras medidas:

- se establecen unos requisitos de autorización y registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores
- en cuanto a su actividad operativa, la regulación se asienta sobre el objetivo de asegurar la neutralidad de las plataformas de financiación participativa en su relación entre inversores y promotores
- establece la prohibición de ofrecer servicios como el asesoramiento financiero, que acercaría las plataformas a otro tipo de entidades ya reguladas y supervisadas
- regula y reserva su actividad a las entidades autorizadas, en aras de fortalecer el desarrollo de este sector y, al tiempo, salvaguardar la necesaria estabilidad financiera.
- Clarifica las normas aplicables a los agentes que utilicen este nuevo canal de financiación.

6. Refuerzo de la capacidad de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Modifica las facultades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el objeto de profundizar en su independencia funcional y reforzar sus competencias supervisoras, en aras del mejor desempeño de su mandato de velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores.

a) Se le dota de la capacidad de emplear novedosos instrumentos de supervisión y de dictar guías técnicas sin carácter vinculante directo.

b) Recibe las competencias completas de autorización y revocación de entidades que operan en los mercados de valores y de imposición de infracciones muy graves, que hasta ahora correspondían al Ministro de Economía y Competitividad.

Finalmente, la DA 5^a modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, estableciendo un régimen sancionador propio con el fin de hacer posible el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública en caso de incumplimiento de lo establecido en el título I de la misma.

II. Derecho Civil

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española

La adopción de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, que entró en vigor el pasado 1 de abril, pretende reducir la inercia de la inflación y propiciar una mayor reactividad de los precios a la situación económica. Las disposiciones contenidas en la Ley se aplican, con determinadas excepciones, a:

1. Las revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público, es decir, el conjunto de organismos y entidades enumeradas en el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. Las revisiones periódicas o no periódicas de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones de arrendamientos de servicios, suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro contrato celebrado entre personas que no sean las exceptuadas por la misma normativa. El objetivo de la Ley es establecer un régimen basado en que los valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan, y prevé a su vez dos regímenes específicos:

a) El régimen aplicable de las revisiones periódicas y predeterminadas, las revisiones periódicas no predeterminadas, y las revisiones no periódicas de los valores monetarios del sector público.

También regula la revisión de precios y tarifas de los contratos a los que es de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Con carácter general no podrán realizarse según índices de precios o fórmulas que los contengan, si bien se admite que excepcionalmente se haga en virtud de precios o índices específicos de precios.

b) El régimen aplicable a los contratos entre partes privadas, fundado en el respeto a la libre voluntad de las partes intervenientes en el contrato, de modo que solo procederá la revisión periódica en caso de pacto expreso. En caso de que hayan acordado la revisión sin prever ningún método de cálculo, la renta se actualizará en función de la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada revisión.

III. Derecho administrativo

A. Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa

Las principales medidas introducidas por esta ley son las siguientes:

1. La adaptación de modificaciones normativas para permitir la reordenación de organismos públicos con el fin de mejorar su eficiencia y reducir el gasto público.

En materia cultural, la Ley prevé y regula la suscripción de convenios de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Corporación RTVE, a fin de promover y difundir la música a nivel nacional e internacional.

En el ámbito educativo, se concentran en un único organismo todas las funciones de evaluación y acreditación del profesorado universitario, que hasta ahora venían desarrollando la fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

También se procede a integrar la rama de actividad de medio propio que realiza actualmente la Sociedad Estatal para la promoción y atracción de las inversiones exteriores S.A relacionada con la actividad que desarrolla el ICEX, en este último, a efectos de acentuar sus labores de apoyo a la internacionalización.

2. La racionalización de estructuras públicas, especialmente en aquellos ámbitos donde existen competencias compartidas entre distintas Administraciones

Recoge una serie de modificaciones legislativas para adecuar las estructuras de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte; Empleo y Seguridad Social; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de modo que sus funciones se lleven a cabo en un menor número de entidades y órganos colegiados, con una visión más global e integradora y con un menor coste para los ciudadanos.

Asimismo, se procede a modificar la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria con una doble finalidad:

- permitir de manera más eficaz el control de las cuentas corrientes en las que se sitúan fondos de Tesoro Público, abarcando no solo el control para la apertura de cuentas en entidades distintas del Banco de España, sino también sobre aquéllas que vayan a abrirse en esta entidad.

- permitir al Ministerio de Economía y Competitividad, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la firma de contratos con una o varias entidades bancarias, diferentes del Banco de España, para que posteriormente los órganos administrativos que sean autorizados para abrir una cuenta corriente se incorporen al sistema mediante adhesión.

3. La simplificación de procedimientos para ciudadanos y empresas, reduciendo trabas burocráticas e impulsando la Administración electrónica.

En lo que respecta a la firma electrónica en la Administración pública, se modifica la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, para asegurar el uso de una única relación de certificados electrónicos reconocidos en todas las Administraciones Públicas.

Asimismo se implanta el Tablón Edictal Único a través del «Boletín Oficial del Estado» como diario oficial de la entera organización estatal, no solamente de la Administración General del Estado y se modifica la Ley General Tributaria y la del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) en materia de notificaciones, que tienen por objeto incluir entre las notificaciones del Tablón edictal único, respectivamente, las notificaciones en los procedimientos tributarios y aquellas correspondientes a los procedimientos catastrales de valoración colectiva.

4. Se introducen varias medidas relativas al régimen de los empleados públicos

Se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con la finalidad de fomentar la movilidad de los empleados públicos.

B. Ley orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Las principales modificaciones realizadas a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial son las siguientes:

- Establece la posibilidad para los órganos competentes de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas de acordar también su jubilación dado que en la actualidad son las que gestionan todas las materias relativas a su estatuto jurídico.

- Posibilita que la constitución de Tribunales delegados en las Comunidades Autónomas y en las pruebas de acceso a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia pueda responder a criterios de oportunidad y racionalidad y únicamente se constituyan cuando el tipo de pruebas, el contenido de las funciones que han de realizar, así como el número de plazas u otras circunstancias de carácter objetivo, lo aconsejen.

- Atribuye al Tribunal Supremo el conocimiento de las causas civiles y penales que pudieran dirigirse contra los actos cometidos por el Rey o la Reina tras su abdicación.

C. Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo

D. Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores; Modificación Texto Refundido Ley de Contratos de Sector Público

A pesar de haber sido derogada por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, la Disposición Final Primera de la Ley 13/2014 modificó el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a la forma del pago del precio.

Con anterioridad a dicha modificación, la Administración estaba obligada a abonar el precio en un plazo máximo de 30 días a contar desde la expedición de la certificación de obra, o bien desde la recepción de la mercancía, o la prestación del servicio. A partir de los 30 días, se devengaban intereses de demora.

Ahora, tras la modificación del art 216.4, que continúa en vigor, la Administración está obligada a abonar el precio en el mismo plazo de 30 días pero, a contar desde la aprobación de la certificación de obra y en todo caso, para que se inicie el cómputo de los intereses de demora, el contratista deberá haber presentado la factura ante el registro administrativo correspondiente. Para aprobar la certificación, la

Administración dispone, salvo disposición en contrario en el contrato, de 30 días.

E. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

F. Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

El pasado 12 de octubre de 2014, entró en vigor el nuevo, y esperado, Reglamento de la Ley de Costas. Y es que si bien la Ley 2/2013, de 29 de mayo, apuntaba la posibilidad de que las concesiones existentes (con la excepción de las que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio de puertos) pudieran prorrogarse de forma extraordinaria hasta un máximo de 75 años, el Reglamento debía ser el que, en función de los usos, determinara dichos plazos máximos.

Los plazos máximos que ha fijado el Reglamento con respecto a los supuestos que despiertan mayor interés son: de hasta 75 años para uso de vivienda, hasta un máximo de 30 años para el uso de restauración y hasta un máximo de 50 años, para actividades de explotación económica distintas a las de restauración. La prórroga de la concesión debe ser solicitada antes de que se extinga el plazo para el que fue concedida, pero es importante tener en cuenta que el plazo de aquélla se computará desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo que reste para la extinción de la concesión que se prorroga. Igualmente importante resulta el hecho de procurar que la prórroga inicial sea lo más extensa posible pues aún cuando la Ley permite que la resolución prevea prórrogas sucesivas dentro del límite fijado para cada uso, ello puede tener importantes consecuencias económicas en caso de rescate de la concesión por parte del Estado.

G. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado

H. Sentencia Tribunal Constitucional de 11 de septiembre de 2014: nulidad de un inciso de la Ley del Suelo

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 11 de septiembre de 2014, declaró que la Ley del Suelo de 2007 y su Texto Refundido de 2008 son conformes a la Constitución, salvo en un extremo que afecta a la valoración del suelo rural.

Ambos textos preveían que el valor del suelo en situación de suelo rural podía ser incrementado hasta un máximo del doble en función de factores objetivos

de localización, tales como la accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico.

El Tribunal Constitucional ha anulado la limitación al doble del alza del valor del suelo pues éste “incorpora un tope máximo que no se halla justificado, que puede resultar inadecuado para obtener en esos casos una valoración del bien ajustada a su valor real y que, en consecuencia, puede impedir una determinación de la indemnización acorde con la idea proporcional de equilibrio”.

Teniendo en cuenta que desde la Ley del Suelo de 2007 se encuentran en situación de suelo rural, todos aquéllos suelos que no hayan sido debidamente urbanizados así como aquéllos que tradicionalmente estaban calificados por el planeamiento como suelo rústico, la eliminación de ese “tope máximo” reviste una indudable importancia práctica en procedimientos expropiatorios, de reparcelación o supuestos de responsabilidad patrimonial.

IV. Derecho fiscal y tributario

A. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

Las reformas más importantes introducidas por la citada Ley en materia de Impuesto de Sociedades (en adelante, IS) pueden resumirse en los puntos que a continuación se exponen:

1. Hecho imponible

Queda incorporado al hecho imponible del IS el concepto de actividad económica en términos prácticamente idénticos a los empleados en sede del IRPF. Se introduce asimismo el concepto de “entidad patrimonial”, entendiéndose por tales a aquellas entidades que, sin realizar una actividad económica, ostenten un activo del que, al menos la mitad, no se halla afecto a una actividad económica o, alternativamente, esté constituido por valores.

La nueva normativa entró en vigor a partir de 1 de enero de 2015. No obstante, la Ley contiene medidas temporales cuyo ámbito temporal se limita al año 2015 y otras de ellas cuya entrada en vigor es anterior al 1 de enero de 2015.

a) Contribuyentes

Destaca especialmente que, a partir de la reforma, las sociedades civiles que tienen objeto mercantil

pasarán a incorporarse al IS, no tributando ya como contribuyentes del IRPF.

b) Base imponible

- Aproximación del resultado contable a la base imponible (pretendida) para aproximar el tipo nominal al tipo efectivo (Práctica desaparición de deducciones y minoración de los ajustes negativos).

- Amortizaciones: se introduce un nuevo supuesto de libertad de amortización para los elementos del inmovilizado material nuevos (no sólo para ERD), cuyo valor unitario no exceda los 300 euros, hasta el límite de 25.000 euros referido al período impositivo.

Nuevas tablas de amortización fiscal: A partir de 1 de enero de 2015, los elementos patrimoniales se amortizan durante los períodos impositivos que resten hasta completar la vida útil de acuerdo con la nueva tabla

Inmovilizado intangible de vida útil indefinida y Fondo de comercio oneroso: Es deducible el 5% de su precio de adquisición desde 2016, sin que se requiera la dotación de reserva indisponible alguna. Régimen transitorio para 2015: Fondo de Comercio financiero 1% y resto intangibles 2%.

Los ajustes fiscales realizados por limitación deducibilidad del 30% en las dotaciones de amortizaciones de períodos impositivos iniciados en 2013/2014 se podrán revertir a partir de 2015 de acuerdo con su vida útil residual o al 10% anual a opción del contribuyente.

- Deducibilidad de gastos. Llama particularmente la atención el hecho que la deducibilidad de las atenciones a clientes queda limitada al 1% del importe neto de la cifra de negocios de la entidad. La deducibilidad de cuantías inferiores, empero, está sometida a las reglas generales de registro, justificación e imputación temporal.

No son deducibles las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y el inmovilizado intangible, incluyendo el fondo de comercio. Régimen transitorio: la reversión de las pérdidas por deterioro que hubieran sido deducibles antes de 1 de enero de 2015 se integran en la Base imponible del período impositivo en que se recupere el valor contablemente.

- Reducciones de la base imponible. Principal novedad a este respecto es la introducción de la denominada “reserva de capitalización”, la cual consiste esencialmente en la no tributación de aquella parte del beneficio que se destine a la constitución de

una reserva indisponible, siendo además necesario que dicha reserva no esté sujeta a un requisito de inversión en algún tipo particular de activo. La principal finalidad de esta medida consiste en potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto y, en consecuencia, impulsar el saneamiento de las empresas, así como su competitividad.

- Compensación de bases imponibles negativas. No existe ya limitación temporal a la compensación de bases imponibles negativas pasadas (antes 18 años). Sin embargo, y como regla general, se introduce a partir de 2016 una limitación cuantitativa del 70% de la base imponible previa a su compensación y previa a la reserva de capitalización, y se admite, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. Excepción: Entidades de nueva creación (en los 3 primeros períodos impositivos en que generen base positiva) y en caso de extinción de la sociedad, salvo que se produzca una operación de reestructuración.

2. Doble imposición internacional

Queda incorporado a la regulación del IS un nuevo límite de exención general para participaciones significativas en el capital o en los fondos propios de otras entidades; exenciones susceptibles de aplicación tanto en el ámbito interno como en el internacional. Pasa del 5% al 25%.

Introducción del Exit Tax: tributación de plusvalías latentes en caso de cambio de residencia fiscal.

Tipos de gravamen

- El tipo de gravamen general se reduce del 30% al 25% (28% en 2015). Sin embargo, el tipo de gravamen será del 15% para aquellas entidades que se consideren de primera creación, tipo que se aplica a la base imponible positiva obtenida en el primer período impositivo y en el siguiente. En ningún caso podrán las entidades patrimoniales disfrutar de este tipo reducido.

- ERD: Se elimina la escala de tributación (25%/30%), equiparándose con el resto de sociedades, tributando al tipo general (25%) (recordatorio del régimen transitorio de 2015 (28%);

B. Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015

Son destacables las siguientes cuestiones:

- IPREM Indicador público de rentas efectos múltiples: Se mantienen la mismas cantidades del 2014: Diario: 17,75 euros /Mensual: 532,51 euros
- Interés legal: se establece en el 3,5% / Interés de demora: 4,37
- IRPF: se regula la compensación por la pérdida de beneficios fiscales que afecta a algunos contribuyentes con la vigente Ley reguladora del Impuesto, cuales son los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2014 respecto a los establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente hasta 31 de diciembre de 2006.
- Impuesto sobre el Patrimonio: se procede a prorrogar durante 2015 la exigencia de su gravamen, lo que contribuirá a mantener la senda de consolidación de las finanzas públicas.
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: se actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandeszas y títulos nobiliarios al 1 por ciento.
- Fondos de capital riesgo: se establece la exención de todas las operaciones sujetas a gravamen en la modalidad de operaciones societarias, para equiparar su tratamiento al de los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de titulación de activos financieros.
- Tasas: se actualizan, con carácter general, al 1 por ciento los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas en el año 2014.

C. Real Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.

La Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, establece un nuevo esquema mediante el cual el Estado, a través de un Agente Gestor, dará cobertura a determinados riesgos de la internacionalización y fija el marco regulatorio en el que el Agente Gestor actuará por cuenta del Estado.

En la actualidad, la CESCE es el organismo que ha sido seleccionado para desempeñar las funciones del Agente Gestor por una duración de 8 años. Finalizado este plazo se procederá a la selección de un nuevo Agente Gestor.

Este real decreto tiene por objeto el desarrollo de las previsiones de la referida Ley respecto a las

operaciones, los contratantes, los riesgos susceptibles de ser cubiertos por cuenta del Estado y las modalidades de seguro o de garantía que se pueden utilizar para la cobertura.

Las operaciones de internacionalización son definidas como aquellas operaciones de inversión directa en el exterior y las de exportación de bienes y/o servicios, incluidas las que lleven asociadas proyectos de investigación, desarrollo e innovación, así como la financiación y garantía o afianzamiento de estas operaciones, que se definan en cada momento por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Comercio.

El mecanismo establece que el Estado, a través de su Agente Gestor, podrá celebrar contratos de cobertura por cuenta del Estado (los llamados convenios de gestión) de los riesgos de la internacionalización con las empresas o las entidades financieras –cualkiera que sea su lugar de establecimiento o registro– que intervengan en la financiación, ejecución y afianzamiento de operaciones de internacionalización de la empresa y de la economía española. Los aspectos más relevantes son los siguientes:

1. Detalle del contenido del Convenio de Gestión, así como los términos y condiciones de la habilitación para que el Agente Gestor actúe por cuenta del Estado.
2. Desarrollo del procedimiento por el cual la Secretaría de Estado de Comercio apreciará las circunstancias relevantes relativas al conflicto de interés tanto para ser designado como Agente Gestor como durante la vigencia del Convenio de Gestión.
3. Determinación de la forma en que se instrumentará la separación estricta entre operaciones por cuenta propia y por cuenta del Estado, las instrucciones y directrices que debe recibir el Agente Gestor para suscribir convenios sobre moratorias y remisiones parciales o totales de deuda y su sistema de retribución.
4. Prevé que las cláusulas especiales y particulares de los contratos de seguros se definan para cada operación por el Agente Gestor de conformidad con el principio de libertad de pactos y bajo el marco de la mejor defensa del interés del Estado sin que, como hasta ahora, se encuentren sometidas a régimen de autorización previa.

Finalmente, en virtud de lo establecido por el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto

2486/1998, de 20 de noviembre, el Agente Gestor está obligado a constituir una provisión técnica que garantice las obligaciones de gestión derivadas tanto de los contratos de seguro como de la normativa que le es aplicable. Sin embargo, dicho reglamento no contempla la provisión técnica de gestión de riesgos derivados de la internacionalización asegurados por cuenta del Estado en el listado de provisiones técnicas.

D. Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, aprobado por el Real decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo

E. Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley de Impuestos sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el real decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias

A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), la Ley 26/2014 introduce una extensiva reforma del mismo, si bien se mantiene la estructura básica del Impuesto. La Exposición de Motivos de la Ley modificativa fija sus objetivos en la consecución de una serie de propósitos, a saber:

- Reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes, medida de especial relevancia para los perceptores de rendimientos del trabajo y de actividades económicas de renta más baja, así como para quienes deban asumir unas mayores cargas familiares.
- Eliminar, con carácter general para todos los contribuyentes, los incentivos fiscales (ej. deducción por adquisición de vivienda)
- Fomentar una conducta de ahorro a largo plazo.

Estos mismos objetivos pretenden inspirar también las reformas introducidas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), adaptando su regulación al marco normativo comunitario y reforzando la seguridad jurídica y la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.

F. Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre valor añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley

38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por las que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras

G. Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

V. Derecho procesal

A. Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

B. Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

Por medio de esta Ley, las autoridades judiciales españolas podrán transmitir a otro Estado miembro las órdenes o resoluciones penales que hubiesen dictado para así obtener su reconocimiento y ejecución en dicho Estado miembro.

Simultáneamente, en España se reconocerán y ejecutarán las órdenes europeas y las resoluciones penales previstas en la referida Ley cuando las mismas no incurran en motivo tasado de denegación del reconocimiento o ejecución y se hubieran transmitido adecuadamente por la autoridad competente del Estado miembro emisor.

Además, la ejecución en España de la orden o resolución penal emitida y transmitida por otro Estado miembro estará sometida al Derecho español y se llevará a cabo de conformidad con los mismos criterios que presiden la ejecución de resoluciones españolas.

Sin embargo, se exige de la autoridad judicial española competente que observe las cuestiones procedimentales y de forma expresamente indicadas por la autoridad judicial del Estado miembro emisor con la condición de que tales criterios no sean contrarios al orden público español.

C. Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea

Transpone al ordenamiento jurídico español dos normas europeas en relación con el principio de reconocimiento mutuo: la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, y de la Decisión Marco 2008/315/JAI, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre Estados miembros.

El texto pretende reforzar la cooperación judicial de la Unión Europea en base de los principios de la armonización de legislaciones y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, conforme a los artículos 67 y 82 del TFUE.

Su objeto es regular el régimen aplicable:

- al intercambio de información sobre antecedentes penales de las personas físicas entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y,
- a la consideración en los procesos penales tramitados en España de resoluciones condenatorias definitivas y firmes dictadas con anterioridad por un órgano jurisdiccional penal de otro Estado miembro contra las mismas personas físicas.

Estas normas se coordinan con la reforma del Código Penal para que los efectos de la reincidencia sean aplicables en las mismas condiciones cuando la sentencia condenatoria haya sido dictada en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.

Las principales aportaciones de la Ley son las siguientes:

- Dotar de mayor seguridad jurídica la actuación del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, como autoridad competente para la remisión y la petición de la información relativa a los antecedentes penales.
- Establecer del mecanismo para asegurar la plena eficacia de la cooperación entre las autoridades competentes con la regulación de la obligación de informar de las condenas, el contenido de esa información o los plazos en los que ha de practicarse.
- Consagrar el principio de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión Europea mediante su toma en consideración en procesos posteriores derivados de la comisión de nuevos delitos y el procedimiento de obtención de dicha información.
- La enumeración de los supuestos en los que tales condenas no pueden ser tomadas en consideración.

La normativa advierte que no será de aplicación a las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010.

Finalmente, contiene en anexo el formulario para el intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros.

D. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

El pasado 27 de febrero de 2015 se aprobó el Real Decreto-Ley 1/2015, cuya entrada en vigor se produjo al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es, el 29 de febrero del corriente.

Una de las principales modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 1/2015 es la supresión de la obligación de pago de la tasa judicial para las personas físicas.

Por su parte, las personas jurídicas seguirán obligadas al pago de la tasa judicial tal y como venían haciendo hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2015, esto es, cuando se realice el hecho imponible y no concorra ninguna causa de exención objetiva – entre las que se encuentran, entre otras, la solicitud de concurso voluntario, o la presentación de petición de juicio monitorio o demanda de juicio verbal por cuantía inferior a 2.000 euros-.

E. Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

La transposición de estas Directivas supone un refuerzo de las garantías del proceso penal, mediante una regulación detallada del derecho a la traducción e interpretación y del derecho del imputado a ser informado sobre el objeto del proceso penal de modo que permita un eficaz ejercicio del derecho a la defensa.

1. Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales

Las modificaciones introducidas garantizarán el derecho a la interpretación y traducción en los

procesos penales de los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación.

El derecho a ser asistido se extiende a todas las actuaciones en las que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o el realizado por el Ministerio Fiscal, así como todas las vistas judiciales.

También tendrá derecho a la presencia de un intérprete durante y en las comunicaciones con su Abogado que guarden relación directa con cualquier interrogatorio o vista judicial durante el proceso, o con la presentación de un recurso u otras solicitudes procesales.

El derecho a interpretación o traducción requiere que se le facilite la traducción de los documentos esenciales (resoluciones por las que se priva a una persona de su libertad, los escritos de acusación o las sentencias), o al menos los pasajes relevantes de dichos documentos.

Asimismo, se garantiza el derecho a recurrir la decisión por la que se deniega el derecho a la interpretación o a la traducción, mediante la obligatoriedad de documentar por escrito la decisión judicial, así como la posibilidad de hacer constar en acta la protesta durante el juicio oral, lo que permitirá la interposición de los recursos correspondientes.

Los intérpretes o traductores judiciales serán designados entre aquellos incluidos en los listados elaborados por la Administración, creándose a tal efecto un Registro de traductores e intérpretes judiciales.

2. Derecho a la información en los procesos penales

La LECrim recoge en la actualidad la mayor parte de los derechos a los que hace referencia la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

La nueva redacción completa el catálogo de derechos de defensa haciendo mención expresa, entre otros, a: a) al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad, b) al derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, c) a la información del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial, y d) el procedimiento mediante el cual puede impugnar la legalidad de su detención.

Especial mención merece el derecho de acceso al expediente: cuando se trata de imputados detenidos o privados de libertad el alcance de su derecho se limita, por exigencia de la normativa europea, a aquellos elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Se trata de proporcionar, con anterioridad a la interposición del recurso, únicamente aquella información que sea fundamental para que sea posible valorar la legalidad de la detención o privación de libertad.

En cuanto a la forma en la que la información ha de ser suministrada, lo será en un lenguaje accesible, adaptado a la edad, grado de madurez, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal del imputado o detenido. Para los detenidos o presos, la información de los derechos que le asisten deberá efectuarse por escrito.

En cuanto al momento, los imputados deberán recibirla sin demora injustificada y, en los casos de los detenidos o presos, la información deberá ser suministrada de forma inmediata.

VI. Derecho concursal

A. Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial

La Ley tiene como principal objetivo aliviar la carga financiera de las empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas.

Las principales aportaciones son:

1. Con la presentación de la comunicación de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos se pueden suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a cabo, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

También se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a los que se refiere la Disp. Ad. 4, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 % de acreedores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del correspondiente acuerdo de refinanciación.

2. Régimen de la administración concursal

- a) Se establecen las directrices que deberá guiar el nuevo sistema de requisitos para ejercer como administrador concursal y asegurar de que cuente con aptitudes y conocimientos suficientes.
 - b) Se modifican los principios rectores de la remuneración de la administración concursal para tener en cuenta la calidad y resultado de su trabajo (la eficiencia como principio rector).
 - c) Se crea una sesión cuarta del Registro Público concursal como pilar para la reforma del sistema de designación de la administración concursal cuyo funcionamiento se desarrollara mediante reglamento.
 - d) Se distinguen en un nuevo capítulo las funciones de la administración concursal de la siguiente manera: De carácter procesal; Propias del deudor o de sus órganos de administración; En materia laboral; Relativas a derechos de los acreedores; de informe y evaluación; de realización de valor y liquidación y de secretaría, además de cualquier otra que les sea atribuida por la Ley.
3. Limitación de los supuestos de suspensión de la ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial.
4. Las acciones de reintegración se regulan íntegramente en el artículo 71 de Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, creándose exclusivamente el artículo 71 bis para el régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación añadiendo un nuevo supuesto de no rescindibilidad.
5. Se atribuye con carácter temporal la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de tesorería, comprendiendo los que traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas.
6. En conexión directa con el régimen de acuerdos de refinanciación, se acomete una revisión del régimen de homologación judicial regulado en la Disp. Ad. 4. En particular, se amplía el ámbito subjetivo, extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores financieros, con determinadas excepciones.
7. Se establecen además determinadas medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en capital, rebajando las mayorías exigibles por la LSC y estableciendo, con las debidas cautelas y

garantías, una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razonable a ejecutar un acuerdo de recapitalización.

B. Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal

La finalidad perseguida por el legislador es facilitar la continuidad de la actividad empresarial, circunstancia que no sólo supone beneficia para la propia empresa, sino también para la economía en general.

En cuanto a las modificaciones introducidas, interesa centrarse en los siguientes dos puntos:

1. Convenio concursal

- En cuanto a la ejecución de posibles garantías y, en consecuencia, a la obtención del valor razonable del bien ejecutado, se prevé la deducción de los importes de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre dicho bien, con una deducción adicional del 10% en concepto de costes y dilaciones aparejado a la ejecución.

- Se amplía el *quórum* en la Junta de Acreedores y se dota de derecho de voto a una serie de acreedores que, hasta el momento presente, tenían negada la posibilidad de votar el convenio en la Junta. Entre tales acreedores, destacan aquellos que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso.

- El límite para los efectos del convenio, que exigía en su momento una quita del 50% y una espera de cinco años, queda eliminado si se acredita una mayoría reforzada del 65% del crédito con derecho a voto en la Junta. Eso implica, por tanto, que en pactos de sindicación esa mayoría no podrá ser inferior al 75%.

2. Liquidación

- Se introduce la subrogación *ipso iure* del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el concursado (art. 146 bis).

- Se plantean mecanismos de exención de responsabilidad en sede de deudas previas, quedando sin embargo excluidos aquellos casos que, por sus singulares características, siguen mereciendo una tutela especial (por ejemplo, deudas contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social).

- Se completa la regulación del art. 148 en materia de cesiones en pago o para pago, siendo novedosa al

respecto la posibilidad de que el juez acuerde la retención de un 10% de la masa activa para destinarlo a futuras impugnaciones.

- Se introducen una serie de reglas de índole supletorio relativas a la enajenación de unidades productivas (modificación art. 149), sobre todo en lo relativo a las reglas de purga o subsistencia de las eventuales garantías reales a las que pudieran estar sujetos todos o algunos de los bienes englobados en dicha unidad.

C. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

El pasado 27 de febrero de 2015 se aprobó el Real Decreto-Ley 1/2015, cuya entrada en vigor se produjo al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es, el 29 de febrero del corriente.

Otra de las modificaciones importantes introducidas por el RDL 1/2015, además de las ya tratadas en el anterior Punto II. Derecho Civil ii) son aquellas relativas a la reducción de la carga financiera mediante la modificación de la Ley concursal, del Real Decreto-Ley 6/2012, de 2 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Estas medidas tienen por objeto establecer una serie de controles y garantías que eviten insolvencias estratégicas y las daciones en pago selectivas. La idea principal consiste en lograr que el deudor que hubiera agotado su patrimonio por haberlo liquidado en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras esa liquidación.

Interesa destacar las siguientes medidas:

1. Flexibilización de los acuerdos extrajudiciales de pago (principalmente por medio de la asimilación de su regulación a los acuerdos de refinanciación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal) y previsión de un mecanismo de segunda oportunidad efectivo.

El ámbito de aplicación del régimen de acuerdos extrajudiciales se amplía a las personas naturales no empresarios, para las que se regula un procedimiento simplificado.

Asimismo, en el marco del procedimiento concursal se establece un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona física, siempre y cuando el deudor sea de buena fe y se haya liquidado previamente su patrimonio (o se haya declarado la conclusión del concurso por insuficiencia de masa) y se cumplan otros tantos requisitos como son el pago del 25% de los créditos ordinarios.

Por otro lado, se extienden los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, y se potencia la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios (si el deudor es empresario), o los notarios, cuando se trate de personas naturales no empresarios.

2. Mejora del “Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual”, en su momento introducido por el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, mediante el incremento del límite anual de renta de las familias beneficiarias y la consecuente ampliación del ámbito subjetivo.

3. Ampliación de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables (vid. Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) hasta el 2017.

VII. Derecho laboral y de la Seguridad Social

A. Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social

B. Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la ley general de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

C. Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral

Mediante este real decreto-ley se regulan:

a) la planificación y financiación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, la programación y ejecución de las acciones formativas,

b) el control, el seguimiento y el régimen sancionador,

c) el sistema de información, la evaluación, la calidad y la gobernanza del sistema

Cabe señalar que el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, así como su normativa de desarrollo, se mantendrá vigente únicamente en aquellos aspectos en los que no pueda ser de aplicación directa lo establecido en la normativa en tanto no se desarrolle reglamentariamente lo previsto en la misma, detallándose las previsiones que sí serán de aplicación directa para mayor seguridad jurídica.

D. Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015

Incrementa en 0,5% las cuantías del salario mínimo interprofesional respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Dichas nuevas cuantías rigen desde el 1 de enero de 2015, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar.

La norma dispone expresamente que el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,62 euros/día o 648,60 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.

El texto advierte que para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en virtud del mismo.

E. Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo

Por medio de la regulación del Programa de Activación para el Empleo, el Real Decreto-ley pretende contribuir a reducir el tiempo que los trabajadores pasan en situación de desempleo y facilitar su retorno al mundo laboral.

Se concibe como un programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración que cumplan una serie de requisitos. Una vez admitidos en el programa, los beneficiarios podrán obtener el reconocimiento de una ayuda económica de acompañamiento.

Sus principales características con las siguientes:

1. Personas beneficiarias

El programa está destinado a las personas con responsabilidades familiares que han estado vinculadas con el mercado laboral en el pasado y que son demandantes de empleo en la actualidad, pero que han quedado fuera del ámbito de la protección por desempleo hace al menos seis meses.

2. Obligaciones de activación

Estas pueden reagruparse en tres bloques:

- La suscripción de un compromiso de actividad,
- La acreditación de acciones de búsqueda activa de empleo, y
- La participación en las acciones de mejora de la empleabilidad y búsqueda activa de empleo previstas en el itinerario individual y personalizado de empleo.

3. Procedimiento

El plazo de presentación de la solicitud de incorporación al programa está fijado entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016. El texto regula los aspectos procedimentales tanto para incorporarse al programa como para que se tenga por producida una baja definitiva o temporal en dicho programa y en la percepción de la ayuda.

Los Servicios Públicos de Empleo son los encargados de elaborar el itinerario individual y personalizado de empleo, asignar un tutor individual y, guiar a los beneficiarios en el proceso de retorno al empleo.

La ayuda económica de acompañamiento podrá concederse de forma complementaria. Tendrá una duración máxima de seis meses y su cuantía será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento.

La percepción de la ayuda de acompañamiento podrá compatibilizarse con un contrato por cuenta ajena. Esta posibilidad constituye una excepción legal por cuanto permite la formalización de un contrato con una empresa privada y que esta tenga en cuenta la ayuda que continuará percibiendo el beneficiario en el cómputo de las retribuciones salariales que correspondan, durante un máximo de cinco meses.

Finalmente, el texto señala también que la financiación de la ayuda económica se incluirá dentro de la acción protectora por desempleo y se realizará con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

F. Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por los salarios de tramitación en juicio por despido

El procedimiento para el cobro de la cantidad equivalente al importe de los salarios que hubiera dejado de percibir el trabajador como consecuencia de un juicio por despido declarado improcedente venia regulado, hasta ahora, en el Real decreto 924/1982, de 17 de abril, sobre reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido.

Esta normativa ha experimentado variaciones en los últimos años, por lo que se ha considerado necesario abordar una nueva regulación del procedimiento que, adaptada a la normativa actual, permita la resolución de las reclamaciones y, en su caso, el abono de las cantidades por este concepto en tiempos razonables.

Están legitimados para presentar la reclamación, tanto el empresario que, habiendo readmitido al trabajador despedido con carácter improcedente, haya pagado los salarios de tramitación, como el propio trabajador despedido, en caso de insolvencia provisional del empresario.

El texto deroga el Real Decreto 924/1982, de 17 de abril

4. Desarrollo del programa y la ayuda económica de acompañamiento

sobre reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido.

G. Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones para el año 2015 y otras normas en materia de Clases pasivas**VIII. Sectores regulados****- Energía****A. Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan las medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares****B. Real Decreto 417/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del proceso de titularización del déficit del sistema eléctrico****C. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos****D. Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015)****- Agricultura y Pesca****A. Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primera agrícola****B. Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario****C. Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado****- Derecho bancario y mercados financieros****A. Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva****B. La modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva****C. Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito****- Derecho marítimo****A. Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima****B. Real Decreto 1004/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles**

C. Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo

D. Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen jurídico y las normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de recreo que transporten hasta doce pasajeros

E. Real Decreto 938/2014, de 7 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante

- Derecho aeronáutico

Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas

IX. Derecho penal

A. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

La reforma introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, destaca, en particular, por las siguientes novedades:

1. Responsabilidad de la persona jurídica

Destaca muy especialmente la modificación de los artículos 31 y 31 bis así como la incorporación de sendos artículo 31 ter y ss. En efecto, además de mejorar la definición y configuración técnica de la responsabilidad penal de la persona jurídica, mediante dicha normativa se da plena entrada en el ordenamiento español a los deberes de “compliance” e implantación de sistemas efectivos de control de cumplimiento normativo.

La modificación del artículo 31 del Código Penal y la introducción de los artículos 31 bis a 31 quinqués viene a precisar los sujetos y los supuestos de los que puede derivarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas, e introduce como causa de exención de la misma el desarrollo de un programa de prevención (programa de compliance penal) que permita reducir los riesgos de comisión de un delito.

La normativa desarrolla el régimen de exención de responsabilidad de la persona jurídica en función del

cargo que el autor del delito ostenta dentro de la misma, distinguiendo entre:

- Los representantes legales de las personas jurídicas y quienes actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

- Aquellos que están sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el apartado anterior y que hayan podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por los sujetos comprendidos en el primer grupo si cumple determinadas condiciones cumulativas en materia de supervisión enumeradas en la disposición.

Para las pequeñas entidades, es decir, aquellas que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, bastará con que las funciones de supervisión previstas como condición de exención sean asumidas por su propio órgano de administración.

En cuanto a los delitos cometidos por el segundo grupo de sujetos, la ley prevé que la persona jurídica quedará exenta si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. La ley enumera una serie de requisitos mínimos que deberán respetar el referido modelo de organización y gestión.

En ambos casos y en los casos en los que los requisitos exigidos para la exención total de la responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

Cabe señalar que la ley mantiene las mismas circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal establecidas en la regulación anterior, con excepción de la introducción del nuevo supuesto anteriormente mencionado.

Finalmente, se establece una exoneración para el Estado, las Administraciones públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las

organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas, estas se hallaran parcialmente exentas.

2. Prisión permanente revisable

La referida L.O. se presenta como revolucionaria al introducir una nueva pena de prisión permanente revisable, cuya imposición será sólo posible en supuestos de especial gravedad, tales como el asesinato en serie o el homicidio del Jefe de Estado o de su heredero, entre otros. Se trata de supuestos en los que una medida de semejante envergadura se entiende justificada, si bien sujeta a un régimen de revisión que permitirá al sujeto penado obtener la libertad condicionada si da cumplimiento a una serie de exigencias. Entre otras condiciones, se requiere que el penado haya cumplido con una parte de la condena, la cual oscilará entre los veinticinco y los treinta y cinco años.

3. Libertad condicional

Se introduce un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional aplicable a los sujetos penados que estén dando cumplimiento a su primera condena corta de prisión. Sin embargo, la libertad condicional ya no computará como tiempo de cumplimiento de la condena, sino que se entenderá comprendida dentro de las distintas modalidades de suspensión de la ejecución de la pena.

4. Protección de niños

Queda incorporada la regulación de la inclusión de perfiles de condenados en la base de datos de ADN, constituyendo ello respuesta inmediata a la finalidad de incorporar las previsiones del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual.

Se eleva asimismo la edad de consentimiento sexual de los trece a los dieciséis años. En consecuencia, se considerará hecho delictivo la realización de actos de carácter sexual con menores de edad inferior a los dieciséis años, con la salvedad de que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.

5. Intromisión en la intimidad

Se tipifican finalmente los supuestos en los que las captaciones de imagen o las grabaciones de otra persona son divulgadas en contra de su voluntad, a pesar de haberse obtenido con su consentimiento. La

imagen o grabación deberá haberse captado en un ámbito personal y la difusión de cualquiera de ellas, sin el consentimiento de la víctima, deberá lesionar gravemente la intimidad de ésta.

6. Corrupción y financiación ilegal de partidos

Otra novedad importante consiste en la creación de una nueva sección, relativa a los “Delitos de corrupción en los negocios”, dentro del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del Código Penal. De entre estos delitos destaca, en particular, la introducción de un delito por soborno para obtener ventajas de índole competitiva, tanto si dicho soborno se ejerce sobre otros miembros de la competencia, como si afecta a funcionarios públicos, si bien con penas distintas en un caso u otro.

Se tipifica asimismo la financiación ilegal de partidos, siendo de notar que es también castigable la persona que participe en estructuras u organizaciones dedicadas a la financiación de partidos al margen de la ley.

B. Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo

C. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito

D. Ley Orgánica 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificación de las Enmiendas al estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010

X. Derecho medioambiental

A. Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

B. Real decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado

C. Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre

D. Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

XI. Otras normas

A. Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas

B. Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen Personal de la Guardia Civil

C. Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales

D. Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

E. Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

F. Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020

G. Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de derivados cárnicos

H. Real Decreto-ley 9/2014, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos y se aprueban la normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

I. Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso

J. Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

K. Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología

L. Real Decreto 193/2015, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo



Abogado
Fabregat Perulles Sales, Barcelona
v.fabregat@fabregat-perulles-sales.com

Spanische Rechtsprechung/ Jurisprudencia Española

Zusammengestellt/seleccionada por

Christian Hofer*

I. Ley de contrato de seguro, Versicherungsvertragsrecht, Internationales Privatrecht, Urteil der Audiencia Provincial de Las Palmas vom 30.09.2014, 417/2014

Anwendbarkeit von deutschem Recht bei Ersatzanspruch aus Artikel 82 LCS ivm. Artikel 107 Absatz 3 LCS zwischen Versicherungsunternehmen, Anwendbarkeit von deutschem Recht im spanischen Zivilprozess und Beweislastverteilung zwischen den Parteien bezüglich der ausländischen Rechtsordnung. Rückgriff auf spanische Anspruchsgrundlage, wenn Geltung und Inhalt des deutschen Rechtes nicht bewiesen werden.

Der deutsche Versicherungsnehmer der deutschen Barmenia Krankenversicherung wurde bei einem Unfall auf den kanarischen Inseln verletzt. Schuld am schädigenden Ereignis trägt ein spanischer Versicherungsnehmer, der bei der spanischen Mapfre Versicherung versichert ist.

Die Barmenia Versicherung macht in ihrer Klage gegen die Mapfre Versicherung einen Ersatzanspruch nach spanischem Recht aus Artikel 82 Ley de Contrato de Seguro geltend. Nach dieser Norm kann die Versicherung die Kosten der ärztlichen Behandlung, die Sie ihrem Versicherungsnehmer ersetzt, gegen den schädigenden Dritten geltend machen.

Die Parteien streiten darüber, ob gemäss Artikel 107, Absatz 3 Ley de Contrato del Seguro der Ersatzanspruch des Artikel 82 LCS heranzuziehen ist, oder ob Anspruchsgrundlage ein im deutschen Recht enthaltener Ersatzanspruch aus § 86 VVG ist. Weiterhin wird die Frage aufgeworfen, ob die Klägerin eine Rechtswahl zwischen deutschem oder spanischem Recht treffen kann.

Zunächst beschäftigt sich das Gericht mit dem Inhalt von Artikel 107, Absatz 3 Buchstabe c) LCS sowie der darin enthaltenen Möglichkeit der Rechtswahl zwischen dem spanischen und dem ausländischen Recht. Die Rechtswahl ist dann möglich, wenn das Versicherungsrisiko in Spanien besteht und der Versicherungsnehmer nicht in Spanien seinen Wohnsitz hat. Im vorliegenden Fall verneint die Audiencia Provincial de Las Palmas jedoch die Möglichkeit der Rechtswahl, da das

Versicherungsrisiko nicht in Spanien lokalisiert ist. Denn dies bemisst sich laut Artikel 107, Absatz 4 der Norm nach der Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Artikel 1.3 d) des vorgenannten Gesetzes bestimmt unter Punkt 4°, dass das Versicherungsrisiko in demjenigen Staat besteht, in dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat. Aufgrunddessen erkennt die Audiencia Provincial, dass das Versicherungsrisiko, nämlich die Pflicht zur Zahlung der ärztlichen Behandlungskosten zwischen Barmenia und dem Versicherungsnehmer, in Deutschland besteht. Demgemäß unterfällt der Ersatzanspruch der Barmenia gegen die Mapfre grundsätzlich deutschem Recht, also § 86 VVG, dem deutschen Äquivalent zu Artikel 82 LCS.

Im konkreten Fall haben jedoch weder die Klägerin noch die Beklagte die Anwendbarkeit des deutschen Rechtes vorgetragen. Die Klägerin hatte in erster und zweiter Instanz irrigerweise vorgetragen, der von ihr geltend gemachte Ersatzanpruch und dessen Übergang ergebe sich aus spanischem Recht, also Artikel 82 LCS. Die Beklagte hatte dies richtigerweise bestritten und auf die Geltung des deutschen Rechtes verwiesen, jedoch ohne den Inhalt der von ihr geltend gemachten Rechtsnormen zu beweisen.

An diesem Punkt gelangt das Gericht zur Auffassung, dass die Geltung, Inhalt und Umfang der von den der Parteien geltend gemachten ausländischen Rechtsordnung von derjenigen Partei bewiesen werden muss, die sich auf die ausländische Rechtsnorm beruft.

Da die deutsche Versicherung nicht die Geltung von § 86 VVG vortrug, sondern (irrigerweise) die Anwendbarkeit des spanischen Rechtes, muss Sie laut Gericht auch nicht den Inhalt von § 86 VVG beweisen. Da sich aber die Gegnerin auf dessen Geltung (zu Recht) beruft, ohne jedoch den Inhalt der Norm vorgetragen zu haben, gilt die Norm als nicht bewiesen und wird folglich vom Gericht nicht beachtet.

Nun ergibt sich die Konstellation, dass das Gericht zwar wusste, dass das deutsche Recht anwendbar ist, jedoch dessen Inhalt nicht kannte, da dieser von keiner der Parteien vorgetragen wurde. Gemäß Artikel 11.3 der Ley Organica del Poder Judicial ist

jedoch das Gericht verpflichtet, über die ihm vorgelegten Fragen zu urteilen. Hierzu hat das Tribunal Supremo in seiner Entscheidungen vom 17.7.2001 (RJ 2001, 5433) bereits entschieden, dass bei fehlendem Beweis über den Inhalt der eigentlich anwendbaren ausländischen Rechtsordnung wiederum ein Rückgriff auf das spanische Recht stattfinden muss.

In der Folge wurde ein Urteil gesprochen, in welchem die spanische Versicherung aus Artikel 82 LCS zur Zahlung gegenüber der Barmenia Versicherung verurteilt wurde, obwohl das deutsche materielle Recht die Anspruchsgrundlage bildet.

II. Verordnung des Rates 44/2001, Internationales Zivilprozessrecht, Gerichtsstandvereinbarungen, Urteil der Audiencia Provincial de Alicante vom 24. Februar 2014, 41/14

Internationale Zuständigkeit der spanischen Gerichte, Gerichtsstandvereinbarung zwischen Unternehmern durch schlecht leserliche AGB in englischer Sprache.

Dem Urteil liegt eine Klage der spanischen Paparinell SL gegen die TUI Travel PLC, einer Tochtergesellschaft der deutschen TUI, auf Zahlung von Forderungen zugrunde, die aus einer vertraglichen Geschäftsbeziehung im Tourismusgewerbe in Benidorm herrühren. Die von TUI gestellten AGB des Vertrages enthielten eine Klausel, in der formalmäßig die Anwendbarkeit des englischen Rechtes auf den Vertrag vereinbart wurde und weiterhin die Zuständigkeit der englischen Gerichte festgelegt wurde. Im Vertrag selbst war diese Vereinbarung auf englisch abgefasst und aufgrund eines Druckfehlers schlecht leserlich, jedoch lesbar.

Die Parteien streiten sich über die Frage der internationalen gerichtlichen Zuständigkeit und die Wirksamkeit der in den AGB enthaltenen Gerichtsstandvereinbarung.

Die Audiencia Provincial de Alicante prüft die Wirksamkeit der Gerichtsstandvereinbarungen anhand der Anforderungen der Verordnung des Rates 44/2001. Zunächst stellt die Audiencia Provincial de Alicante fest, dass die AGB für deren Wirksamkeit in den zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag lediglich miteinbezogen werden müssen, jedoch nicht explizit unterschrieben sein müssen. Insoweit besteht im vorliegenden Fall auch kein Widerspruch zu Artikel 54, Absatz 2 der Ley de Enjuiciamiento Civil, da es sich bei den Parteien des Vertrages nicht um

Verbraucher handelt, sondern beide in ihrer Eigenschaft als Unternehmer handeln.

Das Gericht prüft anschliessend, ob zwischen den Parteien eine Einigung über die Einbeziehung der Gerichtsstandvereinbarung gemäss Artikel 23 der Verordnung 44/2001 zustande kam. Daneben ist laut Gericht eine allgemeine Einbeziehungskontrolle nach spanischem AGB- Gesetz durchzuführen.

Eine Überprüfung der Missbräuchlichkeit hat im vorliegenden Fall nicht stattzufinden, da es sich bei den Parteien um Unternehmer handelt. Allein die Tatsache, dass sich die Gerichtsstandvereinbarung in AGB wiederfindet und nicht im Vertragstext selbst, macht diese noch nicht unwirksam. Sofern es sich bei der Form, Struktur und Aufbau des Vertrages um einen in diesem Sektor typischen Vertrag handelt, hält das Gericht die Einbeziehung der Klausel durch AGB für grundsätzlich unproblematisch. Weiterhin hält das Gericht den im Vertrag enthaltenen Hinweis auf die AGB auf der Rückseite des Vertrages für ausreichend, um die Einbeziehung der Klausel im vorliegenden Fall für gegeben zu erachten.

Dass die Klausel im konkreten Einzelfall schlecht lesbar, jedoch leserlich ist, gereicht derjenigen Partei nicht zum Nachteil, welche die Klausel stellt. Erforderlich für eine wirksame Einigung über deren Einbeziehung ist lediglich, dass die Klausel zur Kenntnis genommen werden kann und verständlich ist. Eine englische Formulierung einer standardisierten Gerichtsstandvereinbarung hält die Audiencia Provincial für verständlich; die Klausel ist laut Gericht ausreichend klar und deutlich, um deren Einbeziehung in den Vertrag zu bewirken.

Unter Hinweis auf die europäische Rechtsprechung, namentlich des Urteiles vom 9.11.2000 TJCE 2000, 265, stellt das Gericht fest, dass für eine wirksame Gerichtsstandvereinbarung nicht erforderlich ist, dass aus der Formulierung bereits das zuständige Gericht ersichtlich ist. Es ist ausreichend, „dass in der Vereinbarung objektiv diejenigen Streitigkeiten festgelegt sind, bezüglich derer sich die Parteien geeinigt haben, dass für den Fall des Auftretens die von den Parteien gewählten Gerichte zuständig sind“. Eine Formulierung, die besagt, dass für den Fall des Auftretens von Streitigkeiten aus dem Vertrag die englischen Gerichte zuständig sind, ist laut Audiencia Provincial de Alicante ausreichend konkret.

Somit sieht das Gericht die Gerichtsstandvereinbarung als wirksam an.

III. Internationales Privatrecht, Erbfolge, Urteil des Tribunal Supremo vom 28. April 2014, 624/2013

Unwirksamkeit einer Erbschaftsannahme in Spanien, Verhältnis von Güterrechtsvereinbarung des Erblassers nach spanischen Recht zu vorherigem Testament nach ausländischem Recht, Artikel 9, Absatz 8 ivm. Artikel 12, Absatz 6 Código Civil.

Dem Tribunal Supremo wurde folgender Sachverhalt zur Entscheidung vorgelegt:

Der italienische Staatsangehörige hatte im Jahre 1973 ein notarielles Testament in Spanien errichtet, in dem er seine Nichten als Erbinnen seines Vermögens bestimmte. Bei Errichtung des Testamento wohnte der Erblasser bereits in Spanien. Im Jahre 2004 schloss er die Ehe mit einer spanischen Staatsangehörigen, die Eheleute vereinbarten Güttrennung und weiterhin, dass als Ehrerecht das spanische Recht anwendbar sein solle. Nach dem Tode des Erblassers streiten dessen Ehefrau und die drei Nichten über das auf die Erbschaft anwendbare Recht, welches die Rechte der Ehegattin des Erblassers regelt.

Das erstinstanzliche Gericht erkannte im vorliegenden Falle, dass das italienische Recht gemäss Artikel 9.8, Satz 1 Código Civil heranzuziehen sei, jedoch die Rechte des überlebenden Ehegatten im Sinne des Artikel 9, Absatz 8 Satz 3 nach spanischem Recht zu beurteilen sind, so wie dies von den Eheleuten durch die Rechtswahl im Ehevertrag festgelegt worden ist. Das Urteil wurde in zweiter Instanz von der Audiencia Provincial Málaga aufgehoben.

Das Tribunal Supremo erkennt im vorliegenden Fall, dass zwar laut Artikel 9, Absatz 8 das anwendbare Erbrecht nach dem Recht der Staatsangehörigkeit des Erblassers bestimmt wird, also nach italienischen Recht. Die Rechte des überlebenden Ehegatten bestimmen sich jedoch gemäss Artikel 9, Absatz 8 Satz 3 nach spanischem Recht. Das spanische Recht kommt zur Anwendung, da eine wirksame güterrechtliche Vereinbarung zwischen den Eheleuten geschlossen wurde, in welcher das spanische Recht gewählt wurde. Diese Aufassung widerspricht laut Tribunal Supremo auch nicht dem Universalitätsgrundsatz des spanischen Erbrechtes und dem Verbot der Nachlassspaltung. Es handelt sich bei der vorgenannten Norm um eine Ausnahmeregelung zu den vorgenannten Grundsätzen.

Der Entscheidung kommt sehr hohe Praxisrelevanz im deutsch-spanischen Rechtsverkehr zu. Bei Misshandlungen zwischen deutschen und spanischen Ehepartnern haben die Eheleute die Möglichkeit, gemäss Artikel 9 Absatz 2 und 3 CC und Artikel 14, Absatz 2, Artikel 15, Absatz 2 EGBGB die Anwendbarkeit des spanischen Ehegüterrechtes zu wählen. Gleiches gilt für rein deutsche Ehepaare, deren einziger Wohnsitz in Spanien besteht, und welche die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe nach Artikel 15, Absatz 2 EGBGB dem spanischen Recht unterwerfen. Hierdurch kommt es zu einer weitreichenden Änderung des Pflichtteilsrechtes des überlebenden Ehegatten, weg vom Recht der Staatsangehörigkeit und hin zum spanischen Pflichtteilsrecht. Ob im Einzelfall die Hinzuziehung der einen oder der anderen Rechtordnung vorteilhaft ist, bedarf einer grundlegenden Überprüfung durch den beauftragten Rechtsanwalt.

Kritisch ist der Entscheidung aber entgegenzusetzen, dass das spanische Recht per se keine Erbverträge kennt, siehe hierzu auch den Aufsatz von Cristina de Canals in Informaciones I/2015.

Das hier besprochene Urteil des Tribunal Supremo hebt jedoch den Ehevertrag und die darin enthaltenen Wahl des spanischen Rechtes auf die Stufe eines Erbvertrages. Es findet faktisch eine Durchbrechung des erbrechtlichen Regelungsgehaltes durch familienrechtliche Vereinbarungen statt. Die ehegüterrechtliche Vereinbarung führt im Erbfall auf Seiten des überlebenden Ehegatten zu weitgehenden Rechtsänderungen erbrechtlicher Art. Ob dies dogmatisch vertretbar ist, erscheint zweifelhaft.

IV. Internationales Privatrecht, Erbrecht, Pflichtteilsrecht, Urteil des Tribunal Supremo vom 12.1.2015, 490/2014

Rückverweisung gemäss Artikel 9, Absatz 8 und Artikel 12, Absatz 2 Código Civil durch ausländische Rechtsordnung auf spanisches Recht bei Vererbung von in Spanien belegtem Immobilienvermögen. Unwirksamkeit letztwilliger Verfügungen, die von Ausländern in Spanien unter Verletzung von spanischen Pflichtteilsrechten errichtet wurden.

Die Entscheidung des Tribunals Supremo ist von sehr hoher Praxisrelevanz für die anwaltliche Tätigkeit in Spanien, insbesondere bei der Betreuung ausländischer Staatsangehöriger und der Kollision von spanischem Pflichtteilsrecht mit der weitgehenden Testierfreiheit der angelsächsischen oder anderer Rechtsordnungen.

Das Urteil befasst sich mit einem in Spanien errichteten notariellen Testament eines britischen Staatsangehörigen. Der Testator setzte zur Alleinerbin seines in Spanien belegenen Vermögens seine zweite Ehefrau ein. Aus erster Ehe hatte der Erblasser eine Tochter, die er in der letztwilligen Verfügung nicht bedachte. Das Testament enthielt eine weitere Klausel, die wie folgt lautete: Die Verfügungen dieses Testamento erfolgen unbeschadet der Pflichtteilsrechte, welche den Pflichtteilsberechtigten zustehen können und unter Berücksichtigung des gesamten Nachlasses des Erblassers sowie unbeschadet des Belegenheitsortes des Nachlasses.

Der Nachlass bestand lediglich aus einer Immobilie in Spanien; im Ausland war weder bewegliches noch Immobilienvermögen des Erblassers vorhanden. Der Erblasser hatte seinen letzten Wohnsitz ebenfalls in Spanien. Nach englischem Erbrecht bestimmt sich das anwendbare Erbrecht nach dem Belegenheit des Immobilienvermögens, das Erbrecht des beweglichen Vermögens richtet sich nach dem Wohnsitz des Erblassers zum Todeszeitpunkt. Es findet insoweit eine Rückverweisung des englischen IPR auf das spanische Recht im Sinne der Artikel 9, Absatz 8 und 12, Absatz 2 des spanischen Código Civil statt.

Hierdurch kommt im konkreten Fall das spanische materielle Erbbrecht zur Anwendung, welches einen weitreichenden Pflichtteilsanspruch der Tochter des Erblassers aus erster Ehe bestimmt.

Die Tochter des Erblassers verlangte aus dem ihr nach spanischer Rechtsordnung zustehenden Pflichtteil die teilweise Rückabwicklung der Übertragung der Immobilie auf die Ehefrau sowie die Grundbuchberichtigung entsprechend des ihr zustehenden Pflichtteils nach spanischem Erbrecht.

Das Tribunal Supremo erkennt in der vorliegenden Entscheidung, dass durch die Rückverweisung der ausländischen Rechtsordnung nach Art. 9.8 CC iv, Art. 12.2. CC auf das spanische materielle Erbrecht auch die Pflichtteilsrechte der spanischen Rechtsordnung bezüglich des Nachlasses zur Anwendung kommen. Der im spanischen Erbrecht enthaltene Grundsatz der Universalität der Erbschaft ist hierdurch nicht verletzt, da in Ermangelung von Immobiliengütern außerhalb Spaniens keine Rechtsspaltung auf den Nachlass stattfindet. Eine Rückverweisung auf das spanische materielle Erbrecht ist nur dann ausgeschlossen, wenn hierdurch der im spanischen Erbrecht enthaltene Grundsatz der Universalität des Nachlasses verletzt wird. Gleichermaßen gilt für die weitgehende Verfügungs freiheit des englischen Erbrechtes, die nicht durch die Rückverweisung auf das spanische materielle Erbrecht ausgehebelt wird.



* Rechtsanwalt und Abogado
Kanzlei RCH Legal, Marbella
c.hofer@rchlegal.com

Junge Juristen/ Jóvenes Juristas*

Die strafrechtliche Praxis einer spanischen Großkanzlei aus deutscher Sicht – Ein Erfahrungsbericht

Michael Juhas Coca**

Während der Wahlstation meines Referendariats im Sommer 2014 hatte ich die Gelegenheit, für die spanisch-portugiesische Kanzlei Cuatrecasas, Gonçalves Pereira in Barcelona tätig zu sein. In dieser Zeit war ich auf meinen Wunsch hin der Abteilung für Strafrecht zugeteilt. Einen deutschen Juristen wird das zunächst überraschen, da deutsche Großkanzleien für gewöhnlich über keine eigene Strafrechtsabteilung verfügen. Die Strafverteidigung ist in Deutschland immer noch eine Domäne von Einzelkämpfern und kleinen bis allenfalls mittelgroßen Kanzleien, auch im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts.

Die großen Wirtschaftskanzleien bieten ihren Mandanten zwar in den letzten Jahren auch vermehrt Beratung im Bereich Compliance an, klassische Strafverteidigung wird dort für gewöhnlich jedoch nicht praktiziert.

Dies war bei Cuatrecasas, Gonçalves Pereira völlig anders. Zwar war auch hier Compliance ein wichtiger Teil meiner Arbeit, da ich am Entwurf von Fragebögen an Unternehmen, der Auswertung der entsprechenden Antworten von Unternehmen und schlussendlich auch an der Erstellung von Compliance-Richtlinien und dem Aufbau von Compliance-Strukturen mitwirken durfte. Doch damit erschöpfte sich der Bereich Strafrecht keinesfalls. Vielmehr wird dort auch klassische Strafverteidigung praktiziert.

bei allen Verschiedenheiten im Detail, dem Grunde nach vieles ähnlich geregelt ist. Mittlerweile muss diese Aussage jedoch etwas eingeschränkt werden: Seit 2010 können sich in Spanien auch juristische Personen, also Unternehmen, wegen bestimmter Delikte strafbar machen. Das Unternehmen kann somit strafrechtlich verantwortlich für die Handlungen von seinen Organen und Mitarbeitern sein. Da Mandanten von Wirtschaftskanzleien in aller Regel Unternehmen sind, liegt es nahe, dass diese Unternehmen einen größeren Bedarf an Strafverteidigung, vor allem aber auch an funktionierenden Compliance-Strukturen haben. Ein Unternehmen kann sich nämlich nach dem spanischen Recht entlasten, wenn es die Mitarbeiter angemessen kontrolliert hat. Gerade dieser Begriff der angemessenen Kontrolle wird im Gesetz aber nicht näher definiert, sondern ist von den konkreten Umständen abhängig. Daher besteht seit dieser Reform bei spanischen Unternehmen verstärkt Beratungsbedarf im Strafrecht, während dies bei deutschen Unternehmen, denen eine Bestrafung nur durch Bußgelder aufgrund einer Ordnungswidrigkeit droht, (noch) weniger ausgeprägt ist. Allerdings wird auch in Deutschland über die Einführung einer Unternehmensstrafbarkeit diskutiert, so dass sich die Rechtslage insoweit bald angleichen könnte.

II. Das Strafprozessrecht

Jedoch gab es bereits vor der Einführung der Unternehmensstrafbarkeit im Jahre 2010 in den meisten spanischen Wirtschaftskanzleien auch Strafrechtsabteilungen. Der eigentliche Grund hierfür liegt im Prozessrecht.

In Deutschland ist der entscheidende Akteur im Rahmen der Strafverfolgung die Staatsanwaltschaft. Sie ist es, die den Sachverhalt, ggf. mit Hilfe von anderen Behörden wie der Polizei, ermittelt, Anklage erhebt und diese Anklage auch vor Gericht vertritt. Dem Opfer einer Straftat kommt im deutschen Strafverfahren nur eine untergeordnete Rolle zu. Abgesehen natürlich von der Möglichkeit, die Staatsanwaltschaft mittels einer Strafanzeige über eine Straftat in Kenntnis zu setzen und ihr dann die Initiative zu überlassen, besteht zum einen bei

I. Das materielle Strafrecht

Wie kommt es nun zu diesem Unterschied zwischen deutschen und spanischen Großkanzleien? Ein entscheidender Grund liegt in den bestehenden rechtlichen Unterschieden in Deutschland und Spanien. Zum einen im materiellen Strafrecht: Zwar bestehen insofern zwischen deutschem und spanischem Recht keine wesentlichen Unterschiede. Das deutsche Strafrecht und die Strafrechtswissenschaft haben bis zum heutigen Tag erkennbar Einfluss auf das spanische Recht, so dass,

* Kontakt/Contacto:maria.xiol@cuatrecasas.com;
javier.alos@cuatrecasas.com

** Doktorand an der Universität München

bestimmen Straftaten die Möglichkeit der Nebenklage. Dies setzt jedoch eine Anklage der Staatsanwaltschaft voraus, das Opfer kann, wie der Name schon sagt, nur neben der Staatsanwaltschaft vor Gericht auftreten. Zum anderen gibt es bei einer konkret definierten Anzahl von Delikten die Möglichkeit einer Privatklage. Bei einer Privatklage tritt der Geschädigte einer Straftat als Ankläger auf, ohne dass die Staatsanwaltschaft an dem Verfahren beteiligt ist. Allerdings ist die Möglichkeit, als Privatkläger aufzutreten, auf wenige Delikte beschränkt. Daher besteht für einen Geschädigten in Deutschland nur selten die Möglichkeit, ein Strafverfahren selbstständig zu betreiben, vielmehr ist er in der Regel auf die Ermittlungstätigkeit und eine Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft angewiesen.

In Spanien sind die Möglichkeiten des Geschädigten, an einem Strafverfahren mitzuwirken, hingegen deutlich ausgeprägter: Im Rahmen der *acusación particular* kann das Opfer einer Straftat grundsätzlich selbst Anklage (eine sog. *querella*) erheben, ist also nicht auf die Staatsanwaltschaft angewiesen. Noch weiter geht die *acusación popular*. Laut Art. 125 der spanischen Verfassung hat jeder Bürger das Recht, als Ankläger in einem Strafverfahren aufzutreten. Dabei ist es unerheblich, ob er selbst von der Straftat betroffen war. Dies bedeutet, dass im spanischen Recht jeder Bürger das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung in die eigene Hand nehmen kann, während in Deutschland der Grundsatz gilt, dass das öffentliche Interesse nur von staatlichen Organen, im Bereich des Strafrechts also von der Staatsanwaltschaft, wahrgenommen wird.

Die Institutionen der *acusación popular* und der *acusación particular* ermöglichen nun in weitem Umfang die Beteiligung des Geschädigten oder sonstiger Dritter an einem Strafverfahren. Dies kann insbesondere auch in einem Zivilverfahren von Bedeutung sein. Mit der Intention, Druck auszuüben, werden nämlich Gegner im Zivilprozess häufig noch wegen verschiedener Straftatbestände im Wege der *acción penal* angeklagt, um die eigentlich verfolgten zivilrechtlichen Ziele zu erreichen. Die Liste der denkbaren Straftaten, wegen derer eine Partei Anklage erheben kann um ein eigentlich

zivilrechtliches Vorgehen zu unterstützen, ist lang. Sie reicht von Betrug, Verleumdung und Nötigung bis hin zu Straftatbeständen, von denen gerade Unternehmen in besonderer Weise betroffen sind, da sie auch zu einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit der juristischen Person selbst und nicht nur ihrer Organe führen können. Als Beispiel mögen hier nur Insolvenzdelikte und Straftaten gegen das geistige Eigentum dienen. Bei allen Arten von Unternehmen ist grundsätzlich immer auch eine Strafverfolgung wegen Geldwäsche, Korruptionsdelikten und Steuerhinterziehung möglich. So hatte ich während meiner Tätigkeit in der Kanzlei die Gelegenheit, mit einer großen Zahl von unterschiedlichen spanischen Straftatbeständen in Berührung zu kommen und dadurch einen recht umfassenden Einblick in die verschiedenen Bereiche des spanischen Strafrechts zu gewinnen.

Wenn nun aber einerseits eine Verteidigung gegen Anklagen im Wege der *acusación particular* erforderlich sein kann, so wird es andererseits auch in vielen Fällen im Interesse des eigenen Mandanten liegen, gegen die Gegenpartei direkt Anklage zu erheben oder zumindest ein zivilrechtliches Vorgehen durch eine Anklage zu unterstützen, wenn der Verdacht einer Straftat nahe liegt. Daher war ich während meiner Wahlstation auch häufiger damit beschäftigt, Anklageschriften zu entwerfen. Dies wird für einen deutschen Strafverteidiger sicherlich die Ausnahme sein, da er sich im Regelfall auf die Verteidigung von Beschuldigten beschränken wird und die Strafverfolgung der Staatsanwaltschaft überlässt.

III. Fazit

Die Arbeit im spanischen Strafrecht hat mir einen neuen Blickwinkel auf das deutsche Recht eröffnet und mir ermöglicht, auch „strafverfolgend“ tätig zu sein. Aus diesem Grund kann ich auch anderen deutschen Referendaren nur empfehlen, ihre Wahlstation in Spanien zu absolvieren. Insbesondere im spanischen Strafgesetzbuch wird sich ein deutscher Jurist schnell zurechtfinden können, während er im Strafprozess einige bedeutende Unterschiede erkennen wird.

Notizen aus der Vereinigung / Noticias de la Asociación

El congreso de Santiago fue realmente fantástico. El ambiente fue estupendo y la organización llevada a cabo por nuestra querida compañera Barbará Román, sin duda cumplió todas las expectativas, tanto jurídicas, como gastronómicas. La excursión en barco por la Ria de Arousa, incluyendo barra libre de mejillones y ribeiro creo que fue inmejorable.

Las ponencias tuvieron gran nivel y versaron sobre la protección de marcas no convencionales, derecho de sucesiones, el derecho de huelga y derecho urbanístico.

Como es tradición, durante el congreso tuvo lugar la asamblea general. En el transcurso de la misma, y por su importante papel en el tráfico jurídico hispano-alemán, se acordó nombrar a Burckardt Löber socio honorífico de nuestra asociación.

También durante la asamblea se debatió el destino del próximo congreso en España. Los socios decidieron que el congreso de 2017 tuviese lugar en Lanzarote. Sin duda será un congreso excepcional.

Recientemente ha sido publicada una nueva e interesante monografía en el marco de nuestra Schriftenreihe: „Die Einführung eines Präsenzbonus in Deutschland unter Berücksichtigung der prima de asistencia in Spanien“. Su autor es Benedikt Leffers. Para encargar cualquiera de las publicaciones de la Schriftenreihe pueden dirigirse directamente a la Editorial Peter Lang..

Por último informaros que el mini congreso de otoño tendrá lugar en Berlín el 14 de noviembre y tratará sobre cuestiones sobre la creación y asesoramiento a Start Ups.

Como sede del mini congreso de primavera 2016 hemos elegido Sitges (Barcelona). Tema y fecha cavarán de determinarse en la próxima Junta Directiva que tendrá lugar en Septiembre.

Esperando encontraros en Berlín, recibid un cordial saludo,

Víctor Fabregat

Der Kongress in Santiago war wirklich fantastisch. Das Ambiente war hervorragend und die Organisation durch unsere liebe Bárbara Román erfüllte, sowohl in juristischer als auch in gastronomischer Hinsicht, zweifellos alle Erwartungen. Die Schifffahrt auf der „Ría de Arousa“, inklusive einer unbegrenzter Anzahl an Miesmuscheln und Ribeiro war, glaube ich, unverbesserlich.

Die Vorträge hatten ein hohes Niveau und beschäftigten sich mit dem Schutz nicht traditioneller Marken, Erbrecht, Streikrecht und Städtebau.

Wie immer, gab es anlässlich des Kongresses eine Mitgliederversammlung, bei der beschlossen wurde, Burckhardt Löber wegen seiner wichtigen Rolle im deutsch-spanischen Rechtsverkehr zum Ehrenmitglied unserer Vereinigung zu ernennen.

Es wurde auch über den nächsten Kongressort in Spanien diskutiert. Die Mitglieder beschlossen, dass der Kongress 2017 in Lanzarote stattfinden soll. Zweifellos wird dies ein außerordentlicher Kongress.

Kürzlich wurde innerhalb unserer Schriftenreihe eine neue und interessante Monografie veröffentlicht: „Die Einführung eines Präsenzbonus in Deutschland unter Berücksichtigung der prima de asistencia in Spanien.“. Autor ist Benedikt Leffers. Die Bände können direkt beim Peter-Lang-Verlag bestellt werden.

Als letztes möchte ich darauf hinweisen, dass der nächste Minikongress am 14.11.2015 in Berlin stattfinden wird und sich mit der Gründung und Beratung con Start Ups beschäftigen wird.

Der Minikongress im Frühjahr 2016 soll in Sitges (Barcelona) stattfinden. Thema und Termin werden wir im September anlässlich unserer nächsten Vorstandssitzung diskutieren.

Auf ein baldiges Wiedersehen in Berlin, herzliche Grüße

Víctor Fabregat



Beisitzer/ Vocal DSJV-AHAJ
Abogado
Fabregat Peralles Sales, Barcelona
v.fabregat@fabregat-peralles-sales.com

Protokoll der Mitgliederversammlung der DSJV e.V. anlässlich des Jahreshauptkongresses 2015 in Santiago de Compostela vom 06.06.2015

An der Mitgliederversammlung am 06.06.2015 haben 51 stimmberechtigte Mitglieder teilgenommen. Die Teilnehmerliste ist als Anlage zu diesem Protokoll beigefügt.

1. Eröffnung und Begrüßung

Als Präsident der Vereinigung eröffnet Marc André Gimmy die Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwesenden.

2. Geschäftsbericht des Präsidenten

Marc André Gimmy berichtet anhand der für die Mitgliederversammlung vorbereitete Power-Point-Präsentation mit Unterstützung der übrigen Vorstandsmitglieder über das abgelaufene Geschäftsjahr 2014/2015.

3. Bericht des Schatzmeisters

Unser Schatzmeister, Dr. Cato Dill, berichtet auf Grundlage der in der Mitgliederversammlung ausgelegten Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Vereinigung sowie zur Vermögensübersicht derselben ausführlich.

4. Bericht der Kassenprüfer

Unser Mitglied Markus Artz berichtet als Kassenprüfer auch stellvertretend für den weiteren Kassenprüfer Richard Wicke zu der von diesem durchgeführten Prüfung der Konten der Vereinigung sowie der Buchführung und Belege, die von der Vereinigung den Kassenprüfern am 06.05.2015 zur Verfügung gestellt worden sind. Er bestätigt im Ergebnis, dass die Belege ordnungsgemäß aufbewahrt und die Buchhaltungskonten ordnungsgemäß geführt worden sind.

5. Aussprache

Auf den Geschäftsbericht des Präsidenten, den Bericht des Schatzmeisters und den Prüfungsbericht der Kassenprüfer erfolgt sodann eine Aussprache, in welcher von dem Mitglied Ulrich Krempe und dem Mitglied Dr. Bernhard Idelmann angefragt wird, das Guthaben auf dem Festgeldkonto der Vereinigung zu besseren Zinskonditionen angelegt werden kann. Hierzu kündigt unser Schatzmeister Dr. Cato Dill an, dass der Vorstand dieses Thema bei der nächsten Vorstandssitzung auf die Tagesordnung setzen wird.

6. Entlastung des Vorstandes

Vor dem Hintergrund des Prüfungsberichts der Kassenprüfer wird auf Antrag des Kassenprüfers Dr. Markus Artz der Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr einstimmig durch die Mitgliederversammlung entlastet.

7. Kongresse 2016 und 2017

Die Kongressorganisation des Kongresses des Jahres 2016 in Koblenz (Dr. Markus Artz und Carmen López) teilt auf der Mitgliederversammlung mit, dass sämtliche notwendigen Vorbereitungen laufen.

Als Kongressort für die Durchführung des Jahreshauptkongresses im Jahr 2017 präsentiert unser Mitglied und Vorstandsmitglied Ana Hidalgo die Stadt Murcia, unser Mitglied Dr. Luis Fajardo stellt Lanzarote als Alternativ-Kongressort vor und verweist darauf, dass er bereits in Santa Cruz de Tenerife im Jahr 2007 einen Kongress organisiert hat.

Die Mitgliederversammlung beschließt mit 37 zu 7 Stimmen, dass der Jahreshauptkongress 2017 auf Lanzarote stattfinden soll. Hierauf freuen wir uns sehr!

8. Verschiedenes

Unser Präsident Marc André Gimmy berichtet, dass dem Vorstand ein Antrag auf Ehrenmitgliedschaft unseres Mitglieds Dr. Burckhardt Löber vorliegt und erteilt unserem Mitglied Lotta Hilgers das Wort, welche einem den Antrag entsprechend emotionale Laudatio auf Dr. Löber hält.

Bei einer Enthaltung wird Herr Dr. Burckhardt Löber, aufgrund seiner Verdienste für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr, einstimmig zum Ehrenmitglied der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung e.V. von der Mitgliederversammlung gewählt.

Im Anschluss fragt unser Präsident Marc André Gimmy die Mitglieder, ob zu diesem TOP noch weitere Wortmeldungen erfolgen. In der darauffolgenden sehr regen Teilnahme der Mitglieder wird deutlich, dass die Anbindung junger Mitglieder an die Vereinigung gestärkt und die Teilnahme an den Kongressen möglichst erhöht werden soll. Unser Präsident stellt auf Nachfrage des Mitgliedes Roberto Hayer die Kostenstruktur der Kongresse dar und ermuntert die Anwesenden weiterhin dafür Sorge zu

tragen, dass möglichst auch viele junge Kolleginnen und Kollegen in ihrem Kanzleien die Möglichkeit erhalten, an den Kongressen teilzunehmen. Hinsichtlich der derzeitigen Homepage wird der Vorstand den Vorschlag des Mitglieds Tilman Scheffczyk aufgreifen, ggf. die Suchkriterien auf der Mitgliedersuche nach spezifischen Rechtsgebieten zu verbessern. Der Vorstand prüft darüber hinaus ebenfalls, ob eine Anbindung an soziale Netzwerke für die Vereinigung von Vorteil sein könnte.

Die Mitgliederversammlung begann um 16:30 Uhr und wird durch unseren Präsidenten Marc André Gimmy um 18:30 Uhr geschlossen.

Lutz Carlos Moratinos Meissner*

Santiago de Compostela, den 06.06.2015



*Generalsekretär/ Secretario General DSJV-AHAJ
Rechtsanwalt & Abogado, Simon und Partner, Hamburg
l.moratinos@simon-law.de

**XXXI Congreso de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas,
Santiago de Compostela, 3 – 7 de junio de 2015**

**XXXI. Kongress der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung,
Santiago de Compostela, 3. – 7. juni 2015**

Tomás Brantuas*

Del 3 al 7 de junio de 2015 tuvo lugar el XXXI Congreso de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas. La localización elegida en esta ocasión para celebrar el congreso anual fue Santiago de Compostela, la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia y ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su extraordinaria riqueza monumental y por ser desde la Edad Media destino de la mayor ruta de peregrinación de la Cristiandad conocida como “el Camino de Santiago”.

La llegada a la capital gallega -casi tan célebre por ser una de las tres Ciudades Santas de la Cristiandad como por su prácticamente omnipresente lluvia -dejó sorprendido a más de un asistente, ya que lucía un sol radiante acompañado de temperaturas veraniegas, tiempo que para alegría de todos estuvo presente durante todo el congreso.

Tras la habitual inscripción y entrega de la documentación de trabajo en el hotel del congreso - un magnífico Hotel Monumento ubicado en un antiguo convento de San Francisco del siglo XII y convenientemente situado en el casco viejo de la ciudad- los participantes asistieron a la misa con botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela. La singular belleza de la catedral, que reúne diferentes estilos arquitectónicos desde el

Vom 3. bis 7. Juni 2015 fand der XXXI. Kongress der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung in Santiago de Compostela statt. Die Hauptstadt der Autonomen Region Galizien ist als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt, sowohl aufgrund ihres außerordentlichen kulturellen Reichtums, als auch, weil sie seit dem Mittelalter das Ziel des Jakobswegs, der wichtigsten Pilgerroute des Christentums, ist.

Die Ankunft in der galizischen Hauptstadt, deren Berühmtheit fast so sehr auf dem berüchtigten Dauerregen fußt wie auf ihrer Stellung als eine der drei heiligen Stätten des Christentums, überraschte die Teilnehmer mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen, die zur Freude aller den ganzen Kongress über bestehen blieben.

Nach der üblichen Einschreibung und Ausgabe der Arbeitsunterlagen im Kongresshotel, das in einem ehemaligen Franziskanerkloster aus dem XII. Jahrhundert in der Altstadt untergebracht ist, nahmen die Beteiligten an der Pilgemesse in der Kathedrale von Santiago de Compostela teil. Die überwältigende Schönheit der Kathedrale, die verschiedene architektonische Stile von der Romanik über Gotik und Barock bis zum

románico al gótico, barroco o neoclásico, y el funcionamiento del popular botafumeiro, un enorme incensario símbolo de la catedral, causaron una gran impresión entre los asistentes. Sin duda, el ver oscilar a gran velocidad y altura al botafumeiro por la nave central de la catedral junto con la bendición de la Asociación en la misa del peregrino fue algo memorable.

La inauguración solemne del congreso al día siguiente tuvo lugar en el Palacio de Fonseca, edificio que data del siglo XVI y que fue la primera sede de la Universidad de Santiago de Compostela. El recibimiento de los participantes corrió a cargo del Presidente de nuestra Asociación Don Marc André Gimnny, acompañado por representación del gobierno autonómico, así como por el Decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, Don Evaristo Nogueira.

De la ponencia inaugural se encargó el Prof. Dr. Santiago Álvarez González (Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Santiago de Compostela) quien analizó de manera profusa y entretenida la problemática actual en la aplicación del Derecho extranjero tanto en España como en el resto de Europa. Acto seguido los asistentes disfrutaron de una copa de bienvenida en el claustro del Palacio de Fonseca, que sirvió para recobrar fuerzas para realizar una divertida visita guiada a la ciudad.

Por la tarde, se abrió el primer grupo de trabajo con las ponencias de Don Axel Braun (Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht de Colonia) y Don Román Gil Albuquerque (Abogado de Madrid), quienes expusieron magníficamente las bases legales del derecho de huelga en Alemania y España, respectivamente. De especial interés para el auditorio resultaron los profundos análisis efectuados por los ponentes respecto de diferentes huelgas reales acontecidas en ambos países.

El primer día de trabajo concluyó con las intervenciones de Dr. Alexandre Steinmetz (Rechtsanwalt de Francfort del Meno) y Doña Rocío García Alcázar (Abogada de Colonia), los cuales desgranaron minuciosamente las diferencias fundamentales del Derecho Sucesorio español y alemán, poniéndolas en relación directa con el importante Reglamento europeo de Sucesiones, que entra en vigor este próximo mes de agosto. A pesar de la amplitud de la materia a tratar, nada se dejaron en el tintero los ponentes, los cuales cumplieron perfectamente con las expectativas del numeroso auditorio en una materia tan relevante para la práctica del derecho transfronterizo.

Klassizismus vereint, sowie der berühmte Botafumeiro – ein riesiges Rauchfass, das zugleich Symbol der Kathedrale ist – hinterließen einen tiefen Eindruck bei den Teilnehmern. Das schnelle und hohe Pendeln des Botafumeiro im Schiff der Kathedrale sowie der in der Pilgermesse gespendete Segen der Vereinigung werden in Erinnerung bleiben.

Die feierliche Eröffnung des Kongresses am Tag darauf fand im Palacio de Fonseca statt, einem Gebäude des XVI. Jahrhunderts, das der erste Sitz der Universität von Santiago de Compostela war. Der Präsident unserer Vereinigung, Herr Marc André Gimnny begrüßte die Teilnehmer. Hierzu waren auch ein Vertreter der autonomen Regierung sowie der Präsident der Anwaltskammer von Santiago de Compostela, Herr Evaristo Nogueira, erschienen.

Der Eröffnungsvortrag hielt Herr Prof. Dr. Santiago Álvarez González (Lehrstuhlinhaber für Internationales Privatrecht der Universität von Santiago de Compostela), der die aktuelle Problematik der Anwendung ausländischen Rechts in Spanien sowie im restlichen Europa ausführlich und unterhaltsam auswertete. Daraufhin genossen die Beteiligten einen kräftestärkenden Umtrunk im Kreuzgang des Palacio de Fonseca, dem eine amüsante Stadtführung folgte.

Am Nachmittag wurde die erste Arbeitsgruppe durch die Referate von Herrn Axel Braun (Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Köln) und Herrn Román Gil Albuquerque (Abogado aus Madrid), die jeweils die Rechtsgrundlagen des Streikrechtes in Deutschland und Spanien großartig vorstellten, eröffnet.

Abgeschlossen wurde der erste Arbeitstag durch die Vorträge von Herrn Dr. Alexander Steinmetz (Rechtsanwalt aus Frankfurt am Main) und Frau Rocío García Alcázar (Abogada aus Köln), welche die grundsätzlichen Unterschiede des spanischen und des deutschen Erbrechts unter die Lupe nahmen und diese direkt mit der wichtigen europäischen Verordnung über Erbrecht, die im Monat August in Kraft tritt, in Bezug brachten. Trotz des umfangreichen Sachgebietes ließen die Referenten nichts unerwähnt, sodass die Erwartungen der zahlreichen Zuhörer auf einem für die Praxis des grenzüberschreitenden Rechts so wichtigen Sachgebietes voll erfüllt wurden.

El día concluyó con una cena informal en el Restaurante Carretas, donde los comensales disfrutaron de una rica cena gallega.

El viernes por la mañana dio comienzo el segundo grupo de trabajo sobre la protección de marcas no convencionales. Los ponentes Don Arne Führer (Juez del Landgericht de Hamburgo) y el Prof. Dr. Ángel García Vidal (Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela) expusieron de manera magistral los elementos esenciales de la normativa alemana y española, respectivamente, así como europea para la protección de dichas marcas no convencionales. Especialmente útiles y entretenidos resultaron los múltiples ejemplos reales analizados por estos expertos en la materia a fin de clarificar y delimitar el carácter no convencional de las diversas marcas olfativas, gustativas, tridimensionales etc., que en la práctica jurídica nacional y europea no está exenta de problemas.

La tarde del viernes estuvo dedicada enteramente a la parte lúdica del congreso. La excursión de este año se realizó al municipio de Cambados, una pequeña villa marinera ubicada en la bella Ría de Arousa. Tras realizar una didáctica visita guiada por Cambados, los congresistas pudieron disfrutar de un estupendo paseo en catamarán por las Rías Baixas amenizado por una rica degustación de mejillones, vino albariño y un sol espléndido.

La tarde se completó con una visita guiada por las instalaciones de la Bodega Gran Bazán, conocida por sus espléndidos vinos albariño. Y fue en el espléndido salón de banquete de la Bodega donde finalizó la jornada para los asistentes que pudieron degustar la sabrosa gastronomía gallega acompañada por sus excelentes vinos.

El último día del congreso se inició con el grupo de trabajo dedicado al tema de la problemática urbanística en las transacciones inmobiliarias en España. Los ponentes fueron el Prof. Dr. Juan José Raposo Arceo (Profesor de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña) y el abogado Don LLuis Albareda Costa, quienes incidieron de forma detallada en las peculiaridades del derecho urbanístico y registral español en comparación con el derecho alemán, poniendo especial énfasis en las dificultades de aplicación e interpretación que se presentan en práctica inmobiliaria.

A continuación, se procedió por parte de los ponentes Don Víctor Fabregat Rubiol (Abogado) y Don Jan Löber (Rechtsanwalt) a resumir a los asistentes la numerosa actualidad jurídica del

Der Tag wurde durch ein informelles galizisches Abendessen im Restaurant Carretas beendet.

Am Freitagmorgen begann die zweite Arbeitsgruppe über den Schutz unkonventioneller Marken. Die Referenten Herrn Arne Führer (Richter am Landgericht Hamburg) und Prof. Dr. Ángel García Vidal (Professor für Handelsrecht an der Universität von Santiago de Compostela) trugen jeweils die deutschen, spanischen und auch europäischen Grundlagen der Gesetzesregelungen zum Schutz dieser nicht traditionellen Marken meisterhaft vor. Besonders nützlich und unterhaltsam waren die unzähligen echten Beispiele, die die Experten analysierten, um den unkonventionellen Charakter der diversen Geruchs- oder Geschmackmarken sowie dreidimensionaler Marken aufzuzeigen, der in der nationalen sowie europäischen Rechtspraxis öfters mit Problemen verbunden ist.

Der Freitagnachmittag war ganz der angenehmen Seite des Kongresses gewidmet. Der diesjährige Ausflug ging nach Cambados, ein an der Ría de Arousa gelegenes Fischerdorf. Nach einer lehrreichen Stadtführung durch Cambados konnten die Teilnehmer eine wunderbare Rundfahrt im Katamaran durch die Rías Baixas mit einer Miesmuschel- und Albariño-Probe genießen.

Den Nachmittag rundete eine Besichtigung der Anlagen der Bodega Gran Bazán ab, die wegen Ihrer Albariñoweine berühmt ist. Im herrlichen Bankettsaal der Bodega, wo die Kongressteilnehmer schmackhafte Speisen und Weine der galizischen Küche kosten konnten, endete schließlich der Tag.

Der letzte Kongresstag begann mit der Arbeitsgruppe zum Thema „Städtebauliche Probleme bei Immobilientransaktionen in Spanien“. Die Referenten waren Herr Prof. Dr. Juan José Raposo Arceo (Professor für Zivilrecht an der Universität von A Coruña) und Herr LLuis Albareda Costa (Abogado), die die Besonderheiten des spanischen Immobilien- und Registerrechts im Vergleich zum deutschen Recht im Detail ausführten und zudem speziellen Nachdruck auf die konkreten Schwierigkeiten in der Immobilien-Praxis legten.

Im Anschluss daran folgte ein aktueller Überblick über die zahlreichen Neuigkeiten im spanischen und deutschen Recht durch die Referenten Herrn Víctor Fabregat Rubiol (Abogado aus Barcelona) und

derecho español y alemán, respectivamente, que en el caso español resultó ser particularmente abundante, dado la gran actividad legislativa propia de un año electoral.

Por la tarde se celebró la habitual Asamblea General de socios, en la que cabe destacar el nombramiento como socio de honor de nuestra Asociación de Don Dr. Burkhardt Löber, en reconocimiento de sus indudables méritos en el tráfico jurídico hispano-alemán. Asimismo, se decidió que el congreso anual del año 2017 se albergará en la isla de Lanzarote.

El punto final a este extraordinario congreso lo puso la cena de gala con baile en el gran salón del hotel San Francisco. Fue una cena que se recordará por los excelentes platos y el divertido baile acompañado de barra libre, pero en especial por las emotivas palabras pronunciadas por el recién nombrado socio de honor Don Dr. Burkhardt Löber y la intensa ovación dedicada al mismo por todos los asistentes.

Finalmente, resulta necesario agradecer nuevamente a todos los organizadores, y en especial a Doña Bárbara Román, su gran esfuerzo y dedicación en la planificación de este logradísimo congreso.

Herrn Jan Löber (Rechtsanwalt aus Frankfurt am Main), der besonders hinsichtlich des spanischen Rechts – vermutlich aufgrund der anstehenden Wahlen – sehr umfangreich ausfiel.

Am Nachmittag wurde die Mitgliederversammlung abgehalten, in der Herr Dr. Burkhardt Löber als Anerkennung seiner Verdienste für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr zum Ehrenmitglied unserer Vereinigung ernannt wurde.

Den Schlusspunkt dieses hervorragenden Kongresses bildete das Galadiner im großen Festsaal des Hotels San Francisco. Das Galadiner wird mit Sicherheit Dank der großartigen Speisen, dem spaßigen Tanz und den freien Longdrinks, vor allem aber wegen der berührenden Worte unseres neu ernannten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Burkhardt Löber sowie der Ovation aller Kongressteilnehmer, in Erinnerung bleiben.

Schließlich ist an dieser Stelle nochmals den Organisatoren, insbesondere Frau Bárbara Román, für Ihren großen Einsatz bei der Planung dieses sehr gelungenen Kongresses herzlich zu danken.



* Abogado,
Vigo (Pontevedra)
brantuas@bcclex.com

Vorschau / Avance

Minikongress am 14.11.2015 in Berlin mit dem Thema „Start up“ im Instituto Cervantes Mini-Congreso el 14.11.2015 en Berlín el tema “Start up” en el Instituto Cervantes

Berlin ist unbestritten die Gründer-Hauptstadt Nr. 1 in Deutschland. In Spanien gilt dies für Barcelona. In der Szene ziehen spanische Gründer nach Deutschland und vice versa deutsche Gründer nach Spanien. Während sich die Szene in Berlin insbesondere auf die jungen Stadtteile Prenzlauer Berg, Friedrichshain Kreuzberg, Neukölln und Adlershof mit 60.000 Beschäftigten in der Digitalwirtschaft verteilt, hat Barcelona den „22@Digital District“ als Platz für neue Technologie und Innovation geschaffen. Insgesamt rund vier Millionen Quadratmeter sollen demnächst 90.000 Arbeitsplätze Raum bieten.

Sin duda, Berlín es la ciudad nº 1 de Alemania en la constitución de compañías emergentes. En España, lo mismo sucede con Barcelona. En este escenario, emprendedores españoles se desplazan a Alemania y, viceversa. Mientras que en Berlín este movimiento se concentra en distritos con población más joven como Prenzlauer Berg, Friedrichshain Kreuzberg, Neukölln y Adlershof con 60.000 empleados en el sector digital, Barcelona ha creado el “22@Digital District” como lugar para nuevas Tecnologías e Innovación. Un total de cuatro millones de metros cuadrados ofrecerán próximamente espacio para 90.000 puestos de

Dass die Start-Up-Szene ein weites Feld auch für Juristen sein kann und ist, liegt auf der Hand. Anlässlich des Minikongresses am 14.11.2015 in Berlin wollen wir uns dem Thema ausführlich widmen. Unter dem Motto „Von der Gründung bis zum vielleicht lukrativen Exit, dem Traum eines jeden Gründers, oder möglichen Dabeibleibens“ werden wir die einhergehenden rechtlichen Fragen und auch wirtschaftlichen Fragen beleuchten. Die Einladung mit den Details wird demnächst wie gewohnt versandt.

trabajo.

Que el escenario de las compañías emergentes también puede constituir un amplio campo para Juristas es algo evidente. Con motivo del Mini-Congreso el 14.11.2015 en Berlín queremos concentrarnos en este tema. Bajo el lema “Desde la creación hasta un potencial éxito, sueño de cualquier emprendedor, o su posible continuación en el negocio”, nos dedicaremos a tratar todas las cuestiones legales y económicas relacionadas con este tema. Como es habitual, la invitación detallada se enviará próximamente.

Neue Mitglieder / Nuevos socios 16.03. – 15.07.2015

**Wir freuen uns, folgende neuen Mitglieder begrüßen zu dürfen:
Nos alegramos de dar la bienvenida a los siguientes nuevos asociados:**

Gil Albuquerque, Román
Abogado

Sagardoy Abogados
Serrano, 87, 7º B
E – 28006 Madrid
Tel. 607 802681
rga@sagardoy.com; www.sagardoy.com

Hessler, Ingmar
LL.M., M.B.A., Abogado & Rechtsanwalt
Traductor e Intérprete Jurado

Hessler & del Cuerpo
Abogados – Lawyers - Rechtsanwälte
Gran Vía Escultor Salzillo, 4, 8^a Planta
E – 30004 Murcia
Tel. 96 8178158 Fax 96 8975141
ihessler@gmail.com; www.hesslerdelcuerpo.com

Imbeck, Martin Dr.
Rechtsanwalt

Imbeck Rechtsanwaltsges. mbH
Hackerbrücke 6
D – 80335 München
Tel. 089/4111925 Fax 089/4111925-11
imbeck@imbeck-law.de; www.imbeck-law.de

Kleinmüller, Katrin
Rechtsanwältin

Peters Götza Welge Partnerschaftsges.
Ehlentruper Weg 61
D – 33604 Bielefeld
Tel. 02927 621321276
Katrin_kleinmueller@yahoo.de

Lindenau, Tobias
Volljurist

Stendaler Str. 12
D – 21339 Lüneburg
Tel. 0176 38216448
Tobias.lindenau@hotmail.com

Miragall Martínez, Mercedes
Abogada

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Paseo de Gracia, 111
E – 08008 Barcelona
Tel. 93 3129529 Fax 93 3125363
mercedes.miragall@cuatrecasas.com;
www.cuatrecasas.com

Pérez García, Astrid
Abogada

Hildegard-Knef-Str. 7
D – 85053 Ingolstadt
Tel. 0157 51931425
Pg.astrid@gmail.com

S. Bachmann, Silvia
Rechtsanwältin

Stein & Partner
Carrer Llorenç Vicens, 12 B
E – 07002 Palma de Mallorca
ssantaul@gmail.com

Sánchez, Rosa Dr.
Rechtsanwältin

BHM Penlaw Rechtsanwälte
Holstenwall 10
D – 20355 Hamburg
Tel. 040/3410679814 Fax 040/3410679820
sanchez@bhm-penlaw.com

Sandoval González, Edith Inés
Rechtsanwältin

Anwaltskanzlei Jakob
Ostendestr. 159/ II
D – 90482 Nürnberg
Tel. 0911/95058707 Fax 0911/95058708
Jakob@anwaltskanzlei-jakob.com;
www.anwaltskanzlei-jakob.com

Schiener, Ulrich
Rechtsanwalt

Bühler Str. 3
D – 69126 Heidelberg
Tel. 0179/6815482
Ulrich.schiener@gmx.net

Schlegel, Maximilian
Student

Strandstr. 22
D – 24235 Stein
Maximilian.schlegel@stu.uni-kiel.de

Schmidt, Petra
Economista

Bové Montero & Asociados S.L.
Sindicat, 67, 1 – 3
E – 07002 Palma de Mallorca
Tel. 971 775124 Fax 971 726348
p.schmidt@bovemontero.com; www.bovemontero.com

Steltzer, Daniel
LL.M., Rechtsanwalt

Uhlandstr. 161
D – 10719 Berlin
steltzer@rechtsberatung-berlin.info

Wolf, Janine Dr.
Rechtsreferendarin

Allerstr. 10
D – 12049 Berlin
Frida.lupa@gmail.com

Referendarsstationen / Praktikantenplätze Pasantías / Prácticas

AD & M Abogados y Consultores

Unsere international ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei mit dem Schwerpunkt auf deutsch-spanischen Rechtsbeziehungen befindet sich im Zentrum von Barcelona. Unsere Tätigkeitschwerpunkte sind Gesellschafts-, Handels-, Erb-, Familien- und allgemeines Zivilrecht. Wir bieten deutschen Rechtsreferendaren oder Jurastudenten mit Spanischkenntnissen die Möglichkeit, Ihre Wahlstation oder ein Praktikum in unserer Kanzlei zu absolvieren.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen postalisch an ADM Abogados y Consultores, Calle Balmes 163, Pral., 2a, 08008 Barcelona, Spanien z.H. von RA Robert Engels oder per e-mail an info@admabogados.net.

Advocatia Abogados

ofrece a pasantes alemanes la posibilidad de realizar prácticas en el despacho, oficina de Madrid, por un período no inferior a tres meses. Los solicitantes deberán tener conocimientos de la lengua española. Durante este período el pasante podrá colaborar con los abogados de Mercantil, Civil, Laboral y Fiscal del despacho. Los interesados se podrán dirigir a Advocatia Abogados, Persona de contacto: Mercedes Aguado, Argumosa, 13, 1º B , 28012 Madrid, Tel.: +34914321212, Fax: +34915773484, e-mail: maguado@advocatia.net

AR Abogados Asociados

Despacho especializado en derecho internacional privado, comunitario, mercantil, inmobiliario, procesal y familia.

Ofrecemos a pasantes alemanes la posibilidad de realizar prácticas en Barcelona, y conocer las relaciones comerciales y jurídicas hispano-alemanas. Requisito imprescindible el conocimiento del idioma español, hablado y escrito.

Pueden enviar sus CV a: AR ABOGADOS ASOCIADOS, A/a Dep. Personal, Provença, 278, 1r bis, 1^a, E-08008 Barcelona, info@ar-advocats.com

Castellana Legal Abogados

Wahlstation für Rechtsreferendare/Praktikanten

Unsere Kanzlei bietet Referendaren/Praktikanten die Möglichkeit, in Madrid die Wahlstation bzw. ein Praktikum zu absolvieren. Kenntnisse der spanischen Sprache sind erforderlich. Bei Interesse Bewerbungen bitte per e-mail z. Hd. von Marcos Andreu Bleckmann an mableckmann@c-legal.com unter Kennwort "Praktikum" zusenden.

Dikeos Estudio Jurídico

Wir sind eine international ausgerichtete Madrider Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeitschwerpunkten im Arbeits-, Gesellschafts-, Handels- und Zivilrecht, die sowohl forensisch als auch beratend tätig ist.

Unsere Klienten sind hauptsächlich Wirtschaftsunternehmen, auch aus dem deutschsprachigen Ausland.

Wir bieten Rechtsreferendaren / -innen die Möglichkeit, Ihre Wahlstation in unserem Madrider Büro abzuleisten.

Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse sowie Interesse für internationale, insb. deutsch-spanische Rechtsbeziehungen setzen wir voraus. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Paseo de la Habana, 5. Tel: 91 5903370, Fax 91 5638560;
Ansprechpartner: Christian Alexander Paschkes (apaschkes@dikeos.com).

Dr. Frühbeck Abogados

Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen mit guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges Praktikum in unseren Kanzleien in Barcelona, Palma de Mallorca, Marbella und Las Palmas G.C. zu absolvieren. Es wird ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten bevorzugt. Wir bearbeiten hauptsächlich Fälle im Bereich des Handels-, Unternehmens- und Arbeitsrechts.

Ofrecemos a pasantes con buenos conocimientos de alemán y español la posibilidad de realizar prácticas en nuestras oficinas de Barcelona, Palma de Mallorca, Marbella y Las Palmas G.C. Preferente un período no inferior a tres meses. Principalmente trabajamos los campos del derecho mercantil, societario y laboral.

Barcelona: Tel.: (00 34) 93 254 10 70; Email: barcelona@fruhbeck.com
Canarias: Tel.: (00 34) 928 432 676; Email: canarias@fruhbeck.com

Mallorca: Tel.: (00 34) 971 719 228; Email: mallorca@fruhbeck.com
Marbella: Tel.: (00 34) 95 276 52 25; Email: marbella@fruhbeck.com

Gerboth & Partner

Wir bieten Referendaren oder Studenten mit guten Spanischkenntnissen die Möglichkeit ihre Wahl- oder sonstige Ausbildungsstation während eines Zeitraumes, der drei Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in Palma de Mallorca oder Ibiza zu absolvieren.

Des weiteren bieten wir spanischen Praktikanten mit guten Deutschkenntnissen die Möglichkeit zur Durchführung eines Rechtspraktikums in unseren Büros, ebenfalls für einen Zeitraum, der drei Monate nicht unterschreiten sollte.

Ansprechpartner: Christian Gerboth, Palma de Mallorca - Tel.: 0034-971722494; E-mail: info@gerboth-partner.com

Fabregat, Perulles, Sales, Abogados, Rechtsanwälte

Wir bieten deutschen Referendaren mit guten Spanischkenntnissen die Möglichkeit, ihre Wahlpflichtausbildung oder sonstige Ausbildungsstationen in unseren Kanzleien in Barcelona und Pollença (Mallorca) zu absolvieren.

Plaza Bonanova, 4, 1^{er} E- 08022 Barcelona, Tel. 0034/ 93 205 42 31, Fax. 0034/ 93 418 955, Ferrán Sors, 4, 3^{er} E – 43850 Cambrils, Tel. 0034/ 977 79 41 26 Fax 0034/ 977 36 23 48, Sor Flor Ricomana, 2, 1^{er} C, E – 07460 Pollença (Mallorca), Tel. 0034/ 971 53 17 33, 0034/ 971 53 10 84, e-mail: fps@fabregat-perulles-sales.com, Internet: www.fabregat-perulles-sales.com

Göhmann

Als deutsch-spanische Kanzlei mit umfangreichen Tätigkeitsbereichen in beiden Rechtskreisen bieten wir interessierten deutschen Referendaren und spanischen Praktikanten die Möglichkeit, in einem unserer Büros in Bremen oder Barcelona eine oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren. Sehr gute Sprachkenntnisse sind Voraussetzung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Bewerbungen in Deutschland: Dr. Arne Koch, Wachtstr. 17-24, D-28195 Bremen, Tel.: 0421/33953-0, e-mail: bremen@goehmann.de

Bewerbungen in Spanien: Marcel Gentner, Provenza, 278, 1^{er} Bis 1^{er} 2^{er}, E-08008 Barcelona, Tel: 93 2155338, e-mail: barcelona@goehmann.es

Für Informationen können Sie unsere Internetseite www.goehmann.de besuchen.

Gómez Acebo & Pombo

Referendaren mit Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit ihre Wahlstation während eines Zeitraumes von drei Monaten in unserer Kanzlei in Madrid zu absolvieren.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an: Frau Christina Sánchez Weickgenannt, E-mail: cсанchezw@gomezacebo-pombo.com Tel.: 0034 91 582 9218

Anwaltskanzlei Dr. Sabine Hellwege

bietet Rechtsreferendaren / Rechtsreferendarinnen mit Spanischkenntnissen die Möglichkeit die Wahlfachstation oder sonstige Ausbildungsstationen während eines Zeitraumes, der drei Monate nicht unterschreiten sollte, in der Kanzlei in Palma de Mallorca zu absolvieren. Ansprechpartnerin: Dr. Sabine Hellwege, Rechtsanwältin u. Abogada, Niedersachsenstr. 11, D-49074 Osnabrück , Tel.: + 49 541 20 22 555, Fax: + 49 541 20 22 559, Mobil:+ 49 171 8385328, E-mail: Shellwege@t-online.de , Internet: www.hellwege.de oder Avda. Jaime III Nr. 17, 2, 27, E-07012 Palma de Mallorca, Tel.: + 34 971 9054 12, Fax: + 34 971 9054 13

Iurisconsultants Abogados-Rechtsanwälte

Deutsch-spanische Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Manacor/Mallorca und zivilrechtlicher Ausrichtung sucht Jurastudenten und Rechtsreferendare mit guten Spanischkenntnissen, denen wir im Rahmen eines Praktikums/Ausbildungsstation eine interessante Tätigkeit anbieten.

Ansprechpartner: Rechtsanwalt-Abogado Mirko Jurisch, C/Amargura, 14, 1^{er}-1^{er}, E-07500 Manacor, Tel. 971 845805, Fax 971 844872, email: jurisch@iurisconsultants.com www.iurisconsultants.com

Jakstadt – Abogados – Berlin

Wir bieten in unserer Kanzlei in Berlin eine vollständige Rechts- und Steuerberatung für Unternehmen aus Spanien und Südamerika in Deutschland als auch für deutsche Mandanten mit Schwerpunkt in Spanien an.

Referendare mit guten spanischen Kenntnissen sowie pasantes mit guten Deutschkenntnissen bieten wir die Möglichkeit der Ausbildung und Mitarbeit in unserer Kanzlei in Berlin an.

Kanzlei Berlin, Telefon: 0 30/24 62 92 0, Telefax: 0 30/24 62 92 20, e-mail: info@jakstadt.de, Internet: www.jakstadt.de, Ansprechpartner: Abogada Belén Martínez Molina, Rechtsanwalt Thomas Jakstadt.

Loeber & Lozano Abogados

Deutsch-Spanische Rechtsanwaltskanzlei bietet deutschen und spanischen Referendaren und Praktikanten mit guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren. Tätigkeitschwerpunkte sind Erbschafts-, Immobilien-, Gesellschafts- und Steuerrecht. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: Loeber & Lozano Abogados, z. H. Fernando Lozano, Conde de Salvatierra, 21, E-46004 Valencia, Tel. +34 963 28 77 93, Fax +34 963 28 77 94, E-Mail: info@loeberlozano.com"

Kanzlei Löber & Steinmetz

In unserer Kanzlei in Frankfurt bieten wir Referendaren und Praktikanten mit guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren. Tätigkeitschwerpunkte sind IPR, Erbschafts-, Immobilien- und Gesellschaftsrecht. Wir legen Wert auf selbständiges Arbeiten und hohe Motivation und können Ihnen im Gegenzug eine abwechslungs- und lehrreiche Tätigkeit anbieten.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: Kanzlei Löber & Steinmetz, z.Hd. Herrn Dr. Burkhardt Löber, Kaulbachstr. 1, D-60594 Frankfurt, Tel. 069/96 22 11 23,20, Fax 069/96 22 11 11, e-mail: info@l-s-w.de

Lohmann & Dr. Ahlers, Rechtsanwälte in Partnerschaft, Notar, Fachanwalt für Verkehrsrecht

Wir bieten deutschen und spanischen Referendaren oder Praktikanten die Möglichkeit, im Rahmen einer Stage erweiterte Kenntnisse des Deutschen Rechts und der deutschen Sprache zu erwerben. Der Zeitraum sollte dabei drei Monate nicht unterschreiten. Tägliche Anwesenheit ist erwünscht und sinnvoll.

Ofrecen la posibilidad de realizar prácticas o pasantías a alemanes y españoles que deseen ampliar sus conocimientos en Derecho Alemán y la lengua alemana. El período de éstas no deberá ser superior a los tres meses. Se recomienda la asistencia diaria a fin de obtener buenos resultados.

Kontakt / Contacto: RA Wolfgang Lohmann, Pelzerstrasse 4, D - 28195 Bremen, Tel. 0421/18571 Fax 0421/12648, RA-Lohmann-Ahlers@gmx.de

Losemann & Schönfeld Partnerschaft von Rechtsanwälten

Wir sind eine vorwiegend im Wirtschaftsrecht tätige Kanzlei mit Standorten in Berlin und Barcelona. Referendaren und Praktikanten bieten wir an, ihre Ausbildung in unserem Büro Berlin-Mitte zu absolvieren. Sie bearbeiten weitgehend selbstständig eine Vielzahl von interessanten Fällen aus dem nationalen und internationalen Wirtschaftsrecht. Wir gewährleisten eine umfassende Betreuung durch die jeweiligen Partner und ein angenehmes Arbeitsumfeld. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.losemann-ludwig.com oder telefonisch: +49-30-39809583.

Wenn Sie hoch motiviert sind und über gute Rechts- und Sprachkenntnisse verfügen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung zu Händen von Rechtsanwalt Jan Losemann, Friedrichstr. 94, 10117 Berlin, oder per Email an losemann@losemann-schoenfeld.com

Bufete Mañá-Krier, Abogados Asociados

Unsere wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei mit einem Schwerpunkt im deutsch-spanischen Rechtsverkehr bietet Rechtsreferendaren mit Spanischkenntnissen die Möglichkeit, Ihre Wahlstation oder sonstige Auslandsstationen in unserer Kanzlei zu absolvieren. Unsere Tätigkeitschwerpunkte sind Gesellschafts- und Handelsrecht, Steuerrecht sowie Immobilien-, Erb- und allgemeines Zivilrecht. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an Frau Jessica Wehmeier, Rechtsanwältin u. Abogada, bmk@bmk.es, Tel.:0034 93 487 8030, Balmes 76, Pral. 1^a, 08007 Barcelona.

MMB - Martínez, Marco & Beuthner, Rechtsanwälte & Abogados

Als Rechtsanwaltssozietät mit Schwerpunkt im deutsch-spanischen Rechtsverkehr bieten wir deutschen Referendaren die Möglichkeit in unseren Büros in Murcia-Stadt und Puerto de Mazarrón ihre Wahlstage zu absolvieren.

Die Mindestdauer sollte vier Monate nicht unterschreiten. Sehr gute Sprachkenntnisse und eine hohe Motivation setzen wir voraus. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

MMB – Rechtsanwälte & Abogados, Herrn RA u. Abogado Dennis Beuthner, Avda. Tierno Galván 30, 2D, E-30860 Puerto de Mazarrón, Tel.: +34 / 968 / 33 20 68, Fax: +34 / 968 / 33 20 69, e-mail: beuthner@mmb.es, Internet: www.mmb.es

Monereo Meyer Marinel-lo Abogados

Referendaren oder Studenten mit guten Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit ihre Wahlpflichtfachausbildung oder sonstige Ausbildungsstationen während eines Zeitraumes, der 3 Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca oder Berlin zu absolvieren.

Spanischen Praktikanten mit guten Deutschkenntnissen bieten wir die Möglichkeit der Absolvierung eines Rechtspraktikums für einen Zeitraum, der 3 Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca oder Berlin.

Madrid - Tel.: (0034) 91 319 96 86; E-mail: cgarci@meee.es

Ansprechpartner: César García de Quevedo

Barcelona - Tel.: (0034) 93 487 58 94; E-mail: emarinel-lo@meee.es

Ansprechpartner: Enrique Marinel-lo Jordan

Palma de Mallorca - Tel.: (0034) 971 71 70 34; Email: canglada@meee.es

Ansprechpartner: Carlos Anglada Bartholmai

Berlin – Tel. +34 (0)30 2063360, Email: cdill@meee.es,

Ansprechpartner: Dr. Cato Dill

Pense Rechtsanwälte

Wir bieten spanischen und deutschen Juristen mit guten Kenntnissen beider Sprachen die Möglichkeit, ein Praktikum oder einen Teil des Referendariats in unserer Kanzlei zu absolvieren.

Das Wirtschaftsrecht, Zivil- und Immobilienrecht sowie Prozess- und Schiedssachen gehören zu den Kerngebieten unserer Tätigkeit. Wir sind auch für unsere internationale Rechtspraxis bekannt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten www.pense.de. Bewerbungen richten Sie bitte an: Pense Rechtsanwälte, Herrn RA Dr. Till Pense, Wolfgangstrasse 85, D - 60322 Frankfurt am Main, Tel + 49 (0) 69 - 55 05 65 Telefax + 49 (0) 69 - 59 69 861 E-mail: till.pense@pense.de.

Dr. Reichmann Rechtsanwälte /Abogados

Wir sind eine ausschließlich auf deutsch-spanisches Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei mit Büros in Frankfurt am Main und Palma de Mallorca:

Wir bieten Studenten und Referendaren mit guten Spanischkenntnissen an, ein Praktikum bzw. ihre Wahlstation in einem unserer Büros zu absolvieren.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

für Frankfurt: Dr. Reichmann Rechtsanwälte Steinlestr 7 60596 Frankfurt am Main,

z. Hd. Dr Armin Reichmann, reichmann@dr-reichmann.com

für Palma: Dr. Reichmann Abogados Calle San Miguel 36, 4a 7002 Palma de Mallorca

z. Hd. RAin Sandra Aertken, aertken@dr-reichmann.com

Schiller Abogados

Einer der Tätigkeitschwerpunkte von Schiller Abogados ist die Beratung im deutsch-spanischen Rechtsverkehr. Wir bieten interessierten und motivierten Rechtsreferendaren und Praktikanten die Möglichkeit, eine Ausbildungsstage oder ein mehrmonatiges Praktikum in unserem Büro in Barcelona zu absolvieren. Sehr gute spanische Sprachkenntnisse sind unabdinglich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Jordi Planchart Remmert, Rambla de Catalunya, 86-3^o, E-08008 Barcelona, e-mail: barcelona@schillerabogados.es

Simon & Partner Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

bietet deutschen und spanischen Referendare/innen und Praktikanten/innen die Möglichkeit einer Stage. Der Mindestzeitraum sollte 3 Monate nicht unterschreiten. Gute Deutsch- und Spanischkenntnisse sind Voraussetzung.

Schriftliche Bewerbungen in üblicher Form sind an Herrn RA und Abogado Lutz Carlos Moratinos Meissner zu richten.

Kajen 12, D - 20459 Hamburg, Telefon: 040/323221-0 Telefax: 040/32322121, www.simon-law.de

Suhren Peltzer Meinecke, Rechtsanwälte und Notare

Wir bieten interessierten spanischen Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit, ein Rechtspraktikum in unserer Kanzlei zu absolvieren. Wir sind unter anderem auch im deutsch-spanischen Rechts- und Wirtschaftsverkehr tätig. Der Zeitraum sollte drei Monate nicht unterschreiten. Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Ansprechpartner: RA Dr. Horst Suhren, Rathenaustr. 2, D – 30159 Hannover, Tel. 0049 511 8071820 Fax 0049 511 80718222, e-mail: ra@kanzlei-psm.de, Internet: www.kanzlei-psm.de

VOELKER Barcelona

Die Kanzlei VOELKER mit Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Griechenland sucht für den Standort Barcelona deutsche Referendare, die im Rahmen einer mehrmonatigen Stationsausbildung ihre sehr guten Kenntnisse vorzugsweise in den Bereichen intern. Vertragssrecht, IZPR oder Steuerrecht vertiefen möchten. Die gute Beherrschung der spanischen und englischen Sprache wird bei der/dem Bewerber/in vorausgesetzt.

Als prämierte internationale Wirtschaftskanzlei bieten wir in unserem spanischen Team von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Betriebswirten unseren Referendaren eine anspruchsvolle Mitarbeit an grenzüberschreitenden Mandaten und wissenschaftlichen Projekten.

Schriftliche Bewerbungen bitte per e-mail an: Dr. Jochen Beckmann, VOELKER, Diagonal 419, E-08008 Barcelona, barcelona@voelkergruppe.com

Von Berg & Partner

Wir sind eine international ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkt im Erbschafts-, Immobilien-, Handels-, Gesellschafts- und Zivilrecht. Interessierten deutschen Referendaren und Praktikanten mit guten Deutsch-, Englisch- und Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit, ein Praktikum in einer unserer Kanzleien in Spanien zu absolvieren. Hohe Motivation und Interesse für internationale insbesondere deutsch-spanische Rechtsbeziehungen setzen wir voraus. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: Rechtsanwälte von Berg & Partner, Apartado de Correos 560, E-03724

Moraira (Alicante), Spanien, Tel.: 0034 - 96 - 649 04 19 / Fax: 0034 - 96 - 574 34 38, E-Mail: info@abogadosvonberg.com

ZinnBöcker Rechtsanwälte

Wir bieten Rechtsreferendaren mit guten Kenntnissen der spanischen Sprache sowie spanischen Hochschulabsolventen die Möglichkeit, ihre Referendarstation bzw. ein Praktikum in unserer Kanzlei zu absolvieren. Wir sind ausschliesslich auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts tätig. Ein grosser Teil unserer Mandate hat Bezug zu Spanien bzw. Lateinamerika (insbesondere Mexiko). Es erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in erstklassiger Umgebung. Mehr unter www.zinnboecker.com. Bewerbungen senden Sie bitte an: ZinnBöcker Rechtsanwälte, z.Hd. Dr. Christian Böcker (Rechtsanwalt und Abogado), Friedrichsplatz 10, 68165 Mannheim oder per e-mail an office@zinnboecker.com

Pluta Abogados

Unsere deutsche Kanzlei mit Niederlassungen in Spanien bietet Referendar/innen und Praktikanten/innen die Möglichkeit einen Teil Ihres Referendars, oder ein Praktikum in einem unserer Büros in Spanien zu absolvieren.

Der Zeitraum von drei Monaten sollte nicht unterschritten werden.

Die Interessenten sollten über gute Spanischkenntnisse verfügen.

Ansprechpartnerin: Frau Teresa Di Punzio, Pluta Abogados, Avenida Diagonal 611, 9^a, 08028 Barcelona, Tel.: +34 93 444 1876, Fax: +34 93419 6751, Email: Barcelona@pluta.es

Notare Dr. Christoph Neuhaus und Dr. Markus Buschbaum, LL.M., Maître en droit

Wir bieten deutschen Referendaren/innen und spanischen Notaranwärtern/Notaranwärterinnen mit guten Kenntnissen der jeweils fremden Sprache sowie der jeweils anderen Rechtsordnung die Möglichkeit, die Wahlstation oder eine Hospitation in unserem Büro in Köln zu absolvieren. Kenntnisse der englischen und der französischen Sprache sind von Vorteil, werden jedoch nicht vorausgesetzt. Nähere Informationen zu unseren Tätigkeitsfeldern finden Sie unter <http://neuhaus-buschbaum.de/>. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per e-mail an: notar@buschbaum-koeln.de.

INF**informaciones**

Zeitschrift für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr / Revista Jurídica Hispano-Alemana

Zitierweise / Manera de citar: INF

Herausgeber/ Editor:

Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V. / Asociación Hispano-Alemana de Juristas

Geschäftsstelle/ Oficina central:

San Elías, 29 - 35, E – 08006 Barcelona, Tel. +34 93 209 78 82 Fax +34 93 200 04 64

e-mail: info@dsjv-ahaj.org Internet: www.dsjv-ahaj.org

Vorstand/ Junta Directiva:

Marc André Gimmy (Düsseldorf)

Präsident / Presidente

Mónica Weimann Gómez (Madrid)

Vizepräsidentin / Vicepresidenta

Michael Fries (Madrid)

Vizepräsident / Vicepresidente

Lutz Carlos Moratinos Meissner

Generalsekretär / Secretario

(Hamburg)

General

Dr. Cato Dill (Berlin)

Schatzmeister / Tesorero

Víctor Fabregat Rubiol (Barcelona)

Beisitzer / Vocal

Ana Hidalgo Alberca (München)

Beisitzer / Vocal

**Schriftleitung und verantwortlich im Vorstand / Redacción y responsable en la Junta Directiva:**

Michael Fries, c/ Alfonso XII, 30, 5^a planta, E – 28014 Madrid, Tel: + 34 91 3199686, Fax: + 34 91 3085368, E-mail: mfries@meeee.es

Junge Juristen / Jóvenes Juristas:

María Xiol Bardaji, Velázquez, 63, E – 28001 Madrid, Tel. 91 5246725, Fax 91 5247162, maria.xiol@cuatrecasas.com

Javier Alós Doménech, Paseo de Gracia, 111, E – 08008 Barcelona, Tel. 93 2905574, Fax 93 2905533, javier.alos@cuatrecasas.com

Wissenschaftlicher Beirat:

Prof. Dr. Juan Hernández Martí (Valencia)

Prof. Dr. Stefan Leible (Bayreuth)

Layout und Satz / Diseño y maquetación:

Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V. / Asociación Hispano-Alemana de Juristas

Geschäftsstelle/ Oficina central:

San Elias, 29 - 35, E – 08006 Barcelona, Tel. +34 93 209 7882 / Fax +34 93 200 0464

e-mail: info@dsjv-ahaj.org Internet: www.dsjv-ahaj.org

Bezugspreise / Precios:

Verkaufspreis/Venta al público: EURO 20,00 (inkl. 21% IVA)

Abonnement/Abonados: EURO 50,00 (inkl. 21% IVA)

Mitglieder/Socios: im Beitrag enthalten / incluido en la cuota

Redaktionsschlüsse / Cierres de redacción:

15. März / 15 de marzo

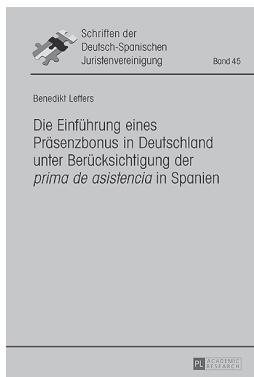
15. Juli / 15 de julio

15. November / 15 de noviembre

D.L.: B-7738-204

ISSN 0937-1141

SCHRIFTEN DER DEUTSCH-SPANISCHEN JURISTENVEREINIGUNG



Herausgegeben von der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung

ISSN: 1433-884X

Die Buchreihe *Schriften der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung* enthält Monographien zur Rechtswissenschaft, insbesondere zu verschiedenen Aspekten der deutschen und spanischen Rechtsprechung. Sie beschäftigt sich interdisziplinär aber auch mit Bereichen der Betriebswirtschaft und Politikwissenschaft. Die Reihe wird von der *Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung* herausgegeben, die zur Vertiefung der Kenntnisse der jeweilig anderen Rechtsordnungen sowie zur Förderung der juristischen Beziehungen der beiden Länder beitragen will.

Band 45

Band 45

Benedikt Leffers

Die Einführung eines Präsenzbonus in Deutschland unter Berücksichtigung der *prima de asistencia* in Spanien

geb. | 978-3-631-65965-6 | 2015. XX, 270 S., 11 Tab | €D 64.95

eBook | 978-3-653-05409-5 | 2015. XX, 270 S., 11 Tab | €D 72.23

Band 44

Christian Schönwandt

Wirkungsschwächen der Schenkung in Spanien und Deutschland

geb. | 978-3-631-66293 | 2015. 364 S. | €D 71.95

eBook | 978-3-653-05527-6 | 2015. 364 S. | €D 79.97

Band 43

Hannah Rau

Strafrechtliche Vergangenheitsbewältigung am Beispiel Spanien

geb. | 978-3-631-64974-9 | 2014. LXII, 414 S. | €D 89.95

eBook | 978-3-653-04117-0 | 2014. LXII, 414 S. | €D 100.08

Band 42

Stefanie Espitalier

Die innerstaatliche Haftung für Unionsrechtsverstöße in Spanien

Eine Untersuchung der Verantwortungs- und Haftungsbeziehungen zwischen dem spanischen Zentralstaat und den Autonomen Gemeinschaften im Falle finanzwirksamer Entscheidungen der Europäischen Union

geb. | 978-3-631-63192-8 | 2012. 239 S. | €D 53.95

eBook | 978-3-653-01703-8 | 2012. 239 S. | €D 59.98

Band 41

Bettina Janka

Corporate Governance in Deutschland und Spanien

geb. | 978-3-631-61843-1 | 2011. 297 S. | €D 60.95

Band 40

Kristina Orthmann

Kapitalmarktinformationshaftung der Vorstände von Aktiengesellschaften in Deutschland und Spanien

geb. | 978-3-631-60099-3 | 2010. 304 S. | €D 59.95

Band 39

Franziska Hohlers

Der Vertragsschluss im e-Commerce nach deutschem und spanischem Recht

Unter besonderer Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben zu den Informationspflichten

geb. | 978-3-631-61092-3 | 2010. 205 S. | €D 56.95

Band 38

Florian Michallik

Instrumentarien zur Steuerung von Einzelhandel in Deutschland und Spanien

Ein Beitrag zu nachhaltiger Raum- und Stadtentwicklung

geb. | 978-3-631-61079-4 | 2010. 409 S. | €D 86.95



Band 37

Katharina Grüter

Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung bei der spanischen Sociedad de Responsabilidad Limitada und der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

geb. | 978-3-631-61338-2 | 2010. 216 S. | €^D 56.95

eBook | 978-3-653-00391-8 | 2010. 216 S. | €^D 63.30

Band 36

Ingo Robert Müller

Spanisches Anwaltshaftungsrecht

geb. | 978-3-631-60965-1 | 2010. XXX, 406 S. | €^D 92.95

eBook | 978-3-653-00425-0 | 2010. XXX, 406 S. | €^D 103.41

Band 35

Hendrik R. Bott

Absicherung der Mängelrechte im spanischen Bauvertragsrecht unter rechtsvergleichenden Aspekten

Eine Untersuchung der Rechtsverhältnisse zwischen Besteller und Unternehmer

geb. | 978-3-631-60483-0 | 2010. 181 S. | €^D 53.95

eBook | 978-3-653-00303-1 | 2010. 181 S. | €^D 59.98

Band 34

Alexander Tacer

Die territoriale Struktur Spaniens

Der Weg zum asymmetrischen Föderalismus

geb. | 978-3-631-59882-5 | 2010. XX, 433 S. | €^D 96.95

Band 33

Marc André Gimmy · Deutsch-Spanische Juristenvereinigung /

Asociación Hispano-Alemana de Juristas (Hrsg./eds.)

Festschrift 25 Jahre Deutsch-Spanische

Juristenvereinigung

Conmemoración de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas

geb. | 978-3-631-59053-9 | 2009. 205 S. | €^D 49.95

Band 32

Volkart Tresselt

Die Rechtsstellung des Verwalters einer spanischen Responsabilidad de Limitada und des Geschäftsführers einer deutschen GmbH im Rechtsvergleich

geb. | 978-3-631-58621-1 | 2009. 327 S. | €^D 74.95

Band 31

Anna Schaefer

Das autonome internationale Insolvenzrecht Spaniens im Vergleich zum deutschen Recht

br. | 978-3-631-58024-0 | 2009. CVIII, 420 S. | €^D 65.95

Band 30

Sebastian Schalk

Deutsche Präjudizien und spanische «Jurisprudencia» des Zivilrechts

Eine vergleichende Gegenüberstellung

br. | 978-3-631-58561-0 | 2009. CVIII, 420 S. | €^D 98.95

Band 29

Tobias Rösner

Verlust des Stammkapitals und Geschäftsführerhaftung in der GmbH

Ein deutsch-spanischer Rechtsvergleich

br. | 978-3-631-57710-3 | 2009. XXX, 184 S. | €^D 49.95

Band 28

Annemarie Hofedank

Arbeitsmarkt und Kündigungsschutz in Spanien

br. | 978-3-631-58229-9 | 2009. XLVI, 280 S., zahlr. Abb. und Tab. | €^D 70.95

Band 27

Thomas M. Manssdorfer · Susana Navas Navarro

Spanisches Haftungs- und Versicherungsrecht

br. | 978-3-631-55193-6 | 2008. 146 S. | €^D 37.95

Band 26

Thomas Kaiser

Steuerliche Gewinnermittlung in Spanien und Deutschland

br. | 978-3-631-58074-5 | 2008. XVI, 276 S. | €^D 67.95

Band 25

Janire Mimentza

Der Auskunftsanspruch im deutschen und spanischen Markenrecht

Vor dem Hintergrund der europäischen Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

br. | 978-3-631-56764-7 | 2008. 155 S. | €^D 46.95

Unsere Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich zuzüglich Versandspesen. Preisänderungen bleiben vorbehalten. An Bibliotheken liefern wir mit 5% Rabatt. €^D inkl. MWSt. – gültig für Deutschland und Kunden in der EU ohne USt-IdNr.

